

REVISTA MENSUAL

Análisis de Coyuntura

JULIO DE 2011

AÑO X • Nº 133

CINCO PESOS

ISSN 1669-9122



Turbulencias

Los enfrentamientos en los planos económico, militar, político y social tienden, cada vez más., a mostrar su naturaleza única: el carácter social de los conflictos y el agotamiento sistémico sin posibilidad aún, de respuestas visibles que superen la actual situación.

EQUIPO DE TRABAJO

Redacción: Claudio Adrianzén Bei, José María Dunn, Sebastián Juncal, Julián Kan, Pablo Lombardi, Sebastián Ortiz, María Florencia Socoloff, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak.

Director: Sebastián Ortiz

Corrección: Martín Yuchak y Claudio Adrianzén Bei.

Dibujo de tapa: Fernando Gatti.

Responsable de la publicación:
Alejandro Viegas.

Página web:
www.analisisdecoyuntura.com.ar

Para contactarnos:
informecon@yahoo.com.ar

Fuentes consultadas: EE.UU.: *Wall Street Journal* (WSJ), *New York Times* (NYT); *Washington Post* (WP); *Usa Today* (UT). – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LJdM) – Venezuela: *El Universal* (EUu) – Colombia: *El Tiempo* (ET) – Bolivia: *Los Tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT-FSP) – Uruguay: *La República* (LR) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN); *Página 12* (P12); *Crónica* (CR)

Turbulencias

3. *Europa y EE.UU. como escenarios de la lucha intercapital.*

Clases de lucha

11. *Oriente medio y Latinoamérica*

La lucha por la autodeterminación

19. *La oligarquía apuesta a perforar los 40 puntos de Cristina.*

Intentando moverle el piso

23. *Desestabilización y batalla ideológica*

Golpes de efecto

Revista Mensual

Análisis de Coyuntura

JULIO DE 2011
AÑO X • N° 133
ISSN 1669-9122

Clases de lucha

Por Diego Tavormina

“Lucha de clases, no guerra civil”

Consigna del movimiento de protesta social en Grecia

En los últimos meses Europa se convirtió en uno de los principales escenarios donde las distintas fracciones del capital más concentrado a escala mundial aparecieron claramente enfrentadas disputándose el control de los territorios sociales y, en última instancia, la capacidad para imponer un orden global en donde una de las fracciones se reproduzca en escala ampliada y las otras se subordinen y, finalmente, expiren. La brutalidad de la lucha intercapital se explica por la situación de crisis crónica del régimen capitalista. Es decir, por la imposibilidad que presentan todas esas fracciones de capital de reproducirse y ampliar su dominio sobre los mercados sin colisionar entre sí. A partir de la resolución de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo del capital se realizó mediante el consumo desmedido por parte de los mercados de los países centrales y, en menor medida, de algunas zonas periféricas (en América Latina y Asia) sobre la base de un sistema de créditos que parecía interminable. En este proceso los capitales medios o menos concentrados a escala global perecieron entre las fauces de los grupos monopolísticos concentrados (grupos financieros transnacionales) que al innovar en tecnología y controlando saberes estratégicos en materia de productividad ganaron en competitividad. Este proceso de concentración feroz dejó en los países dependientes primero, y en los propios países centrales más tarde, un tendal de desocupados y marginados. Esto redundó en un achicamiento de la capacidad de consumir de los mercados que se sostuvo amplificando el sistema de créditos a tasa cero y fue fomentado por una ideología consumista-individualista. La caída del Muro y la valla de contención que suponía el bloque soviético profundizó a escala planetaria este desorbitado proceso de reproducción del capital sobre la generación de burbujas sucesivas (deuda y especulación financiera) cada vez más grandes. En el 2008 la crisis explotó en la cara de los países centrales: EE.UU. y Europa occidental. A la hora de cobrar el inmenso cúmulo de mercancías vendidas a crédito durante décadas los grandes grupos monopolísticos cayeron en la cuenta de que las deudas eran incobrables. La respuesta que pudieron dar los cuadros políticos y económicos de los bloques dominantes fue rescatar la deuda... con más deuda. El enfrentamiento por quién va a pagar esos compromisos tiene por protagonistas a los bloques de capital norteamericano, angloamericano y franco-alemán, las tres fracciones con presencia, aunque en grados de desarrollo distintos, en todas las regiones del mundo; además de un experimentado e indignado movimiento obrero y popular que es empujado a la calle.

La frase citada como epígrafe da cuenta, no del ideal que conduce la protesta europea sino, de la búsqueda por

parte de esa movilización espontánea, en su historia profunda de lucha, de una orientación política que dé salida al colapso del régimen. Hasta el momento la clase obrera europea no logra despabilarse, tras largas décadas de haber participado como beneficiaria del reparto del mundo por parte de las potencias imperiales, más que de manera espasmódica y fragmentada.

La fracción de capital angloamericana, conciente de esta falta de conducción del movimiento de masas, (su carencia de un programa de la clase obrera), empuja la conflictividad para desestabilizar el frente europeo y, tras la tierra arrasada, controlar el territorio social.

Grecia, aparta de mí este cáliz

El mes de junio tuvo como epicentro una serie encadenada de hechos que se desplegaron en este país de la “periferia europea” como momentos de la lucha intercapital: presiones políticas, intentos de golpe financiero, realineamientos globales, furiosa protesta social.

La fracción de capital angloamericana jugó a precipitar el default griego, golpear a sus principales acreedores que son Francia y Alemania, extender la crisis económica al resto de los países periféricos de la UE (Portugal, Irlanda, pero esencialmente hacia España, difícilmente rescatable dada la magnitud de su PBI), romper el acuerdo político y económico del eurobloque, y liquidar la moneda común euro. Esto último, y en tanto fracción de capital con mayor grado de expansión global (no sólo en lo cuantitativo- como cantidades de territorios controlados- sino en cuanto a lo cualitativo - mediante el control de sectores-saberes estratégicos-), con el objetivo de imponer una *moneda mundial* sobre el euro, el dólar y el proyecto de canasta de monedas (cuyo valor sería el promedio de distintas divisas), que le permita acceder al control de esa reserva de valor que es la moneda y así dominar los resortes que determinan el costo del dinero (créditos, préstamos) que deberán pagar las otras fracciones de capital, ahora sometidas a la política monetaria y crediticia de quienes emiten y fijan la moneda única.

Con esto las acciones de la red financiera global angloamericana se orientaron a golpear a quienes disputan su hegemonía a escala global: el eje francés-alemán cuyo territorio de dominio inmediato es Europa pero tiene proyección en oriente: Asia, mundo árabe. El ataque fue dirigido a los grupos concentrados alemanes: los únicos capaces de competir a escala mundial con los capitales angloamericanos y norteamericanos, en materia de aplicación tecnológica a la producción de bienes de capital estratégicos (que controlan el tiempo social de produc-

ción de otros bienes de capital y de los bienes de consumo).

Sobre finales de junio un actor de peso intervino en esta contienda: China reforzó el acuerdo con el eje franco-alemán, respaldando a los acreedores europeos (y a la moneda común europea). Se profundizaba así el acuerdo BRIC-UE, interbloque capaz de enfrentar a escala global a la fracción angloamericana y a la hegemonía imperial de EE.UU.

El Estado griego tiene una deuda de 481.500 millones de dólares, más de 43.000 euros por habitante de una población de 11,3 millones de personas; deuda que equivale al 150% de su PBI. Esta situación de fragilidad fue aprovechada por la fracción angloamericana. Su objetivo: golpear el eslabón débil del grupo euro.

Cabe realizar una crónica de los hechos en torno a la crisis griega y consignar los distintos posicionamientos de las expresiones políticas y económicas de las fracciones de capital más concentrado del mundo ferozmente enfrentadas entre sí.

Apenas iniciado el mes, las calificadoras de EE.UU. operaron para desestabilizar la frágil economía griega. Mientras Francia y Alemania discutían los términos del segundo rescate financiero a Grecia, es decir los términos del plan de ajuste y austeridad brutal que el gobierno griego deberá aplicar para obtener el salvataje; la calificadora de riesgo Moody's degradó la deuda griega, bajando el nivel de su calificación (de B1 a Caa1) señalando que el país se acercaba al default. De esta manera quedaban desacreditados y devaluados los papeles de deuda del Estado griego en moneda local y extranjera en el mercado financiero. Como parte de la operación desestabilizadora Moody's advirtió que seguiría descalificando la deuda griega y alertaba en un comunicado: *"el aumento del riesgo de que Grecia no logre estabilizar su endeudamiento sin una reestructuración de su deuda"*. Moody's, como expresión de los intereses angloamericanos, empujaba de esta manera a un default griego (LN 2/6). Ese mismo día el euro caía frente al dólar un 0,5%.

Acto seguido, la Unión Europea y el Banco Central Europeo (donde Alemania conduce) reforzaron las presiones para imponerle al gobierno griego del primer ministro socialista, Giorgios Papandreu, un programa económico que contiene dos puntos fundamentales. El primero es un profundo plan de ajuste fiscal basado en la suba de impuestos regresivos (al consumo directo, que afecta principalmente a los trabajadores); en la aplicación de reformas a la ley laboral en clave flexibilizadora: reducción de salarios y de indemnizaciones, preparando despidos generalizados; y en un achicamiento del gasto público que también afecta directamente a los trabajadores estatales (despidos, empeoramiento de las condiciones salariales y laborales). Esto permitiría dirigir hacia los acreedores unos 40.000 millones de dólares entre 2012 y 2015. Cabe señalar que los principales acreedores en Grecia son las bancas alemana y francesa; ambas poseen el 64% de la deuda griega y concentran el 82% de los fondos de inversión en ese país.

El segundo punto involucra un esquema de privatizaciones supervisadas por los organismos internacionales con el que se prevé recaudar 70.000 millones de dólares; el BCE calcula que Grecia tiene 420.000 millones de dólares en activos públicos con lo que, aplicando un riguroso plan de privatizaciones, el gobierno podrá reducir la deuda del Estado. La privatización no es otra cosa que la avanzada de los capitales alemanes y franceses sobre los activos públicos en manos de capitales medios de los países débiles europeos, en este caso de Grecia.

Una vez aplicado este plan de austeridad brutal, las potencias europeas liberarían el quino tramo de 12.000 millones de dólares correspondiente al préstamo de 158.000 millones acordado para Grecia el año pasado. Se evitaría el default griego, aunque no la radicalidad de la protesta social que rechazó en las calles la aprobación del programa antipopular.

Bajo presión de la UE el gobierno griego se dispuso a aprobar dicho programa, en el que el plan de privatizaciones será realizado bajo control internacional de la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE). El evidente control político externo sobre la economía griega llevó a Papandreu a reconocer que la recuperación del país requería *"una renuncia parcial de soberanía"* (LN 16/6). Para que no queden dudas sobre el obligado renunciamento a su soberanía política, y con el argumento de garantizar la aplicación del tremendo ajuste y plan privatizador, Grecia quedaba bajo "tutela" de un consejo formado por tres representantes correspondientes a la UE, el BCE y el FMI.

Tal fue la embestida sobre la soberanía de los estados nacionales (Grecia) por parte de las fracciones de capital global, en este caso del bloque franco-alemán, el cual avanzaba en la aplicación de un férreo control sobre los países cuya situación económica es sumamente frágil (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, peyorativamente denominados "PIIGS", "cerdos" en inglés); y en la apropiación de ricos activos que aún están en manos de capitales de dichos países o bajo la órbita de sus estados nacionales. Y de esta manera evitar que el desmadre genere un terremoto económico y político en el corazón del continente tras el cual, la fracción de capital franco-alemana quedara totalmente subordinada al orden del capital angloamericano.

El peligro de la avanzada angloamericana sobre el eje franco-alemán en el territorio europeo quedaba manifiesto en otra frase de Papandreu: *"Europa hará historia o la historia barrerá a la Unión Europea"* (P12 17/6). Claro que "hacer historia" significa que los eslabones más débiles de la UE abandonen su soberanía y los pueblos renuncien a las comodidades del carcomido estado de bienestar organizado en la segunda pos guerra.

Mientras el partido en el gobierno conseguía el compromiso del Parlamento para avanzar en el plan de ajuste (2012-2015) y al tiempo que un consejo de ministros aprobaba, en articulación con la decisión parlamentaria, la venta de activos estatales por 110.000 millones de dólares, la calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) bajaba tres escalones la nota de solvencia de Gre-

cia, de "B" a "CCC" considerando la casi inevitable situación de cesación de pagos y colocando a dicho país en el último de la tabla, debajo de Zambia, Líbano, Camerún y Ghana.

Desde S&P se afirmaba que *"Cada vez son más las posibilidades de que Grecia reestructure su deuda y eso resultará en lo que en nuestro criterio será uno o varios defaults. También creemos que la instrumentación del programa de préstamos entre Grecia, la UE y el FMI es cada vez más riesgosa, por las crecientes necesidades financieras de Grecia y por los enfrentamientos políticos sobre las medidas y garantías que piden los acreedores."* (LN 16/6).

Jugando con fuego

Las operaciones de las calificadoras norteamericanas mellaban las negociaciones al interior del eurogrupo. Las reuniones de ministros de Economía y Finanzas de los 17 países de la zona euro (Ecofin) fracasaban sucesivamente a la hora de acordar los términos del rescate de Grecia, esencialmente debido a la diferencia sobre la participación del sector privado (bancos privados, compañías de seguros y fondos de pensión) en el pago de los costos de la crisis griega. Alemania, esencialmente en la voz de su canciller, Ángela Merkel, presionaba para que los capitales privados acreedores de Grecia, asuman una reestructuración de la deuda y se hagan cargo de una parte de los platos rotos. *"Queremos una participación de los acreedores sobre una base voluntaria. Insisto en lo de la base voluntaria"* (P12 18/6), afirmaba Merkel en Berlín. El proyecto suponía que los bancos y fondos de inversión privados acepten refinanciar sus papeles de deuda griega por nuevos compromisos de pagos, es decir refinanciar la deuda con más deuda a cobrar en un futuro cada vez más incierto. Su insistencia sobre la condición voluntaria de la participación de los capitales privados en el salvataje es esencial para evitar la desconfianza que generaría una reestructuración forzosa de la deuda y la posibilidad de una "corrida" que hundiría el sistema financiero griego.

Francia acordaba con esta posición, pero agregaba un matiz: que los bancos y fondos de inversión reinviertan en nuevos papeles griegos un 70% de la deuda reembolsada por Atenas, disponiendo sin condiciones del 30% restante.

Merkel expresaba lo que la cadena mediática alemana ZDF hacía público a principios de mes: que el 60% de los alemanes se oponen a que la UE otorgue nuevos préstamos a Grecia. Analistas de los encuestadoras alemanas, como Peter Matuschek del instituto Forsa, advertían las dificultades en el frente interno alemán: *"Los ciudadanos alemanes son más escépticos que hace un año ante la moneda común única"* (P12 25/6). La presión interna contra el euro (objetivamente a favor del dólar) volvía a llegar desde la prensa escrita. Uno de los semanarios más influyentes de Alemania, Der Spiegel, anunciaba en una de sus tapas: *"Súbita y anunciada: oración fúnebre por una moneda común". "¿Cuánto tiempo van a tolerar los electores de los países acreedores que sus gobiernos asuman riesgos cada vez más altos para salvar al euro?"*. El texto era acompañado por la imagen de un ataúd cubierto con una bandera griega.

Ángela Merkel respondía a las presiones, especialmente a las calificadoras de riesgo, que empujaban el default griego: *"Nadie en este mundo nos obliga a creer los cálculos de las agencias"* (P12 25/6).

Los capitales privados acreedores de Grecia, aceptaban la propuesta de Merkel, aunque hacían manifiesto su carácter coercitivo; tales las palabras del presidente del Deutsche Bank, Josef Ackermann: *"Propondremos algo, no porque nos guste, sino para [...] evitar una fusión nuclear, que supondría para Europa una bancarrota de Grecia"*. Por su parte la Federación de Bancos Públicos de Alemania insistía en que haya una garantía pública para hacerse cargo de nueva deuda griega; moción que recibió el rechazo frontal del gobierno alemán.

Más refractarias al acuerdo fueron las aseguradoras y fondos de inversión acreedores del Estado heleno: *"No veo por qué razón alguien querría hacer una operación de esa naturaleza si tiene la posibilidad de elegir"*, advirtió Gary Jenkins del banco de inversiones Evolution Securities. *"Los únicos interesados en ese plan pueden ser los bancos alemanes, franceses y griegos que están extremadamente expuestos"* (LN 30/6).

La ministra de Economía española, Elena Salgado se alineaba con la posición franco-alemana: *"La razón de la implicación del sector privado no es que sean necesarios incentivos, sino la idea de muchos países de que el sector privado debe también asumir una parte de los problemas que en este momento tiene Grecia"* (P12 20/6).

En medio de los tironeos para que los capitales privados soporten parte del costo de la crisis, el presidente del Ecofin, Jean-Claude Juncker, advirtió que la presión sobre la banca y los fondos de inversión sería considerado una "moratoria" de pagos por las calificadoras de riesgos, con consecuencias muy difíciles y duras para el resto de Europa y para la moneda única. *"Estamos jugando con fuego. La caída puede contagiar a Portugal e Irlanda y, debido a su alto endeudamiento, a Bélgica e Italia, incluso antes que a España"* (LN 19/6). El desmadre de las finanzas italianas e incluso de Bélgica sumada al colapso de los "PIGS" haría irremediable la subordinación del eje Berlín-París a los requerimientos angloamericanos.

Los desacuerdos en el bloque europeo y la indisposición de los capitales privados generaron un abanico de presiones para que el plan de austeridad griego y su salvataje se apliquen de manera urgente: *"Esperamos una decisión del Parlamento griego, por eso llamamos no sólo al gobierno sino también a la oposición a apoyar el plan de austeridad"*, declaraba el ministro de Finanzas belga, Didier Reynders (LN 21/6). En Italia, el canciller Franco Frattini apuraba en el mismo sentido: *"No intervenir en favor de Grecia puede entrañar riesgos para toda Europa. Ningún país quedará excluido de verse expuesto a una crisis de credibilidad"* (P12 23/6).

Por su parte el BCE, poseedor de 50.000 millones de euros en bonos griegos y que ha prestado otros 90.000 millones de euros a los bancos griegos, advertía que frente a una eventual reestructuración de la deuda, es decir ante la aceptación de un default parcial, dejaría de aceptar papeles de dicho país. Con esto el BCE expresaba el rechazo de los bancos centrales de los países del bloque

euro a ser los únicos pagadores de la crisis y amenazaba con hundir al sistema bancario griego.

Buscando un símbolo de paz

Sin duda, uno de los hechos centrales del mes de junio fue la visita oficial de Ángela Merkel por tres días a EE.UU. La reunión bilateral Alemania-EE.UU. en Washington a principios de mes expresó la necesidad alemana de encontrar un acuerdo político con la fracción globalista angloamericana expresada políticamente por Barak Obama, y con esto atemperar el ataque yanqui. Conciente de los riesgos de un desmadre europeo para el régimen capitalista global, Obama afirmó frente a Merkel que "sería para nosotros desastroso ver una espiral incontrolable de default en Europa" (P12 8/6).

El despliegue de pompa fue seguido por largas conversaciones entre ambos mandatarios sobre el comercio, el proceso de paz en Medio Oriente, Libia y el compromiso de Alemania en Afganistán, especialmente sobre pasos conjuntos. Claramente la negociación incluyó un tema que es fuente de preocupaciones para EE.UU.: la expansión del eje franco-alemán sobre el territorio asiático. Sin



duda también se negociaría la permanencia de la conducción europea del FMI, tras la eyección política del francés Strauss-Kahn (y precandidato a presidente por el Partido Socialista). Strauss-Kahn se proponía impulsar la creación de una moneda mundial que rija en los intercambios internacionales, disputándole ese territorio al

dólar. El golpe contra Kahn en el corazón de Nueva York imposibilitó el avance de esa línea. De todas maneras su reemplazo quedaría en manos del núcleo franco-alemán: la ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde, del partido de Sary, fue designada para conducir durante los próximos cinco años el FMI. Quien fuera una de las responsables del diseño de los planes de ajuste para los países europeos, recibió el apoyo de las representaciones de China, Brasil, Rusia y Argentina por sobre el mexicano Agustín Carstens, quien había expresado un discurso de alineamiento directo con los capitales norteamericanos y la hegemonía yanqui en el Fondo.

Tras la visita germana, el bloque de capital norteamericano-yanqui presionaba a Obama para que el FMI no intervenga en el salvataje a Grecia y se magnifique la crisis en Europa. Así, en una carta al presidente, los senadores John Cornyn y David Vitter, del partido Republicano – expresión política de la fracción de capital yanqui– lo exhortaron a que se oponga "activa y enérgicamente" a que el FMI rescate a Grecia. "Buscamos impedir que el dinero de los contribuyentes sea usado por el FMI para financiar a países extranjeros que tomaron decisiones de gasto irresponsables" (LN 15/6) decía el documento de marras.

En la misma línea se posicionó el primer ministro británico, líder del partido conservador David Cameron, pronunciándose en contra del uso de dinero público de su país para un segundo rescate a Grecia, defendiendo su posición de no participar en la zona euro (P12 22/6).

Embarrando una vez más el acuerdo de los países europeos y los acreedores privados, la calificadora financiera Standard & Poor's en la voz de su jefe de calificaciones soberanas, Moritz Kraemer declaraba: "Experiencias pasadas muestran que una reestructuración de deuda de un país cuya capacidad de pago está calificada como «CCC», como Grecia actualmente, tiende a no ser voluntaria y los inversionistas deben sufrir pérdidas" (LN 21/6).

Frente a la radicalización de la protesta social y el desacuerdo parlamentario en Grecia (Antonis Samaras, líder del partido conservador Nueva Democracia anticipaba que su partido, que controla un bloque de 86 diputados, votaría en contra de las medidas de ajuste), la UE y el FMI redoblaron las presiones. "Estamos dispuestos a continuar apoyando a Grecia a condición de que se adopten las reformas de política económica prometidas", afirmaba a mitad de mes la vocera del Fondo, Caroline Atkinson. El FMI admitía tener preparado un desembolso por 17.000 millones de dólares, pero siempre a cambio de que Grecia acuerde el plan de ajuste. Le mostraba los billetes mientras batía el palo con la otra mano. En esas mismas jornadas representantes de la UE planteaban que el plan de ajuste debía ser inevitable aduciendo "no tenemos plan B" para Grecia (LN 17/6).

Merkel declaraba el ultimátum: "La oposición también debería apoyar al primer ministro griego y cumplir con sus obligaciones". (LN 18/6).

Para atemperar el incendio callejero (huelga, movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad) y las presiones conjuntas de la UE-BCE-FMI, el primer ministro griego realizaba un cambio de gabinete colocando a cuadros del núcleo duro del partido en el gobierno en puestos clave, como Evangelos Venizelos quien, nombrado nuevo ministro de Finanzas, declaraba que el gobierno aprobaría tanto el voto de confianza como las medidas de austeridad.

El día 21, en medio de una multitudinaria protesta popular, el Parlamento griego dio su voto de confianza al nuevo equipo gubernamental, requisito legal para que Papandreu avance con el plan de ajuste y se destrabe el paquete de ayuda financiera.

Sin embargo, los ministros de Finanzas del Eurogrupo reunidos en Luxemburgo suspendían su decisión de desbloquear la ayuda esperada por Atenas hasta el 3 de julio. El BCE, la UE y el FMI exigían ahora que el Parlamento griego vote primero el paquete entero de reformas y privatizaciones reclamado. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Olli Rehn, sintetizaba la posición extorsionadora argumentado que Europa "estaba dispuesta a ayudar a que Grecia vuelva a crecer, pero primero Grecia debe ayudarse a sí misma, de manera que los otros europeos puedan ayudar a Grecia. Ese es el mensaje final" (LN 24/6).

El derrotero griego era cantado: el día 29 el Parlamento aprobaba con mayoría ajustada (155 votos a favor contra 138), y a espaldas del pueblo movilizado, un plan de austeridad que incluyó 100.000 millones de dólares en medidas de ajuste y subas de impuestos entre 2011 y 2015; y la recaudación de unos 72.000 millones de dólares en materia de privatización de activos públicos.

El ajuste supone suprimir 150.000 empleos públicos, el 25 por ciento del total, lo que redundará en mayor desocupación a la ya altísima tasa del 17% de desempleados.

Los salarios, que habían sido recortados un 12% el año pasado, volverán a ser reducidos. Se eliminan prestaciones sociales, subvenciones, y con la fusión de escuelas, hospitales o cuarteles de policía se reduce el gasto sanitario y el gasto militar. También las inversiones públicas se reducen en 1200 millones para 2011. El plan estima una recaudación por 7200 millones de dólares a través de la venta del monopolio de apuestas y loterías OPAP, el Postbank, la empresa de gestión de aguas de Salónica, la segunda ciudad del país, y las empresas de gestión portuarias del Pireo y Salónica. Entre 2012 y 2015 percibirá otros 65.000 millones con la privatización de la empresa de gestión del agua de Atenas, refinerías, empresas eléctricas, el ATEbank -especializado en el sector agrícola-, así como la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas, derechos de explotación de minas y bienes muebles e inmuebles estatales.

El remate de los activos públicos de Grecia en manos de los capitales acreedores franco-alemanes era un hecho. El rígido control del gasto público, también. Todo el bloque europeo celebró y felicitó a Papandreu.

Sin embargo, conciente de la radicalizada protesta social y huelguística encabezada por un experimentado movimiento obrero como es el griego, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker alertó: *"Una cosa es aprobar una ley y otra cosa es aplicarla. Es evidente que hay que verificar que el texto que apruebe el Parlamento tenga una aplicación inmediata en la realidad griega"* (LN 25/6).

De acuerdo con recientes encuestas, el plan de ajuste es rechazado por tres cuartas partes de los griegos y, gracias a su oposición a los recortes, los conservadores sobrepasaron, en dos puntos porcentuales, la popularidad del oficialismo.

La guerra del cerdo

El FMI en su diagnóstico anual sobre España advirtió que la economía está frente a *"amenazas considerables"* cuya resolución exige un mayor esfuerzo en la reducción de los denominados *"costos fijos laborales"*. Tal es la solución que propone el Fondo para que el país ibérico pueda *"mejorar la credibilidad ante los mercados y atraer nuevos capitales"*: congelar salarios, bajar las indemnizaciones por despido y aplicar toda medida que aumente el grado de explotación de los trabajadores; sumado a una fuerte reducción del gasto público para achicar el déficit y la *"reestructuración completa del sistema financiero"*, con lo que aceleraría la quiebra de la fracción del capital menos concentrada vinculada a la burbuja hipotecaria.

El organismo, a su vez, destacó la necesidad de que dichas reformas cuenten con un *"amplio apoyo político y social"*, claro eufemismo que significa una exhortación al gobierno de Rodríguez Zapatero para que reprima la masiva protesta callejera que se enfrenta al paquete de medidas antipopulares (citas en LN 22/6).

Tras la presión directa del Fondo, de la UE y de los capitales españoles, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logró que el Parlamento aprobara el decreto-ley que flexibiliza las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores, que no es otra cosa que quitarle poder de fuego al movimiento sindical, fracturando las instancias de negociación con sus patronos mientras, como hemos dicho, se aplica un draconiano programa de desmantelamiento de las cómodas condiciones laborales y salariales.

Los millonarios rescates a Portugal no pudieron evitar la crisis interna a la hora de hacer frente en junio a un vencimiento de deuda por 13.600 millones de dólares. En abril ya había renunciado el primer ministro José Sócrates del Partido Socialista, luego de que se opusiera a aplicar un tremendo plan de ajuste con privatizaciones y despidos en masa incluidos; y que fuera exigido como a Grecia, por las potencias europeas a cambio de la entrega de otro "rescate" financiero. Patear la deuda para un futuro incierto también tuvo sus costos para el pueblo portugués.

Las elecciones, que fueron celebradas de manera anticipada en junio, dejaron en evidencia la tendencia creciente del denominado "voto castigo" contra el oficialismo. El Partido Social Demócrata (PSD), de centro derecha, ganó cómodamente en las elecciones legislativas en las que su candidato, Pedro Passos Coelho, obtuvo el 40,5% de los votos por sobre un 28,5% del partido de Sócrates. Quedaba garantizado el camino para la aplicación del plan de ajuste. Al ser nombrado Premier, Coelho anunció un programa de austeridad que incluso avanzará más allá de las exigencias del Fondo y la UE a cambio de 110.000 millones de dólares que llegarán a modo de "salvataje" para seguir haciendo frente a las deudas. En palabras de Coelho: *"Solo podremos recobrar el prestigio y la credibilidad en el exterior si podemos cumplir el programa que acordamos, pero también si somos capaces de ir más allá para dar una perspectiva de crecimiento y de creación de empleos a la economía portuguesa"* (LN 16/6).

En Inglaterra la crisis desató, como veremos más adelante, la huelga de trabajadores estatales más grande en los últimos 80 años. La reacción del capital fue por la línea del ajuste de los planes de seguridad social y desempleo, sostenida en un discurso fascista pronunciado por el premier David Cameron quien demonizó y criminalizó a los desocupados y trabajadores pobres. Cameron declaró *"incorrecto"* que aquellas familias *"que se resisten a obtener un empleo esperen que el erario británico financie sus estilos de vida sin límites"*; con lo cual anunció el fin de la *"cultura de dependencia"* que, según él, floreció bajo los gobiernos laboristas. La generación de estas ideas fuerza prepara el

estado de ánimo en un sector de la sociedad para que no reaccione ante el ajuste implacable que habrá necesariamente de aplicarse a los trabajadores desocupados e incluso a un sector de los ocupados. El discurso de Cameron expresa la necesidad urgente de dismantelar el apolillado estado de bienestar que mantuvo con subsidios, sostenidos por las superganancias de los capitales de los países imperialistas, a una desocupación latente en los mismos centros de la economía mundial.

Gran Bretaña destina 290.000 millones de dólares anuales para el pago de subsidios de desempleo, vivienda y manutención por hijo. El premier inglés remató: *"Hay gente que no toma ninguna responsabilidad y vive gratis en una vivienda social y tiene todos los hijos que quiere. Esto no está bien"* (LN 12/6).

A Estados Unidos no le fue mejor. El desempleo aumentó al 9,1%, alcanzando esta situación a 14 millones de personas y se calcula otro tanto con trabajos precarizados. Los datos dan cuenta de una caída en la creación de nuevo empleo: en mayo se crearon tan sólo 54.000 nuevos puestos, una cuarta parte de lo que venía sucediendo. Además en ellos prima la modalidad de contratos basura y precarización, al punto de que se habla de los "McJobs" (o "Mc trabajos", en referencia a la comida chatarra Mc Donlads).

El propio FMI lanzó una advertencia a los EE.UU. por *"la imprevisible consecuencia global de una agudización de la crisis fiscal"* en el país del norte; y caracterizó de *"insostenible"* la espiral de endeudamiento yanqui y el gigantesco doble déficit (comercial y fiscal). El informe del Fondo consignó que *"el principal desafío de política económica consistirá en realizar un esfuerzo considerable y duradero de consolidación fiscal"*. Para luego agregar: *"todavía no se completó el proceso de saneamiento bancario, con un nivel de rentabilidad aún bajo y una tendencia a acumular activos de riesgo"*, a lo que se suma el hecho de que el mercado hipotecario no se recupera y *"depende, en gran medida, del apoyo gubernamental"* (LN 30/6).

La agencia de calificación Moody's también lanzó su amenaza anunciando la posibilidad de poner en revisión las notas de EE.UU.

Las presiones potenciaron el debate entre republicanos y demócratas en torno al carácter del plan de ajuste. El desacuerdo impidió que, a lo largo del mes, ambas facciones políticas se pongan de acuerdo para aprobar en el Congreso la extensión del límite de endeudamiento público por sobre los 14,3 billones de dólares, sin lo cual una serie de gastos públicos no podrán afrontarse. En síntesis: aumentar la ya desorbitada deuda del estado yanqui.

Para la facción republicana la salida pasa por aplicar un programa de reducción del gasto en salud pública, educación y aumento de impuestos regresivos (que afectan a los trabajadores); para la facción que expresa Obama, la urgencia es eliminar subsidios y exenciones impositivas a grandes grupos económicos financieros vinculados al negocio petrolero, la industria militar y los laboratorios, base del bloque de capital norteamericano representado por la línea republicana-Bush.

Chubasco de ideas

El economista Nouriel Roubini, profesor en la Escuela Stern de Negocios de la Universidad de Nueva York, celebrado por haber previsto el estallido de la crisis financiera en EE.UU. desde las usinas intelectuales de los países centrales, se expidió sobre la agudización de la crisis mundial, advirtiendo la existencia de factores crónicos de la misma y la inevitable situación de estancamiento global.

"Los datos de Estados Unidos, el Reino Unido, la periferia de la eurozona, Japón e incluso las economías de los mercados emergentes están dando señales de que parte de la economía mundial puede estar estancándose, si es que no entrando en una recesión de doble caída. Los optimistas argumentan que la economía mundial ha dado con un 'pequeño bache'. Hay buenas razones para creer que estamos experimentando una caída persistente."

"Los factores que ralentizan el crecimiento de Estados Unidos son crónicos. Incluyen el desapalancamiento persistente del sector privado y público; el alza del petróleo; la débil creación de empleo; otra crisis en el mercado de la vivienda; problemas fiscales a nivel estatal y local, y una carga insostenible de deuda y déficit a nivel federal."

"El crecimiento se ha estancado en el Reino Unido durante los últimos dos trimestres, con una arremetida de austeridad fiscal en un momento en que la inflación está aumentando, lo que impide al Banco de Inglaterra flexibilizar la política monetaria. La inflación puede incluso obligarlo a elevar las tasas antes del otoño boreal. Y Japón vuelve a caer en recesión" (LN 26/6).

Roubini, además de caracterizar el turbio escenario de la economía mundial, intervino públicamente para golpear el frente articulado en el euro, el frente europeo comandado por Alemania. En un artículo publicado en el Financial Times proclamó que en Europa *"la reestructuración de la deuda se producirá; la cuestión es cuándo (más temprano o más tarde) y de qué manera (ordenada o desordenadamente)"*; empujando la salida del euro de los países débiles de Europa: *"La idea de salir del euro hoy es considerada inconcebible, incluso en Atenas y Lisboa. Pero escenarios que hoy son vistos como inconcebibles podrían no ser tan inverosímiles de aquí a cinco años, especialmente si algunas de las economías periféricas se estancan. Hay realmente sólo una salida para restaurar la competitividad y el crecimiento en la periferia: salir del euro, volver a las monedas nacionales y lograr una fuerte depreciación real y nominal"* (LN 14/6).

Por su parte el analista económico Jeffrey D. Sachs, profesor de Economía y director del Earth Institute en la Universidad de Columbia, publicado en el diario argentino La Nación, sentenciaba: *"Resulta irónico que la decadencia del poder americano en el mundo llegue a propiciar una cooperación regional más eficaz."*

"Los acontecimientos en Oriente Medio y en el Asia central reflejan la pérdida de la influencia de los Estados Unidos. De hecho, aún no desempeñó papel alguno en las revoluciones políticas que están en marcha en el mundo árabe y aún no ha reaccionado con una política clara ante ellas. Avanzamos hacia un mundo multipolar. El fin de la Guerra Fría no propició un mayor dominio de los Estados Unidos, sino la diseminación del poder mundial a muchas regiones. El Asia oriental, el Asia meridional, América latina y

Oriente Medio tienen una nueva influencia geopolítica y económica. Cada una de las regiones tendrá que asegurarse su propio futuro. Naturalmente, habrá de ser en un marco de cooperación entre las regiones y también dentro de ellas.

“También otras regiones descubrirán que la decadencia del poder de los Estados Unidos intensifica la urgencia de una mayor cooperación entre vecinos. Algunas de las mayores tensiones del mundo - India y Paquistán o Corea del Norte y Corea del Sur, por caso - deben desactivarse como parte de un fortalecimiento regional. Como demuestra la UE” (LN 5/6).

Intelectual de la línea globalista angloamericana, sentencia el fin de la hegemonía mundial yanqui (unipolar) y su reemplazo por un orden multipolar de “regiones articuladas”, organizado por la fracción de capital con mayor desarrollo global (angloamericana).

Y en eso llegó Wen...

A fin de ese atribulado mes, un visitante llegó con oxígeno bajo el brazo. Se trató del primer ministro chino Wen Jiabao, quien visitó a los países centrales de Europa para profundizar acuerdos económicos y, esencialmente, sostener a la golpeada moneda europea. En Hungría, que ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea, Jiabao afirmó: *“China es un inversor a largo plazo en los mercados europeos de deuda soberana. En los últimos años incrementamos en un margen considerable nuestras reservas de deuda pública. Vamos a seguir apoyando de forma consistente a Europa y al euro” (LN 29/6).*

El primer ministro chino ya había avanzado en abril con el acuerdo China-UE al anunciar la compra de deuda del estado español y al abrir las puertas a la adquisición de bancos españoles con problemas. En los últimos meses, Pekín compró también deuda a países de alto riesgo, como Irlanda, Portugal y Grecia. El avance de China en el territorio europeo expresa el acuerdo estratégico Alemania-bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y recientemente incorporado Sudáfrica) donde se combina la capacidad financiera del gigante asiático para respaldar al euro de los ataques yanquis y angloamericanos y la potencia tecnológica y productiva de Alemania, único país que puede competir a escala mundial con la maquinaria productiva norteamericana.

En rigor, el acuerdo denominado BRICS que nuclea a los países emergentes, subordinados al orden imperial occidental (EE.UU., Europa), surge gracias a la fractura de los bloques dominantes en dicho orden. En los boquetes del régimen avanza el BRICS alineándose con las distintas fracciones según le convenga, buscando acomodarse al nuevo reparto territorial sin avanzar con un programa alternativo al régimen capitalista global, sino tratando de acaparar nichos que le permitan subsistir. Sin duda, el desarrollo nuclear y el control de recursos energéticos ruso, la capacidad financiera y productiva en ascenso de China, el peso regional de Brasil en América Latina (fuente inagotable de recursos naturales) le dan al bloque un peso específico a la hora de negociar cuotas de mercado.

También en Londres, Wen ratificó varios acuerdos comerciales y fijó con Cameron el objetivo de que el

comercio entre ambos países alcance los 100.000 millones de dólares anuales en 2015. En la conferencia de prensa que ambos primeros ministros dieron, el premier inglés afirmó que *“China exporta ahora en una semana lo que antes exportaba en un año” (LN 29/6).*

En un artículo del diario español El País, vinculado al PSOE, (y publicado en la Argentina por La Nación) que da cuenta del viaje del premier chino, el cronista sintetizó la posición de los capitales europeos: *“China está invirtiendo en infraestructuras portuarias y de transporte, en especial en Italia y Grecia. Y quiere dar el salto tecnológico que en su día dieron países como Japón y Corea. Y Europa está encantada de ayudar. Aunque sea tapándose la nariz y mirando hacia otro lado las veces que haga falta. Se llama pragmatismo... y ha existido siempre” (LN 29/6).*

Todos los fuegos

“Estamos jugando con fuego”, advertía el presidente del Eurogrupo Jean-Claude Juncker, conciente de que la fractura en el bloque dominante, entre las fracciones del capital más concentradas del mundo, y el necesario ataque por parte de éstas sobre las políticas de estado de bienestar generan una protesta social masiva donde se agita, en algunos casos, al acomodado movimiento obrero, hasta el momento apoltronado en un privilegiado estándar de vida. El crecimiento de la desocupación, que llegó a un promedio por encima del 12% en la zona del euro (y que en las fracciones juveniles duplica esa tasa), la precarización creciente y el desmantelamiento a un ritmo cada vez más veloz del estado de bienestar, desató fuerzas populares dispuestas a combatir los planes de austeridad analizados más arriba. Aún sin participación de los movimientos obreros de los países centrales, y con un marcado contenido espontaneísta, el movimiento masivo de protesta escaló al ritmo de la irresoluble crisis económica. Este masivo movimiento de protesta sin orientación política clara, dinámico por su espontaneísmo, y que ocupó las calles, las plazas céntricas, los alrededores de los edificios públicos, que esgrachó a legisladores y chocó abiertamente con las fuerzas policiales, se desplegó en las principales ciudades de España, Inglaterra y Grecia. En estos dos últimos países sin duda se dieron los hechos más trascendentales del mes de junio, al haberse movilizado y realizado masivas huelgas nacionales los trabajadores sindicalmente organizados del sector público cuya protesta hizo temblar la tierra de la isla y el continente europeo.

Sin embargo, tal como dijimos más arriba, como el movimiento obrero disputa de manera fragmentada en los marcos de la lucha económica reivindicativa (contra ajustes salariales y sociales), sin conducir políticamente la protesta social, la iniciativa política que empuja precipitadamente el conflicto queda en manos de la fracción de capital más concentrada a escala global (angloamericana) de manera de desestabilizar el territorio del euro, generalizar un escenario de tierra arrasada y avanzar con sus tropas (capitales) para derrotar y subordinar a la fracción franco-alemana.

En Grecia, se desató una nueva ola de lucha donde confluyeron partidos opositores, sindicatos y desocupados que el año pasado, cuando Atenas acordó un rescate de 158.000 millones de dólares con el FMI y la UE, habían soportado una reducción de salarios y pensiones, así como el alza de impuestos.

Decenas de miles de trabajadores, desocupados, jubilados y jóvenes permanecieron concentrados varios días, desde fines de mayo hasta las primeras semanas de junio, en la plaza del centro político y administrativo de Atenas y otras ciudades del país. Al grito de *"Váyanse todos y llévense sus medidas de austeridad"*.

El mismo día en que los legisladores se aprestaban a aprobar un feroz plan de ajuste contra los trabajadores, grupos opositores lanzaban un plan de lucha que contaría con el acordonamiento del Parlamento para intentar evitar el ingreso de los parlamentarios y una serie de huelgas nacionales convocadas por los sindicatos.

En junio se realizaron la tercera y cuarta huelga general en lo que va del año. Una de ellas concluiría el día 15 con fuertes enfrentamientos con la policía, con la paralización de trenes, barcos y de la prensa, ya que participaron los periodistas de todos los medios. Permanecieron también cerrados los bancos, los ministerios, los servicios públicos, las guarderías y las empresas estatales en vías de privatización.

Además, durante varios días, amplias zonas del país amanecieron sin electricidad debido a la huelga de los empleados del sector enfrentados con la privatización de la empresa estatal de energía eléctrica (LN 22/6).

Los días 28 y 29 se desplegó la cuarta huelga general que paralizó los servicios de barcos, trenes, ómnibus, tranvías, subterráneos y aviones, además de las oficinas públicas, bancos y farmacias.

Las jornadas de paro general masivo, contaron con movilizaciones al centro político administrativo de Atenas y concluyeron con duros enfrentamientos contra la policía en la plaza Syntagma, a los que los medios describieron como verdaderas batallas campales. *"El gobierno ha declarado la guerra y debemos responderle de la misma manera"*, dijo Spyros Linardopoulos, un manifestante sindical (P12 29/6). La frase expresaba la disposición del pueblo griego a combatir en la calle el plan de ajuste que sancionaba un Parlamento fracturado y deslegitimado.

El estado de ánimo de la masiva y contundente protesta griega se puede sintetizar en la frase de Maria Damilakou historiadora griega para quien *"los países del sur de Europa creímos en una UE sin fronteras, sin pasaportes. Estamos cuestionando el éxito de la UE. Alemania nos quiere así: consumidores. Nos venden sus autos último modelo y a cambio esperan que les ofrezcamos nuestros hoteles y casas para veranear en nuestros países"* (P12 28/6).

En España también se produjeron fuertes movilizaciones en junio. *"Los empresarios hemos pedido al gobierno de la nación que decida una hoja de ruta y hemos puesto un ultimátum porque hasta aquí hemos llegado, y hasta aquí necesitamos normalizar la situación para que se desaloje. Hemos puesto una fecha tope, que tiene que ser muy inminente. Y puede ser que esa fecha sea entre el lunes y el martes próximo"*. Con estas palabras el pre-

sidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, sentaba la posición de los empresarios españoles: que el gobierno de Zapatero (PSOE) ponga fin a la protesta desatada y sostenida durante un mes contra el plan de ajuste, la desocupación y la corrupción política, protagonizada por decenas de miles de desocupados, jóvenes, jubilados, convocados y movilizados sin dirección, ni programa, pero con alarmantes consignas antisistema. Destacó por su dinámica y masividad un movimiento autodenominado "indignados", que se propuso impedir que el Parlamento Europeo apruebe el llamado "Pacto del Euro", el paquete de medidas de ajuste, privatización y flexibilidad laboral.

Después de ocupar las calles de los centros administrativos principalmente en Madrid, pero también en Barcelona y Valencia, y tras la represión de la policía que fue enfrentada por jóvenes y que dejó un contundente saldo de heridos, detenidos y la patética imagen de algunos diputados sesionando desde un helicóptero para evitar el escrache popular, el movimiento se orientó a los barrios.

"El movimiento ahora se está extendiendo por los barrios, donde la gente puede acudir una vez por semana a las asambleas vecinales para proponer ideas y promover la participación política y el diálogo intergeneracional. Involucrarse de lo micro a lo macro" afirmaban las convocatorias de los indignados (LN 16/6).

Promediando el mes de junio, jóvenes trabajadores, estudiantes, desocupados y jubilados realizaron una importante demostración de fuerza con multitudinarias marchas en todo el país que superaron las 90.000 personas en Madrid y las 100.000 en Barcelona. *"De Norte a Sur, de Este a Oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste"*; *"Caminemos juntos contra la crisis y el capital"*; *"Es una estafa, no es una crisis"*; *"Que no que no nos representan"*, fueron las consignas que se repitieron en las diferentes marchas realizadas en toda España, dejando en evidencia el carácter político de la crisis (LN 20/6).

En Gran Bretaña, el programa de recortes presupuestarios por 130.000 millones de dólares para 2015, que incluye elevar la edad de jubilación hasta los 66 años y la caída de 300.000 empleos, disparó la mayor huelga general de trabajadores estatales en más de 80 años. La misma afectó escuelas, medios de transporte y aduanas en todo el territorio británico. La capacidad de acatamiento y movilización quedó demostrada en las cifras: 750.000 empleados públicos, incluidos maestros, profesores, bibliotecarios, funcionarios judiciales y trabajadores de dependencias gubernamentales de fuerza se plegaron a la medida, la más grande desde 1926.

Queda abierto un horizonte oscuro en el corazón de la economía mundial. EE.UU. y Europa occidental se preparan para ser sacudidas por la rompiente de una nueva ola de esta crisis que desnuda los límites del régimen, el ilusorio fundamento sobre el que se ha venido reproduciendo en los últimos cuarenta años, en base a créditos e hipotecas burbujeantes, y la imposibilidad, hasta el momento, de constituirse un bloque hegemónico que subordine a las fracciones de capital más concentradas e imponga una nueva fase de calamidades para el resto de los continentes.

La lucha por la autodeterminación

Por Claudio Adriánzen Besi

Durante el mes de junio, los ataques de la OTAN contra territorio libio continuaron con persistente intensidad (sesenta bombas en un solo día sobre la capital, Trípoli, P12 8/6), en procura de lograr la salida del presidente Muammar Khadafy del gobierno, ya sea por medio de un exilio obligado o, mejor aún para los intereses de las potencias del norte, como cadáver ejemplar del poderío militar occidental. Pero, a pesar de la cantidad de bombas lanzadas y de las declaraciones altisonantes de figuras políticas principales como la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton (*“Los días de Khadafy están contados. Trabajamos con nuestros socios internacionales en el marco de la ONU para preparar lo inevitable: la Libia de la era posterior a Khadafy”*, LN 10/6), la fortaleza del líder árabe se mantuvo, al no perder el control de la ciudad cabecera e incluso conseguir éxitos militares como el derribamiento de un helicóptero de la OTAN en la zona de la ciudad costera de Zintan, dejando un saldo de 29 muertos y convirtiendo a aquel en el tercer vehículo aéreo abatido desde que la Alianza atlántica comenzó con su misión (P12 11/6). Al mismo tiempo, y al revés de los intereses del Imperio, las fisuras en el bloque atacante seguían profundizándose: *“Existe una alta posibilidad de un oscuro o triste futuro para la alianza transatlántica (...). La dura realidad es que habrá un apetito y paciencia cada vez menores en el Congreso de Estados Unidos para gastar fondos cada vez más preciados en nombre de naciones que aparentemente no están dispuestas a destinar los recursos necesarios o hacer los cambios necesarios para ser socios serios y capaces en su propia defensa. (...) La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) corre el riesgo de caer en una irrelevancia militar colectiva”*, afirmaba en su último discurso, antes de abandonar el cargo, el secretario de Defensa estadounidense Robert Gates (LN 11/6).

La estrategia de los países que integran la OTAN – como señalábamos en el número anterior de esta revista (ver “Valores supremos” en *Análisis...* n° 132)– es negar la autodeterminación de los pueblos, trabajando en fomentar y/o crear fisuras socio-políticas al interior de aquellos países a los que se quiere doblegar, buscando justificar su intervención en nombre de la “defensa de los DD.HH.” de los pueblos –ante la supuesta violación de los mismos por parte de sus propios gobiernos– y de “valores de libertad universales”, que coinciden exclusivamente con las políticas de libre cambio occidentales. Pero, en dicha estrategia, que es común a la historia de las principales potencias mundiales, se pueden establecer distintos “medios” o, mejor dicho, diversas tácticas, relacionadas con los distintos sectores de poder que están detrás de las mismas. La primera de ellas, que ha venido dominando la política militar estadounidense en los últimos años –y que tenía cabal expresión estatal bajo los mandatos presidenciales de George W. Bush–, implica intervenciones militares con amplio despliegue de tro-

pas, ocupación efectiva y prolongada de los territorios en disputa y mando centralizado en los hombres del consejo militar norteamericano. El impulsor y principal beneficiado (económica y políticamente) de esta estrategia es el complejo tecnológico-militar con base en el territorio de los EEUU. Es el sector que se expresa más cabalmente en el ala “republicana” de la política estadounidense.

La otra postura conlleva la intervención militar a distancia (bombardeos, por ejemplo), el fomento de “guerrillas” internas o mercenarias que se sublevan ante su propio gobierno y negociación “diplomática” paralela, buscando, a su vez, hacer jugar a los organismos y tribunales “internacionales” que, dominados en gran medida por las mismas naciones que dirigen los ataques, “justifican” o “legalizan” las incursiones militares. Esta línea – que expresa al interior de Estados Unidos el presidente Obama y buena parte del ala “demócrata” de la política yanqui– coincide con la necesidad de hacer jugar al resto de las potencias mundiales en sus incursiones a países como, por ejemplo, los de Oriente Medio. Hay una necesidad común que, ante la crisis económica que ahoga sus presupuestos, los lleva a buscar adueñarse de los recursos naturales (combustibles, mayoritariamente) y asegurarse mercados cautivos para sostener la venta de su producción. A su vez, la dominación geoestratégica implica necesariamente también la expansión de una determinada ideología, coincidente, claro está, con aquellos “valores universales” de los que nos aleccionaba el presidente norteamericano durante su estadía en Gran Bretaña en el mes de mayo (ver “Valores supremos” en *Análisis...* n° 132). Esta vía de expansión, en el marco de una crisis de legitimidad mundial en aumento para los Estados Unidos (y también al interior del mismo país), conlleva a presionar a las naciones europeas más ricas para sumarse en cada nuevo frente de batalla. Pero, como señalaba el ahora ex secretario de Defensa R. Gates, el liderazgo estadounidense está debilitado, y de ahí su preocupación por el futuro de la OTAN. La unidad de acción está gravemente herida. El conflicto es claro: los países europeos, inmersos también en una crisis financiera que amenaza gravemente la existencia misma de su moneda y mercado comunes, no necesitan involucrarse, además, en otra larga y costosa incursión militar en Oriente Medio, de la cual el principal beneficiado sería, una vez más, Estados Unidos.

La estrategia europea es, en este sentido, más coincidente con la línea que expresa el presidente Obama e implica debilitar al régimen de Khadafy por medio de la acción diplomática, trabajando política, militar y económicamente con el sector “rebelde” que se organiza a través del Consejo Nacional de Transición (CNT), cuya fuerza reside en la ciudad oriental de Benghazi. Así, a los diez países que ya habían reconocido como “único inter-

locutor gubernamental válido” al CNT (Francia, Gran Bretaña, Italia, España y otros), se sumaron ahora Estados Unidos y Australia (LN 10/6), obligados a jugar también más a fondo las cartas “diplomáticas”. Como muestra de este conflicto, Noruega era uno de los aliados que, en la primera quincena del mes, amenazaba con retirar sus tropas de territorio libio. El país escandinavo no es, por el volumen de su economía y por el peso de su historia, uno de los ejes centrales militares europeos, con lo cual su rechazo a proseguir la incursión militar podía pasar desapercibido. Pero casi finalizado el mes llegaría un nuevo golpe a la unidad política de la OTAN: Italia, en la voz de su canciller, Franco Frattini, consideraba “*fundamental suspender las hostilidades para evitar la consolidación de una división en dos de Libia*” (LN y P12 23/6), pidiendo además la creación de un “corredor humanitario” para el ingreso de alimentos y medicinas en las ciudades sitiadas, como la capital Trípoli. El brote humanitario del gobierno de Berlusconi era exigido no sólo a causa de la profunda crisis financiera que azota al país mediterráneo, sino también porque el territorio libio, antigua colonia italiana, sigue siendo uno de los destinatarios centrales de su intercambio comercial con el mundo árabe.

La propuesta italiana profundizaba aún más las disidencias europeas. Francia y Gran Bretaña, cabezas de la intervención militar por intermedio de la OTAN, hacían saber su desacuerdo con el alto al fuego, en palabras del vocero de la cancillería francesa, Bernard Valero: “*La coalición y los países reunidos en el grupo de contacto de Abu Dhabi, hace dos semanas, fueron unánimes en la estrategia a seguir: es necesario incrementar las presiones sobre Khadafy*”, y del secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, quien aseguró que la alianza “*continuará su misión*” para evitar que “*innumerables civiles pierdan la vida*” (LN 23/6). Estas caritativas palabras llegaban un par de días después de que muriera al menos una decena de personas (entre ellos dos niños) a causa del impacto “errado” de las bombas occidentales sobre un edificio de viviendas en la capital Libia. “*La Alianza para el Atlántico Norte [OTAN] lamenta la pérdida de vidas civiles inocentes y tiene mucho cuidado al realizar ataques contra un régimen que está decidido a aplicar la violencia contra sus propios ciudadanos*”, señaló Charles Bouchard, responsable de las operaciones en Libia (P12 20/6).

En respuesta a estas posturas que, enfrentadas y todo, coinciden en la necesidad de doblegar la autodeterminación de los países del otrora llamado “tercer mundo”, llegaba de la mano del alto comité de la Unión Africana la propuesta de entablar una mesa de negociaciones entre representantes del gobierno libio y los sectores insurgentes sin la presencia del presidente Khadafy, postura que habría sido acordada con él mismo. Como figura saliente de la Unión Africana, el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, encabeza las negociaciones con ambos sectores al interior de Libia, país al cual viajó en el mes de mayo, oponiéndose fehacientemente a la intervención de la OTAN. En ese sentido, al tiempo que presentaba la propuesta que podría posibilitar una salida negociada al

conflicto civil interno, prevenía sobre las graves consecuencias que acarrearía el magnicidio del líder libio por parte de las potencias occidentales, encubiertas bajo un oscuro manto de legalidad, y denunciaba que los bombardeos iban en contra de la propia resolución n° 1973 de la ONU, que expresaba la voluntad de proteger a la población civil: “*La resolución de la ONU sobre Libia no da potestad a llevar a cabo un cambio de régimen o un asesinato político*” (P12 27/6).

Luego de la propuesta africana, la respuesta de las potencias occidentales llegaba por medio de uno de sus resortes “legales”: la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya procedía a profundizar el asedio sobre la figura del presidente libio, decretando el pedido de captura internacional para él y su hijo Saif al-Islam, jefe de Inteligencia libio, por “*crímenes de lesa humanidad*”. Dicha resolución complica, una vez más, la posibilidad de una salida negociada, tal como proponía la Unión de países africanos. El círculo argumentativo aparecía en toda su debilidad cuando el canciller inglés, William Hague, argumentaba que el pedido de captura internacional era el basamento de la necesidad de derrocar a Khadafy, y justificaba implícitamente el accionar militar: “*Las órdenes de arresto demuestran además por qué Khadafy perdió toda legitimidad y por qué debe irse inmediatamente. Sus fuerzas siguen atacando a los libios sin piedad y esto debe detenerse*” (P12 28/6).

La resolución de la CPI está en concordancia con la política avalada desde la ONU en relación a la “obligación” de los países miembro de intervenir en otros países para “salvaguardar” a la población civil de las “violaciones de sus propios gobiernos”, extensión de la política norteamericana de intervención en otros países con la excusa de su propia “defensa nacional”, como ocurriera recientemente con la captura y asesinato de Osama Ben Laden en Paquistán, sin dar parte a las autoridades de ese país. En ese sentido se había manifestado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en una entrevista exclusiva que le realizó el diario argentino La Nación: “*Sabemos que en el pasado la ONU no fue lo suficientemente eficaz, lo suficientemente rápida, para proteger los derechos humanos, como hemos visto en Rwanda y en Srebrenica. Eso nos ha dado una buena lección. Y los líderes han adoptado un principio muy importante, el de la responsabilidad de proteger. Me alegro de que por primera vez el Consejo de Seguridad haya invocado el principio de la responsabilidad de proteger. Como secretario general, junto con el Consejo de Seguridad y los Estados miembro, siempre voy a tratar de sostener este principio*”. En la misma entrevista, adelantaba los pasos a seguir en pos de un nuevo conflicto (intervención) en otro país árabe, Siria, bajo el mismo justificativo de los “derechos humanos violados”: “*El Consejo de Seguridad, de manera muy activa y seria, está discutiendo qué tipo de acciones, qué curso de acción debería tomar [en Siria]. He hablado varias veces con el presidente sirio, Al-Assad, y el embajador, y voy a hablar de nuevo, para pedirle, urgirle a que escuche a su pueblo y que permita sin más demora una misión del Consejo de Derechos Humanos y equipos de evaluación humanitaria. Tenemos que proveer la asistencia necesaria a muchas personas que están heridas y entiendo que muchas, cientos de personas, miles de personas, han muerto allí. Estamos haciendo*

nuestro mejor esfuerzo.” (LN 12/6). Estas palabras llegaban pocos días después de que apareciera la denuncia por parte del gobierno israelí de “provocaciones” por parte de Siria en el disputado territorio conocido como Los Altos del Golán —que implicó un enfrentamiento armado en 1967, cuando Israel ocupó con ayuda norteamericana esa rica zona donde vivían palestinos—, luego de que una protesta de palestinos que piden por el retorno del territorio ocupado por Israel al estado palestino fuera reprimido por la milicia israelí con un saldo de al menos 20 muertos: “*Por desgracia, fuerzas extremistas a nuestro alrededor intentaron violar nuestras fronteras y amenazar a nuestras comunidades y ciudadanos. No les vamos a permitir que lo hagan*”, señalaba el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (LN 6/6).

En paralelo a la situación destada por los bombardeos a la autodeterminación libia, las potencias occidentales se veían obligadas, luego de la ejecución de Osama Ben Laden, a tomar medidas en relación a su intervención —que lleva ya diez años— en Afganistán. En ese sentido, el presidente estadounidense Barak Obama anunciaba el retiro paulatino de las tropas apostadas en dicho territorio: “*En la última década gastamos un billón de dólares en guerras, en un momento de creciente deuda y dura situación económica. Ahora nosotros debemos invertir en el recurso máspreciado de Estados Unidos: su gente*” (LN 23/6). España y Francia actuaban en concordancia. “*Con el presidente Obama hemos hecho el mismo análisis. La muerte de Bin Laden fue un golpe muy serio para los terroristas, la transferencia de las responsabilidades a los afganos funciona bien y la situación de seguridad en ciertas provincias mejora*”, señalaba Nicolás Sarkozy, aunque no podía precisar cifras ni fechas para la salida del país árabe: “[La retirada] *se hará de manera proporcional y en un calendario comparable al movimiento estadounidense*” (P12 25/6). Es decir, aún depende de lo que suceda con las tropas estadounidenses, país al mando de dicha invasión desde 2002, bajo el paraguas de la OTAN. Pero el retiro anunciado por Obama —al menos un tercio de los 99.000 soldados desplegados en Afganistán, hasta mitad de 2012—, veía un primer y gran escollo en sus propias fuerzas armadas y en los representantes del complejo tecnológico-militar. Luego del anuncio, hacía públicos sus reparos el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, quien calificó el anuncio de Obama como una salida “*precipitada*” de las tropas, hecho que “*pondría en peligro los progresos obtenidos*” en Afganistán (LN 23/6). Lo seguía el presidente del Comité de Servicios Armados, el republicano Howard McKeon, quien expresaba su oposición al plan de Obama: “*Necesitamos una estrategia diseñada para poner al enemigo contra las cuerdas, no para darle más aliento.*” Luego llegaba el turno del jefe del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, quien calificaba la estrategia como “*arriesgada*”. “*Los planes del presidente son más audaces y suponen un mayor riesgo de lo que yo estaba preparado para aceptar en un principio*”, señalaba Mullen, que dirige las tropas norteamericanas sobre el terreno. Subrayó, no obstante, que tanto él como el comandante en jefe en Afganistán, David Petraeus, “*apoyan por*

completo” el plan presentado por el presidente estadounidense (LN 24/6).

Como para echar tierra sobre los planes “*pacifistas*” del presidente y Premio Nobel de la Paz, sobre el final del mes un nuevo y espectacular atentado en el centro de Kabul, capital afgana, mostraba el grado de “control” del territorio por parte de la OTAN: supuestos miembros talibanes morían y daban muerte a por lo menos dos civiles y un diplomático canadiense, al hacer estallar varias bombas en el Hotel Intercontinental (P12 29/6).



Multilaterales: construyendo unidad

Mientras tanto, en Latinoamérica se profundizaban las medidas de unidad en torno a construir las bases de un desarrollo interno sostenido entre los mismos países del subcontinente, poniendo en el centro los temas energéticos, de desarrollo social y de defensa común, al tiempo que se pugnaba por un reconocimiento mundial al peso específico que significan las repúblicas americanas coordinadas en política interior y, más aun, exterior. En este sentido, durante junio se realizaron dos instancias que posibilitaron el desarrollo de estas líneas: una nueva reunión del G-20 en París, Francia, y una nueva cumbre del Mercosur hacia fin de mes. En el medio, se sucedió la primera reunión bilateral entre el presidente venezolano Hugo Chávez y la recientemente asumida primera mandataria de Brasil Dilma Roussef. Junto con ello, se posponía una cumbre de ministros de Economía y Finanzas de la Unasur, de cara al lanzamiento del Consejo de Economía y Finanzas del organismo regional, y se lograba avanzar en los borradores de varios acuerdos estratégicos que buscan: “*a) promover el intercambio regional en monedas locales, sustituyendo el uso del dólar; b) impulsar la formación de un fondo de contingencia que actúe, en el caso de ataques especulativos, en defensa de las monedas y economías de la región; c) articular el uso de reservas internacionales, promoviendo la autonomía financiera de la región; d) buscar mecanismos de canalización del aborro interno de los países de la región en favor de la capitalización de proyectos de inversión dentro de la misma área*” (P12 10/6). En este sentido, José Félix Rivas, director del Banco Central de Venezuela y representante de su país en temas económicos en la Unasur, opinaba: “*Por cómo se desarrolló la crisis mundial, a América latina le brindó un aprendizaje importante; una oportunidad para ponerse a pensar en mecanismos institucionales para enfrentar las crisis recurrentes, promover el desarrollo orientando el aborro interno, mirar con atención los movimientos especulativos que son un componente importante del auge de precios de nuestros commodities, los granos y el petróleo.*” Además, agregó como advertencia: “*Latinoamérica ha sabido enfrentar una situación crítica, pero no está exenta de*

nuevos ataques especulativos. Este es el momento de aprovechar la experiencia” (P12 10/6).

También se producía el retorno de Honduras como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de dos años del golpe de estado que destituyera al presidente Manuel “Mel” Zelaya. Esto posibilitaba la vuelta al país del ex presidente para ponerse al frente de una confluencia de fuerzas políticas que luchan por retornar a la senda que aquel había iniciado, de acercamiento a los países del ALBA y a sus políticas de desarrollo social sin injerencia externa, fundamentalmente estadounidense. Sin embargo, a pesar de las floridas palabras de reconciliación enunciadas por el presidente hondureño Lobo y, sobre todo, por el secretario de Estado norteamericano para asuntos de América latina, Arturo Valenzuela (“*Todos tenemos que estar orgullosos de lo que logramos en la OEA*”, P12 2/6), sobre finales de junio, ya retornado al trabajo político en su país, el depuesto Mel Zelaya denunciaba: “*Se llama Acuerdo para la Reconciliación, pero cómo puede haber reconciliación si se está persiguiendo a la oposición, si un sector de los que firmó está siendo perseguido y el otro (los que lo derrocaron de su gobierno hace dos años) está siendo protegido*” (P12 21/6).

Paralelamente, se terminaban de resolver las elecciones presidenciales en Perú, ganando la fórmula que lleva como cabeza al nacionalista Ollanta Humala, resistido por el “establishment” y los Estados Unidos, logrando derrotar a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, presidente “autogolpista” de la década de los ’90 que aplicara, junto con su par argentino Carlos Menem, todas y cada una de las recetas del Consenso de Washington en pos de subordinar la soberanía nacional de su país, a un costo alto para la mayoría de su población.

Como una primera muestra de este nuevo rol que va construyendo el subcontinente en el mundo, en los primeros días de junio la presidenta argentina Cristina Fernández viajaba en misión de negocios al viejo continente, luego de visitar la nación mexicana. Hizo escala en Italia, donde se entrevistó con el premier Silvio Berlusconi y con el presidente, el ex comunista Giorgio Napolitano. En el país mediterráneo, la presidenta denominó su visita como un “relanzamiento” de las relaciones del país con Italia, pero también explicó que este relanzamiento implica una nueva relación “regional”, donde el país y el resto del subcontinente americano pretenden jugar como pares con los países del norte, aprovechando la profundidad de la crisis por la que atraviesan las “potencias”: “*Vengan a la Argentina, vengan a conocernos, y más que leer los diarios —porque si leen los diarios por ahí se van a llevar una impresión equivocada— vayan a ver la oportunidad de negocios que hay y seguramente una vez más los italianos van a decidir, como lo decidieron hace muchos años, que la Argentina es un buen lugar para vivir y un buen lugar para invertir, (...) nosotros hablamos de agregar valor en origen, que es exactamente lo mismo que la regionalización, que consiste básicamente en que aquellas materias primas o productos que son típicos de determinada región sean transformados, agregando valor en ese lugar de origen*” (P12 2/6). Como parte de la visita, el premier Berlusconi y la presidenta Fernández suscribie-

ron un documento en el cual se destaca que “*Argentina tiene un rol importante en el seno del G-20*”, al tiempo que, como parte de los países que conforman el grupo Unidos por el Consenso —donde se agrupan las naciones que reclaman un cambio en el Consejo de Seguridad de la ONU—, declaraban que “*reafirman la voluntad de la Argentina y de Italia para continuar trabajando estrechamente en pos de una reforma viable y realista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que resulte en un Consejo más democrático, eficiente y representativo*” (P12 2/6). Cerrando la visita, el país conseguía otro reconocimiento por parte de Italia: le era cedido por más de veinte años el uso de un stand permanente para el arte argentino en la prestigiosa Bienal de Venecia. Ante esto, Cristina Fernández de Kirchner decía: “*En esta visita a Italia, en esta primera visita a Italia de un presidente, sentía que el último país al cual no podíamos venir, pese a todo lo que nos une histórica y culturalmente, también había caído*” (P12 4/6).

A su vez, durante la primera quincena se realizaba la primera reunión bilateral entre los presidentes de Brasil y Venezuela, por medio de la cual se sellaban acuerdos de desarrollo económico y social comunes, al tiempo que el país carioca conseguía un nuevo y explícito apoyo a su pretensión de lograr una modificación en el Consejo de Seguridad de la ONU, que permita la ampliación de los asientos permanentes (hoy son sólo cinco los países con “derecho de veto”: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China), para sentar ahí por primera vez a un país de los otrora denominados “tercermundistas”: “*Durante siglos nuestra mirada estuvo volcada hacia centros distantes de nuestra realidad. Puertos y ciudades litorales crecieron, mientras que el interior de Sudamérica seguía dormido. Queremos concretar todo el potencial de integración promocionando la ciudadanía y el bienestar de nuestros pueblos*”, señalaba Dilma Roussef. A la vez, Chávez remarcaba: “*Estamos creando y articulando un nuevo modelo de relación con Brasil, que no se limita a la competencia propia de los modelos neoliberales, sino que se trata de un modelo de cooperación y complementariedad económica que debe seguir fortaleciéndose, y los acuerdos suscritos hoy son muestra de ello (...). No queremos guerra, no queremos bombardeos, no queremos golpes de Estado. Estamos unidos, conscientes, integrándonos cada vez más*” (P12 7/6). Los mandatarios firmaron nuevos convenios de cooperación entre los dos gobiernos en los sectores de energía, ciencia y tecnología, agricultura y comercio, y otro que viabilizará un proyecto de construcción de viviendas populares en Venezuela, como continuación del programa “Mi casa, Mi vida”, lanzado en Brasil en el pasado gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El proyecto venezolano, bautizado “Misión Vivienda” y cuyo costo estimado es de 3.000 millones de dólares, tendrá apoyo técnico de Brasil y recibirá financiaciones de la petroquímica Braskem, del grupo Odebrecht. A su vez, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el organismo estatal de fomento de Brasil, firmó un contrato para financiar las obras de un astillero en Venezuela.

Junto con ello, Roussef lanzaba un plan estratégico de control fronterizo bajo mando militar, buscando elevar la cantidad de puestos de frontera de 21 a 49, y dejaba en

claro que era una medida que implica mayor unidad regional y no disputa: *“Tengo la certeza de que ésta no es una acción que apunta a transferir el problema de nuestra frontera a los países vecinos; por el contrario, apunta a construir con ellos una protección en la región fronteriza, donde conviven en forma armónica, sin guerra, sin conflictos, 10 países de nuestra América latina”* (LN 9/6).

Semanas después, durante una nueva Cumbre del Mercosur, la presidenta brasileña promovía más medidas de unidad y reaseguro regional frente al incremento de las presiones financieras desde los países centrales, sumergidos en la profunda crisis económica, luego de que en la cumbre del G-20 Europa sostuviera mantener sus enormes subsidios agrícolas como forma de protección individual: *“En los países del Mercosur debemos estar bien atentos a lo que pasa en el mundo. En este momento de excepcional crecimiento de la región identificamos que algunos socios de afuera buscan vendernos productos que no encuentran mercado en el mundo rico (...). Necesitamos avanzar en el desarrollo de mecanismos comunitarios que reequilibren la situación.”* A la vez, estaba presente el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien solicitó el ingreso de su país al grupo subregional, siguiendo los pasos de Venezuela. Además, el presidente de Uruguay, José Mujica, señaló los puntos que aún implican desigualdades al interior de la unidad regional, debilitando los objetivos estratégicos: *“Debemos luchar por que la burguesía paulista se haga cargo de generar empresas aliadas y no colonizadas en toda América del Sur, juntar a los empresarios (...). Brasil no tiene la culpa de ser tan grande ni nosotros tenemos la culpa de ser tan chicos, y a llorar y a quejarse al cuartito. Esto se arregla multiplicando los actores, el crecimiento no se equilibra con la lástima, por eso bienvenido [presidente de Ecuador] Rafael Correa, te estamos esperando”* (LN 30/6).

Cambio de marea en el Pacífico

En la primera semana de junio se terminaba de definir el futuro gobierno de Perú, luego de una primera vuelta donde el candidato nacionalista Ollanta Humala ganara las elecciones con el 31,7% de los votos válidos (sólo los positivos), debiendo disputar la instancia de balotaje con Keiko Fujimori, hija del ex presidente condenado a prisión perpetua Alberto Fujimori, quien obtenía el 23,5% de los votos válidos. En la instancia inicial —donde también se eligieron congresistas (el poder Legislativo peruano es unicameral y posee 130 asientos), autoridades regionales y departamentales (provincias)—, la coalición Gana Perú que encabeza Humala cosechó 47 congresistas y Fuerza 2011, de los Fujimori, 37. Esto dejaba a ambos obligados a tejer acuerdos para alcanzar la mayoría.

La segunda vuelta se realizó casi dos meses después, y ahí pudo Humala conseguir lo que no había logrado cinco años antes frente al presidente Alán García, histórico líder del APRA, cuando perdió en la misma instancia por escaso margen. Ahora la fuerza política comandada por el ex militar peruano (dirigente de dos sublevaciones armadas contra el gobierno de Alberto Fujimori en los años '90) obtuvo el 51,5% de los votos válidos, frente al 48,5% obtenido por Keiko. Sobre un padrón total de

19.949.915 electores, el porcentaje de ausentismo fue del 17,4%, produciéndose un incremento de cinco puntos en relación con la segunda vuelta de 2006, cuando el porcentaje de ausentismo había sido del 12,3%¹. Si, como solemos hacer en cada análisis electoral en esta revista, tomamos el total del padrón para evaluar los reales porcentajes de votos que cosechó cada fuerza política, tenemos que al candidato nacionalista lo votó el 39,8% y a Keiko Fujimori el 37,5% del total de electores peruanos, residentes en país y en el extranjero.

Algunos datos más es necesario aportar para entender el conflicto político que, en coincidencia con lo que ocurre en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, atraviesa la constitución misma del entramado socioeconómico peruano. Recordemos que en la anterior elección del año 2006, Ollanta Humala se había mostrado como un cercano admirador del gobierno bolivariano de Venezuela que conduce Hugo Chávez, razón por la cual partía para la presente contienda con la declarada oposición de los grandes medios, cámaras empresariales y financieras del Perú, así como de famosos intelectuales como el ahora premio Nobel Mario Vargas Llosa (a pesar de que este último le terminó dando, resignado, su apoyo para la segunda vuelta, luego de declarar que en el balotaje



los peruanos deberían escoger *“entre el cáncer y el sida”*). El líder de Gana Perú ganó en 20 de las 25 provincias electorales peruanas, con amplios márgenes en el sur del país, donde rozó en algunos departamentos el 70% de los votos válidos. ¿Cuáles son los cinco departamentos donde no pudo imponerse ante la candidata fujimorista que contaba con el apoyo del “establishment” empresario-financiero? Tres de ellos son del norte del país, histórico bastión del APRA, quien como consecuencia del enorme descrédito del gobierno de Alán García ni siquiera llevó un candidato propio a la presidencia, por primera vez en su historia. El aprismo, en el poder del Estado desde 2006, gobernó casi todo el mandato con el apoyo explícito de la bancada fujimorista en el congreso, con lo cual era más que esperable que un amplio porcentaje de su “voto cautivo” partidario haya ido a parar a la hija de Fujimori. Las otras dos provincias en las que no pudo vencer Humala son la ciudad capital Lima y el puerto del Callao —territorio federal sin estatus de depar-

¹ Todos los datos estadísticos han sido tomados de la página oficial de asuntos electorales de Perú, con los escrutinios al 100%: www.web.onpe.gob.pe.

tamento—, lindante con aquella. Allí se concentra poco más de un tercio de la población del país, y es históricamente donde se acumulan las riquezas y los órganos de poder nacional. Es el control del puerto al servicio de la explotación de las riquezas y el trabajo del interior. En Lima, Humala cosechó un 42,4% frente al 57,5% de Keiko, siempre contando sólo los votos positivos. Visto desde el ángulo inverso, en Lima, Keiko consiguió 3.107.049 votos, que significan el 41,5% de los 7.490.647 que cosechó en todo el país. Otro aporte no desdeñable para Fujimori llegó desde el extranjero, donde cosechó un 70,3% frente al 29,6 de Humala.

El desglose de los porcentajes muestra claramente que el electo presidente del Perú tendrá la mayor oposición a las reformas prometidas en la ciudad de Lima, principal beneficiada por la bonanza macroeconómica de los últimos años, que las consultoras financieras internacionales cifran en un 8% promedio de crecimiento anual, pero que no ha logrado perforar el piso de pobreza que, según guarismos oficiales, se ubica cercano a un 30% de la población. En este sentido, el mismo Humala señalaba, días antes de la segunda vuelta electoral: *“En lo que no vamos a retroceder es en hacer que el crecimiento económico vaya acompañado de inclusión social. Para que haya inclusión social tenemos que asegurar políticas sociales como el Programa Pensión 65, para los mayores de 65 años que no tienen una pensión; un programa de nutrición infantil en los colegios; un programa de guarderías infantiles; defender los derechos laborales; elevar el salario básico de 600 a 750 soles (unos 220 dólares) en el primer año de gobierno; un aumento salarial a los policías para mejorar la seguridad; invertir en infraestructura, como aeropuertos, puertos, carreteras, escuelas, hospitales, vías férreas, porque ahora el país tiene un déficit de 40 mil millones de dólares en infraestructura pública, a través de asociaciones públicas y privadas; consolidar el proceso de descentralización para mejorar la inversión pública; ampliar el programa Juntos (de entrega de unos 35 dólares mensuales a los sectores más pobres) de cerca de 500 mil beneficiarios a 900 mil; ampliar los presupuestos de los programas sociales de comedores populares y del vaso de leche; entregar becas a los mejores estudiantes de las escuelas públicas para que accedan a una carrera universitaria; trabajar una política para el retorno de los tres millones de peruanos que viven en el extranjero, la mayor parte de los cuales son ilegales. En esas políticas sociales no vamos a retroceder. (...) Vamos a participar con entusiasmo en la consolidación de la unidad latinoamericana. El fortalecimiento de la Unasur será una prioridad de nuestra política exterior. Nosotros vemos con mucho interés la consolidación de la Unasur. Vamos a afianzar las relaciones políticas y económicas y de hermanamiento con los países de la región. No vamos a ideologizar las relaciones internacionales, sino que vamos a construir una agenda positiva con todos los países hermanos”* (P12 4/6). Esta serie de anuncios, sumados al resultado electoral del domingo 5 de junio, hacían que el lunes 6, sin que hubiesen transcurrido siquiera 12 horas desde el triunfo electoral del candidato nacionalista Ollanta Humala, la Bolsa de Lima se fuera a pique, logrando la mayor caída de su historia: 12,51 %. Los inversores salieron a primera hora del día a liquidar sus activos, en una ola de ventas que obligó al regulador a suspender las operaciones bursátiles y al Banco Central

peruano a intervenir para sostener la moneda local. El desplome afectó sobre todo a las grandes empresas mineras, como Sociedad Minera Volcán y Buenaventura, que figuran entre las cinco mayores compañías del país y que son uno de los motores de la economía peruana (LN 7/6).

El ya electo Ollanta Humala restaba importancia a lo que era un claro ataque financiero a su elección: *“Lo que he visto es un bache en la Bolsa de Valores. La economía peruana es sólida, tiene un crecimiento sostenido desde hace ocho años. Esa es la realidad, por lo que este bache en la Bolsa no es un problema estructural. Las agencias aseguradoras de riesgo, la banca internacional, la banca de inversión como JP Morgan, han dicho que hay que seguir invirtiendo en el Perú, que las elecciones ya pasaron y la economía va bien”*. No obstante, clarificaba qué sectores eran los que iban a tener que sentarse a rediscutir ganancias de cara a la necesidad de redistribuir los elevados beneficios de la explotación de las riquezas nacionales: *“La pobreza en el Perú se origina por una mala redistribución de la riqueza y la riqueza se distribuye según una determinada política económica. Tenemos que corregir la política económica. No estamos hablando de cambiar el modelo capitalista, el modelo de una economía abierta de mercado. Nosotros defendemos esa economía de mercado. Lo que decimos es que la política económica actual tiene una serie de imperfecciones que no permite que el crecimiento sostenido de ocho años se traduzca en desarrollo y una mejora de la calidad de vida. Eso es lo que tenemos que corregir”* (P12 8/6). *“Vamos a respetar los acuerdos internacionales, como son las consultas ciudadanas. Fui elegido por el pueblo peruano y no por las mineras. No puedo dar concesiones mineras que afectan acuíferos, que es de donde se nutre la economía popular”* (P12 10/6). A los pocos días, y aún sin tener los resultados finales oficiales, Humala emprendía una recorrida por los países sudamericanos en dos etapas. En Brasil se entrevistaba con la presidenta Dilma Roussef y también con el ex presidente Lula Da Silva, quien señalaba la importancia regional de la reciente elección peruana: *“Con Humala la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) sale fortalecida. Si hay una ‘derechización’ conservadora en Europa, en América latina vemos el avance de los gobiernos progresistas. Incluso en Colombia, con el presidente (Juan Manuel) Santos, vemos avances muy puntuales de diálogo regional”* (P12 11/6). Días después, Ollanta Humala tocaba suelo boliviano, y allí profundizaba su visión sobre la necesidad de la unidad regional: *“Sueño con la reunificación del Perú y Bolivia, sueño que en algún momento esa línea fronteriza desaparezca y volvamos a ser una misma nación”*, afirmaba mientras recordaba al mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, que en 1836 unió las dos naciones en una confederación que fue derrotada tres años después por el ejército chileno. *“Aún lo tengo presente, porque creo que este siglo es el siglo de América, y particularmente de la región latinoamericana”* (P12 22/6).

Quien tomaba nota también del cambio en las relaciones de fuerza políticas regionales que significa el triunfo de Humala en Perú —debilitando el otrora “eje Pacífico”, con Chile, Perú, Colombia y México como aliados cercanos de Estados Unidos—, era el diario La Nación, que dedicaba un editorial a la elección peruana y señalaba, luego de justificar “los reparos” del mundo financiero

bursátil con el electo presidente nacionalista, sus deseos de que el próximo gobierno peruano esté obligado a inclinarse más hacia “el centro”, emulando, según entiende el editorialista, lo acontecido durante los inicios de Lula Da Silva y Tabaré Vázquez al frente de sus gobiernos: “Es innegable que, al margen de cumplir con su obligación cívica, pocos peruanos han votado convencidos en esta segunda vuelta. Es Humala quien deberá demostrar que aquellos que dudan de él están equivocados y que aquellos que confían en él no se sentirán defraudados. Se trata de una empresa tan complicada como la que debió emprender Lula desde 2003 y Tabaré Vázquez desde 2005, tras haber sido referentes de la izquierda. Existen otros antecedentes en América latina de líderes enrolados en un polo que se han desplazado hacia el centro y en él han hallado el justo equilibrio. Por el bien de un país hermano como Perú, ojalá que eso suceda con su presidente electo” (LN 9/6).

Neo colonialismo en el Atlántico Sur

Como veíamos al inicio, las disputas en torno a los órganos de gobierno mundial —con algunos países (como Argentina y Brasil) presionando para que “se democratizen” dichas instancias, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el FMI o los tratados comerciales bajo la órbita del G-20 y no del G-8— recrudescen en todos los planos y, de esa manera, el control territorial se vuelve a asumir como estratégico por parte de los países latinoamericanos, tal como veíamos más arriba en el caso brasileño, con el plan de pasos fronterizos.

En ese sentido, Argentina viene manteniendo en los últimos años un reclamo constante a Inglaterra, por intermedio de la ONU, para sentarse a negociar la soberanía de las Islas Malvinas. Aprovechando la visita del secretario general del organismo, el surcoreano Ban Ki-moon, el gobierno argentino elevó nuevamente una solicitud para que se inste a Gran Bretaña a plegarse a un proceso de negociación sobre el dominio de las islas atlánticas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señalaba: “Hemos reiterado nuestro deseo de que Inglaterra acepte la resolución 2.065 de Naciones Unidas en el sentido de sentarse en la mesa de negociaciones con la Argentina. Las resoluciones de Naciones Unidas deben ser aceptadas por todos, por los países emergentes y por los desarrollados, y más aún por los desarrollados, porque cuanto mayor poder se tiene en todos los ámbitos, siempre mayor es el grado de responsabilidad (...). La Argentina puede dar cuenta de que es un importante actor y con alto grado de coherencia en la construcción de la paz, porque no sólo integramos misiones de paz como la de Haití y Chipre, sino que además somos respetuosos de cada una de las resoluciones de las Naciones Unidas”. Y apuntaba que era “hora de que los países que tienen un lugar importante, por formar parte del Consejo de Seguridad o el Grupo de los 8, convengan al resto del mundo de que respeten las resoluciones de la ONU” (P12 14/6). Casi en simultáneo, en un acto encabezado por la presidenta, se le otorgaba el documento argentino a James Peck, nativo de las islas (llamados “kelpers”), hijo de un soldado inglés que peleó en la guerra de 1982. Cristina Fernández decía: “Aquí estamos todos juntos bajo la misma bandera. Sin agresiones, sin odios y sin rencores, porque en definitiva tanto los unos como los otros hemos sido víctimas del más terrible de los ma-

les de la civilización: la guerra.” Lo mismo hacía la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, aliada no kirchnerista del gobierno nacional: “Sienta un precedente en la Nación y en la provincia para que toda persona nacida en el territorio ocupado ilegítimamente por Reino Unido pueda obtener su documentación de identidad en nuestro Registro Civil” (P12 15/6).

La respuesta inglesa no tardaba en llegar, y lo hacía en la voz del propio premier David Cameron, quien tajantemente señalaba: “Mientras las islas Falklands (denominación británica de las islas Malvinas) quieran ser territorio soberano británico, deben seguir siendo territorio soberano británico. Punto final de la historia”. Rápidamente, la Cancillería local respondía: “La Argentina deplora que el gobierno del Reino Unido, en un lamentable acto de arrogancia, se adjudica la autoridad de poner fin a la historia referida a una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y aún pendiente de solución”, remarcando que “Gran Bretaña muestra un permanente desprecio al reiterado mandato de las Naciones Unidas y a los múltiples llamados de la comunidad internacional instando a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de alcanzar una solución a la disputa de soberanía en las Malvinas” (LN 16/6). Y el embajador ante la ONU, Jorge Argüello, marcaba el rasgo más general de la disputa: “La comunidad internacional deberá evaluar cuidadosamente hasta qué punto le conviene seguir reconociendo status de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a aquellos países que sistemáticamente ignoran o violentan las decisiones de la Asamblea General (...). Los dichos del señor Cameron confirman que el Reino Unido bará valer su interés por las buenas o por las malas. No están dispuestos a proceder conforme al derecho, sino a defender su posición de hecho, originada por la fuerza en el siglo XIX” (P12 16/6).

Esta situación obligaba a la oposición local a cerrar filas tras la postura esgrimida por el gobierno nacional. “Argentina debe seguir insistiendo en el marco del comité de colonización de la ONU para llegar a una solución”, marcaba Alfredo Atanasof, diputado por el Peronismo Federal; “El Atlántico Sur se convirtió para Gran Bretaña en un eje donde se disputará el dominio geopolítico y neoeconómico”, decía Julio César Martínez, diputado de la UCR; “No aceptamos que haya un punto final sobre Malvinas; tiene que haber un plan de recuperación de su soberanía”, señalaba, mientras criticaba la estrategia seguida desde el kirchnerismo, la diputada Patricia Bullrich (LN 17/6).

Días después, mientras se tocaba el tema en el Comité de Descolonización de la ONU, el canciller Héctor Timerman denunciaba: “Cameron no le está diciendo a la Argentina que no negocia. Cameron les está diciendo a las Naciones Unidas que no negocia, y eso es retrotraernos a una época colonial. O la persona cree que vive en el siglo diecinueve, o los dichos son mediocres y estúpidos. Entonces tenemos las dos posibilidades. O que Cameron viva la realidad vista con los ojos de un primer ministro de la época de la colonia, o que esté usando una patoteada que no es el mejor camino, no tiene ningún valor legal”. La resolución del comité era ejemplar, conteniendo la firma de los 29 miembros del mismo, y en su informe señalaba que “el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas” (P12 22/6). En respuesta desde Inglaterra, tomaba la palabra

el ministro de Defensa británico Liam Fox, quien señalaba “Tenemos ya (aviones de combate) Typhoons estacionados en la zona y enviamos un mensaje muy claro de que tenemos el poder naval si fuera necesario y el compromiso de garantizar que las Malvinas se mantendrán libres y su pueblo disfrutará de la liberación por la que luchamos tan duro hace 30 años. (...) Los políticos al otro lado del mundo pueden cansarse lo que quieran, pero no cambiarán nuestra resolución política de retener la independencia y soberanía de las islas” (LN 28/6). La réplica local llegaba ahora en boca del ministro de Defensa, Arturo Puricelli: “Convertir al Atlántico Sur en una fortaleza es una provocación a la Argentina y a toda América latina”, advirtió, al tiempo

que denunciaba una mayor presencia militar británica en las islas. Dijo que “en la zona hay un solo actor extracontinental que está armado y que pone en evidencia la irracionalidad del Reino Unido en la ocupación de Malvinas” (LN29/6).

Como hemos observado, la crisis avanza y obliga a los pueblos a preservar sus espacios vitales, ya sean herramientas financieras o territorios estratégicos militares, siempre de cara a profundizar la disputa con las potencias. En ese camino, la unidad regional sigue dando pasos firmes, que encuentran escollos, pero que no parecen modificar el rumbo general que viene de hace ya unos años.

Intentando moverle el piso

Por Sebastián Ortiz

La Argentina vive, sin ninguna duda, un año en el que la “cuestión electoral” lo atraviesa casi todo.

En tal sentido, durante el mes de junio se realizaron tres nuevas elecciones provinciales: Neuquén, Misiones y Tierra del Fuego.

En Neuquén se disputaban la gobernación el oficialista Movimiento Popular Neuquino, conducido por la familia Sapag, y el Frente Neuquino, coalición de partidos liderados por el radicalismo.

Sin embargo, debe destacarse que ambas coaliciones respaldan la reelección de Cristina Fernández de Kirchner al frente del Ejecutivo nacional.

Con un padrón de 411.925 inscriptos, concurren a las urnas 290.616 personas (70,5%), siendo reelecto el gobernador Jorge Sapag, quién sumó un total de 131.990 votos (Movimiento Popular Neuquino 81.632; Movimiento de Integración y Desarrollo 23.022; Partido Nuevo Neuquén 14.612; Unión Popular 12.724), frente a los 99.191 del radical Martín Farizano (PJ 31.275; Coalición UNE 24.207; UCR 18.227; Frente Grande 14.905; Partido Socialista 6.105; PRO 4.472).

El cuadro se completó con los 15.890 votos de la Coalición Cívica, 11.816 de Libres del Sur y 7.441 del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

En Misiones, por su parte, el gobernador radical kirchnerista Maurice Closs obtenía un aplastante triunfo. Sobre 543.597 votos, se quedaba con 372.490. Los votos en blanco (43.185) sumaban mayor cantidad que el candidato que lo secundaba por el Partido Trabajo y Progreso con 30.938, apenas por encima de la UCR (30.816 votos).

Rápidamente, el gobernador reelecto tributaba el triunfo a la Casa Rosada: “*Estamos para acompañar a Cristina en su candidatura y estamos para ayudar a gobernar. Esta es nuestra contribución a un proyecto nacional con el cual estamos plenamente identificados, con el que estuvimos en las buenas y en las malas y siempre seguiremos estando*” (LN 27/6).

En tanto, en Tierra del Fuego se realizaron también el mismo día las elecciones para la gobernación, dando como resultado el triunfo de Rosana Bertone (Frente para la Victoria) con 30.057 votos sobre los 23.683 votos obtenidos por la actual gobernadora Fabiana Ríos. Sin embargo, este resultado provocaba la segunda vuelta entre ambas candidatas, a realizarse en el mes de julio.

Aquí también es de destacar que, por un lado, en el tercer lugar quedaban los votos en blanco (8.280), siguiéndolos la UCR con 4.831 y el PJ con 3.935 votos.

A su vez, debe señalarse que quienes se enfrentarán en el balotaje apoyan ambas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; una (Bertone) directamente desde su mismo partido (FPV) y la otra (Ríos) desde una posición de “apoyo crítico”.

Nada se pierde, todo se transforma

Mientras tanto, el arco opositor continuaba durante el mes de junio lo que había iniciado el mes anterior, en respuesta al pedido explícito del matutino oligárquico La Nación: bajar la mayor cantidad de candidaturas posibles para las primarias de agosto. A ello habían respondido durante mayo Mauricio Macri y Pino Solanas, colocando sus figuras en el plano de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora comenzaba el turno de combinar lo que quedaba en pie.

Por un lado, el radicalismo conducido por Ricardo Alfonsín continuaba su táctica electoral de acercarse a la popularidad del empresario colombiano y candidato a gobernador bonaerense Francisco De Narváez, lo que hacía peligrar el acuerdo del radicalismo a nivel nacional con el Partido Socialista.

Sin embargo, el socialismo había “dado permiso” a sus aliados radicales para acuerdos distritales de este tipo. El líder radical Ricardo Alfonsín explicaba al respecto: “*Para llegar al Gobierno desde un frente programático progresista es necesario que podamos representar no sólo a quienes comparten nuestra identidad, sino a todo el bloque social que se identifica con una visión antihegemónica y republicana. Si para ello es necesario incorporar, en niveles provinciales y municipales, sin sacrificar nuestro programa nacional, a fuerzas sociales y políticas que no necesariamente poseen identidades como las nuestras, no debemos vacilar en hacerlo. Con este espíritu debe entenderse la propuesta de la UCR de Buenos Aires?*” (LN 2/6).

De esta manera, ambas fuerzas se animaban a discutir listas únicas de candidatos a intendentes, legisladores provinciales y nacionales en el distrito bonaerense, para evitar las internas obligatorias, aunque sin poder ponerse de acuerdo en más de 20 distritos bonaerenses, donde las candidaturas serán finalmente definidas en las internas abiertas de agosto.

El espacio era bautizado Unión por el Desarrollo Social (UDESOS), y contaba con un “asesoramiento” muy especial: se trata del equipo encabezado por Michael Axelrod, “*mano derecha del presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, en materia de comunicación*” (LN 18/6).

De esta forma, quedaba oficializada la candidatura presidencial de Ricardo Alfonsín, acompañado por el economista Javier González Fraga, cercano a Roberto Lavagna y al Movimiento Productivo Argentino (MPA) de Eduardo Duhalde. “*Duhalde es el candidato a vicepresidente de Alfonsín*” (LN 4/6), explicaba, pragmática, Lilita Carrió.

La elección también marcaba el rumbo económico pretendido, en busca de los votos necesarios: “*No creo que el próximo gobierno tenga que hacer ajustes significativos en la economía. Los problemas no pasan por lo económico; hoy lo que hay que recrear es el clima político para la inversión*” (LN 4/6), señalaba el propio González Fraga.

Y el espacio también hacía lo propio respecto a la política de medios, en busca de pantalla permanente de aquí hasta el acto electoral de octubre: “Yo anularé todas aquellas normas que le dan al Gobierno la facultad de influir indebidamente en la concesión de licencias a los medios. Y cualquier norma que conspire contra la posibilidad de ejercer la libertad de prensa la derogaría” (P12 17/6), prometía Alfonsín.

Lo que también volaba por los aires, por supuesto, eran los acuerdos del radicalismo con el socialismo a nivel nacional, obligando al gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, a anunciar precipitadamente su postulación presidencial, en una fórmula compartida con la senadora cordobesa Norma Morandini, del Partido Nuevo de Luis Juez.

Y la reacción en cadena continuaba: con la decisión socialista, quienes se sentían despechados eran sus hasta entonces socios de Proyecto Sur, conducido por Pino Solanas. Como en un juego de “cajas chinas”, el enojo de Pino provocaba la fractura en su propio espacio: Libres del Sur, parte de Proyecto Sur, anunciaba que seguiría sosteniendo la candidatura de Solanas en la Capital pero también la de Binner a nivel nacional. Y lo propio hacían desde Buenos Aires para Todos, espacio conducido por Claudio Lozano, y desde la Corriente Nacional para la Unidad Nacional, liderada por el sindicalista de la CTA opositora Víctor De Gennaro.

La fractura en este último espacio obligaba a una nueva candidatura presidencial, la de la socióloga Alcira Argumedo, por el ahora destartado Proyecto Sur, acompañados por el MST y el PSA.

Con este escenario, el arco opositor continuaba, a toda prisa y sin pausa, su metamorfosis en la búsqueda de la fórmula que mejor lo posicione frente al oficialismo kirchnerista.

Un editorial del matutino de la familia Mitre, titulado *Las ideas y los hombres*, nos grafica lo dramático de la situación: “El panorama político argentino suscita, cuando menos, incredulidad. Después de casi treinta años de ejercicio democrático, los partidos políticos son apenas fachadas para la toma de decisiones por sus elencos dominantes. No pocas veces, esos elencos están constituidos por escasas personas. Las determinaciones más trascendentes y hasta el nombre de los candidatos que se someterán a las consultas de ley se consagran por impulso inconsulto de los líderes y no por el debate y votación de los afiliados. Así las cosas, la atomización del espectro político general es la consecuencia de los caprichos y de las consignas cambiantes y contradictorias de quienes manejan el timón de esas frágiles instituciones. No se debaten ideas: se enjuician hombres y se fijan caprichosos límites. No se elaboran propuestas, sino que se establecen sistemas de exclusiones, fundados en cálculos oportunistas. En cualquier momento los aliados de la mañana se convierten en los apartados de la tarde, o a la inversa (...). Estas desviaciones obedecen a un antiguo mal de nuestra organización política. Desde fines del siglo pasado, nuestros partidos cobijaron en su seno todas las variantes de la ideología. Esa aspiración a representar al todo y no a una parte les permitió apropiarse del poder de manera continua y adaptarse al cambio de las preferencias electorales como el camaleón se asimila con el paisaje. Los cambios de bandos, las asociaciones o rupturas desprovistas de cualquier horizonte conceptual, como el imperio del marketing sobre el debate

programático, son distintas formas de fraude. Permiten que el pacto electoral entre los representantes y los representados pueda violarse, ya que nunca adquirió una formulación explícita. Los votantes pueden sentirse encantados por el atractivo personal de los candidatos. Pero una democracia sólida es mucho más que un desfile de modelos, plagado de vetetismos personales. Se necesita que quien ejerce la función pública tenga un mandato. De lo contrario, la gobernabilidad termina degradada en sus peores manifestaciones. El vínculo que deberían establecer las propuestas, las ideas, los programas se sustituye por la coerción de la caja o la fuerza. A veces, parece avanzarse en el camino correcto. El 17 de diciembre último, dirigentes de numerosos partidos políticos pusieron la firma al pie de un ‘Acuerdo de Gobernabilidad y Políticas Públicas’. Se trataba de algunas de las principales figuras de la Coalición Cívica, la Generación para un Encuentro Nacional (GEN), el Movimiento por la Equidad, Justicia y Organización (MEJOR), el Partido Socialista, el Peronismo Federal, el Partido Autonomista, la Unión Pro y la Unión Cívica Radical, entre otros. Pero las interdicciones de carácter personal han neutralizado hasta ahora la posibilidad de cualquier acuerdo más amplio hacia la definición de consensos que puedan traducirse en políticas de Estado (...). Si en los próximos días, la dirigencia política logra poner los caballos delante de los carros, esto es, las propuestas programáticas por encima de las mezquindades personales, tal vez haya espacio para generar en el ánimo colectivo la idea de que una nueva esperanza es posible” (LN 5/6).

Justamente, la imposibilidad de realizar acuerdos programáticos es lo que no posibilita una candidatura unificada. La Nación necesita ocultar ello para poder imponer sus ideas por detrás de cualquier fórmula opositora que quede en pie después del 14 de agosto.

De hecho, venimos observando en tal sentido cómo varios de los candidatos opositores, por no decir la mayoría, vienen acercándose al “programa kirchnerista”, seducidos por los índices de aceptación popular.

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella, publicado por el matutino La Nación, la credibilidad de la población en el Gobierno volvió a crecer durante mayo un 7% respecto al mes anterior, y un 68% en términos interanuales. Los atributos más destacados, de acuerdo al estudio, son la capacidad (57% de aprobación), la honestidad (52%, frente a todas las denuncias por corrupción), la buena imagen (49%), y el gobierno en beneficio del interés general (38%). Todos estos indicadores crecieron respecto a la medición inmediatamente anterior (LN 3/6).

Con este desfavorable panorama, la oposición apuesta también a los sobresaltos dentro de la fuerza política oficialista. Un hecho trascendental en este sentido será la ruptura del kirchnerismo con el PJ cordobés, impidiendo de esta manera que allí exista una expresión local propia el 7 de agosto, día de las elecciones provinciales. De esta manera, comenzaba a dibujarse un posible escenario de tres derrotas consecutivas para el kirchnerismo (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba) a materializarse en los meses de julio y agosto.

El otro dato significativo fue el pase del intendente de Malvinas Argentinas, el hasta el momento kirchnerista Jesús Carigliano, a las filas del duhaldismo. “Como Carigli-

no, muchos intendentes del conurbano no están de acuerdo con el kirchnerismo ni con su forma de gobernar (...). Imagino que muchos se vendrán con nosotros. Ya están cansados de los aprietes del gobierno nacional” (LN 22/6), explicaba el propio Duhalde en un acto del MPA.

El hecho es importante, porque muestra una tendencia que, de no ser frenada a tiempo, tendrá demostraciones en los propios actos electorales bonaerenses, donde la mayoría de los “barones del conurbano” mantienen aún fuertes vínculos con el ex presidente.

Y también, como no podía ser de otra manera, el cierre definitivo de la lista oficialista dejó muchos heridos, tanto en el tradicional aparato del PJ bonaerense como en la CGT y en algunos movimientos sociales: “Cuando termina el cierre de una lista, en todos lados queda gente caliente. Nosotros estamos dentro de ese contexto” (LN 28/6), expresaba el taxista Omar Viviani. Su par de Judiciales, Julio Piumato, también apuntaba directo: “Cristina no tuvo en cuenta al movimiento obrero para defender el modelo en el Congreso” (LN 28/6). Por su parte Luis D’Elía, dirigente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) se quejaba por Twitter: “Gloriosa FTV que bancó a K desde siempre y que salvó al Gobierno del golpe, desde el sábado se siente kelper en su fuerza” (LN 28/6).

Además, las candidaturas a vicepresidente y a vicegobernador de Amado Boudou y de Gabriel Mariotto, respectivamente, dos hombres no provenientes del riñón pejotista, causaba malestar entre los “barones del conurbano”.

De todo ello trataba de aprovecharse el análisis terrateniente, en la pluma de Joaquín Morales Solá. El texto se titulaba “La colonización del peronismo”: “Cristina Kirchner cometió en las últimas horas la audacia política más grande que haya perpetrado el audaz kirchnerismo: echó al peronismo de sus principales ofertas electorales. Amado Boudou y Gabriel Mariotto, colocados en los probables segundos lugares más importantes de la política argentina, son, con todo, sólo síntomas de una colonización mucho más amplia por parte del kirchnerismo de cargos y territorios que antes estaban reservados al peronismo (...). La radicalización del kirchnerismo tiene una enorme magnitud política. Podría significar la implantación definitiva de un partido de poder bajo los signos ideológicos del kirchnerismo cristinista o podría encarnar, por el contrario, la pérdida de la mejor oportunidad política y electoral que tuvo la Presidenta. Esa estrategia que desdeña los matices, que apuesta siempre a todo o nada, pertenece al mapa genético del kirchnerismo, aunque Néstor Kirchner nunca había llegado tan lejos. Una inferencia quedó confirmada: el expresidente era, en el fondo, más peronista y, con todo, más acuerdista que su esposa y heredera política (...). La cadena nacional para anunciar su propia candidatura. El misterio hasta el final sobre su propia decisión y, más aún, sobre quién la acompañará en la fórmula presidencial. La política nacional en vilo, pendiente de la voluntad de una sola persona. El uso de dependencias del Estado para hacer anuncios partidarios. Las listas de candidatos a legisladores nacionales y provinciales sometidas a pruebas, contrapruebas y purgas soviéticas. Las formas de la democracia son ya casi una nostalgia argentina. ¿Está la Presidenta en condiciones de dar el salto que dio? Las encuestas la respaldan ahora y hasta ganaría en primera vuelta si las elecciones fueran el próximo domingo. El pro-

blema es que ocurrirán dentro de cuatro meses y que en el medio se metió, ahora, un aire de final de luna de miel. La aguardan noticias ingratas en los principales distritos electorales del país. Mauricio Macri está sacando una importante ventaja sobre su principal competidor, Daniel Filmus. Filmus no está siendo batido por Macri; está enmarañado en los escándalos de Hebe de Bonafini; en las increíbles y extravagantes peleas de la ex conducción del Inadi; en el antisemitismo a flor de piel del kirchnerista Luis D’Elía, y en la batalla campal de los persistentes maestros de Santa Cruz en la propia Capital y contra la propia policía de los Kirchner. Encuestas que maneja el Gobierno señalan que en Santa Fe, donde se elegirá gobernador dentro de un mes, el macrista Miguel Del Sel está a sólo un punto de Agustín Rossi para llegar al segundo lugar; el socialista Antonio Bonfatti está primero en la intención de votos. Otras mediciones ya lo colocan a Del Sel por encima de Rossi, que saldría tercero. Rossi fue abandonado a su suerte por un gobierno nacional que le huye a la derrota como a la peste. El kirchnerismo será ajeno a cualquier resultado de la elección de Córdoba, porque condenó a la indiferencia a José Manuel de la Sota. De la Sota mereció ese escarmiento desde que hizo lo que Scioli se negó a hacer: nombró una candidata a vicegobernadora propia y contra la presión de la propia Presidenta. La Capital, Santa Fe y Córdoba transitan caminos paralelos y ajenos al kirchnerismo. A éste sólo le queda, entre los grandes distritos, la provincia de Buenos Aires. Podría ser suficiente, pero es justo ahí donde Cristina decidió hacer la mayor expurgación de peronismo (LN 26/6).

A este desgaste apuesta la tradicional oligarquía local. El escenario quedaba planteado así para las elecciones del mes siguiente en los tres distritos mencionados, y de cara a la campaña en el corazón del conurbano bonaerense para las primarias de agosto.

Perforar el piso de los 40, el plan oligárquico

Mientras tanto, los intelectuales del diario La Nación comienzan a construir dicho escenario en el plano de las ideas.

El primero de ellos es el historiador liberal Natalio Botana, en su columna titulada “La exaltación del pluralismo”: “Por lo visto, ya está completo el repertorio de los pretendientes a la presidencia. Son cinco ofertas, si excluimos a los candidatos ubicados en la izquierda y al candidato puntano, A. Rodríguez Saá. De mayor a menor, según indican encuestas preliminares, tendríamos la fórmula kirchnerista, la de Alfonsín-González Fraga, y luego el lote que forman Duhalde-Das Neve, Carrió-A. Pérez y Binner-Morandini. Este es el efecto, acaso previsible, de un clima impregnado por un faccionalismo pertinaz (...). Más que oportunista, el Gobierno sigue instalado en unos resultados y en una ideología, ambos elevados a la categoría de dogma, que le permiten destacarse en la carrera. Resta conocer cuál de los otros cuatro candidatos podría desafiarlo con más enjundia. Es un trance difícil que atraviesa varios escenarios, delimitados por el sistema de ballottage incorporado a la reforma constitucional de 1994 (un candidato es elegido presidente con el 45% de los votos, o bien con un porcentaje superior al 40% y diez puntos de diferencia con su seguidor inmediato). El primero de estos escenarios, más favorable para las oposiciones, sería aquel en el que se inclina la intención de voto del oficialismo hacia abajo del 40%. Aquí el pluralismo de las cinco candidaturas habría logrado desempeñar con éxito la función de recortar desde diferentes lugares el bloque electoral del oficialismo.

Si en cambio el oficialismo traspone el umbral del 40%, sin llegar al 45%, entonces el respaldo al candidato que lo desafía desde el segundo puesto debería aumentar para abrir el cepo de los diez puntos de diferencia. De algún modo, según esta hipótesis, habría que polarizar al elección” (LN 16/6).

La orden es explícita: hay que ir a las primarias con las cinco candidaturas. Si ello debilita al kirchnerismo desde diversos ángulos, podría permitir hacer caer la candidatura oficialista del piso del 40%. Si esto no se logra, habrá que unificar la oposición en el que haya quedado segundo. La apuesta, en ambos casos, es a segunda vuelta.

Consciente de que por sí mismos no lo lograrán, Luis Gregorich escribe en el mismo matutino una columna titulada “Cristina y el mágico 40”. El título lo dice todo. Hay que hacer que se quiebre ese número. Para ello, se apuesta al desprestigio: “¿Qué pasaría si la Presidenta, por la acumulación de distintas situaciones desfavorables —la profundización de las investigaciones sobre la corrupción estatal y paraestatal, sólo iniciadas con el caso Schoklender; la creciente percepción de los estragos que causa la inflación, minimizados por el Gobierno—, perdiera 4 o 5 puntos? (...). Los candidatos principales de la oposición han sido proclamados y merecen ser valorados, por diferentes motivos. Ricardo Alfonsín está dispuesto a recoger la herencia de su padre, postular el consenso y rechazar la confrontación. Hermes Binner, excelente administrador de la importante provincia de Santa Fe, sigue la tradición socialista de esfuerzo y honestidad. Elisa Carrió, con su intransigencia moral, se ha convertido en implacable fiscal de los desafueros oficialistas. Eduardo Duhalde conserva prestigio y reconocimiento, en especial en sectores desfavorecidos. Y hay que agregar los méritos de por lo menos dos fórmulas recientemente presentadas, por su valor agregado: Alfonsín-González Fraga y Binner-Morandini. Cada uno de ellos debería replantear su campaña y, en lo posible, dirigirse, con inteligencia, a la ciudadanía que le es más afín y que, hoy por hoy, se halla vacante e indecisa. Alfonsín, al clásico electorado de su partido centenario, y al de orientación centrista que carece de candidatos serios; Binner, a la izquierda independiente y al sindicalismo antikirchnerista; Elisa Carrió, a la juventud y a los rebeldes de todos los matices, y Duhalde, a las capas más tradicionales e institucionales del peronismo. Ya vendrán eventuales acuerdos para la segunda vuelta, que aunque hoy parece una utopía sólo necesita unos pocos puntos de ascenso de cada candidato opositor. Así la dispersión puede ser virtud y no defecto, y la polarización tornarse innecesaria para la vuelta inicial. Y en todo caso la campaña no será un aburrido y triunfal paseo, sino una incisiva lucha de valores” (LN 18/6).

Al día siguiente, en su habitual columna dominical, Mariano Grondona invertía los términos del asunto, trasladando el problema a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo el título “La Presidenta duda” ¿Qué dudas tendrá la Presidenta?: “A Cristina la acosan tres dilemas ‘reales’. El primero es si vencerá o será derrotada el 23 de octubre. El verbo ‘vencer’ podría conjugarse para ella de la siguiente manera: lograr en esta fecha el 40 por ciento de los votos contra menos del 30 por ciento de quien la secunde en las urnas. Así

podría vencer en la primera vuelta. Esta es la única vía expedita para su victoria, ya que, de no transitarla, probablemente Cristina sería derrotada en la segunda vuelta contra el único rival que quedaría para desafiarla, cuando el ‘no kirchnerismo’ tendría que reunir forzosamente en un solo haz, por disposición de la ley electoral, a los cinco segmentos que hoy lo componen detrás de las candidaturas presidenciales de Alfonsín, Duhalde, Rodríguez Saá, Binner y Carrió. A estas alturas de los acontecimientos, es altamente probable que Cristina pierda en tres de los cuatro grandes distritos, que concurrirán a las urnas por dos veces, ‘antes’ y ‘durante’ el 23 de octubre: la Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. La incertidumbre que queda por develar es si, de la mano de Daniel Scioli, Cristina podrá pensar en el gran distrito de la provincia de Buenos Aires —el mayor de todos— y el único entre ellos donde sólo se votará el 23 de octubre— las diferencias que obtengan sobre ella sus rivales en los otros tres distritos” (LN 19/6).

El análisis es bajado al terreno más llano aún por el periodista político Fernando Laborda, bajo el título “¿Se le puede ganar a Cristina Kirchner?": “Un primer análisis indica que una oposición dividida en siete alternativas (Alfonsín, Elisa Carrió, Duhalde, Rodríguez Saá, Binner, Argumedo y Jorge Altamira) tiene muchas menos probabilidades de vencer. La atomización plantea el hipotético escenario de que, aun no llegando al 45%, Cristina Kirchner alcance al 40 o algo más, y supere por más de diez puntos al segundo y obtenga la victoria en la primera vuelta. Claro que también la gran oferta de candidatos podría restarle algunos votos a la Presidenta e impedirle llegar a los 40 puntos, lo cual llevaría a una segunda vuelta con el postulante opositor mejor ubicado (...). La segunda esperanza de no pocos dirigentes opositores es que las tres grandes elecciones distritales que vendrán (Capital Federal, el 10 y el 31 de julio; Santa Fe, el 24 de julio, y Córdoba, el 7 de agosto) arrojen derrotas para el kirchnerismo que ayuden a desterrar el mito nacional de que Cristina ya ganó. Inmediatamente, vendrán las primarias abiertas del 14 de agosto. Una elección en la cual no habría competencia, interna pues sólo se presentarían listas únicas. Lo absurdo de esta situación llevó al candidato a gobernador Francisco de Narváez a comentar que esos comicios no deberían realizarse. Quizá no advirtió que esas primarias pueden ser una oportunidad para realineamientos posteriores en la oposición, que terminen mitigando su fragmentación actual. No sólo porque desaparecerán de la competencia aquellos candidatos que no consigan el 1,5% de los votos, sino porque otros que no alcancen un resultado satisfactorio tal vez decidan abstenerse de presentarse en octubre y dar su apoyo a otro postulante con mejores chances. Las primarias serán, por eso, bastante más que un match de práctica informal (LN 24/6).

El plan opositor ya quedó, de esta manera, definido. Obviamente, no es diseñado por ninguno de los actores protagonistas, sino por quien tiene capacidad estratégica de utilizar las diferentes alternativas para sumar hacia su idea, es decir, los tradicionales sectores dominantes de nuestro país expresados a través del órgano de prensa terrateniente La Nación.

Habrà que ver si la realidad les da la razón.

Golpes de efecto

Por Martín Yuchak

Mientras la oposición política nacional se adentraba en una deslucida y accidentada campaña con vistas a una elección presidencial en la que no vislumbra visos de triunfo, la clase dominante en la Argentina –la oligarquía terrateniente– elevaba la tonalidad de los ataques ideológicos hacia el gobierno nacional, con vistas a minarle un poco la base de apoyo que posee en amplias capas de sectores populares y, sobre todo, en las capas medias.

Varios fueron los frentes que abrió la oligarquía este último mes de junio y de diferente intensidad. El más resonante mediáticamente resultó sin duda el caso de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al frente del plan de viviendas que desarrolla la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Pero no fue el único. Sino que la fuerza social conducida por los dueños de la tierra jugó a varias puntas. Observemos algunas de ellas.

Preparando el golpe económico

El mes se iniciaba con dos anuncios destinados a generar pánico económico. El primero era un informe presentado por el Instituto de Finanzas Internacionales, organismo que agrupa a los principales bancos del mundo. El mismo auguraba que la Argentina terminaría el año con una inflación del 25,8%, frente al 22,9% de 2010 (LN 2/6). El segundo era la advertencia del matutino La Nación acerca de que el país presentaría este año una fuga de capitales por U\$S 17.000 millones, contra U\$S 11.400 de 2010, sumado a un menor superávit comercial e incertidumbres en el mercado cambiario debido al proceso preelectoral. Esto se debería, según el diario de los Mitre, al fuerte control que realiza el gobierno hacia la actividad privada a través del Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); control que, por supuesto, espanta las inversiones –única fuente, según los manuales de economía liberal, de generación de empleo y combate contra la pobreza– y reduce la acumulación de reservas del Banco Central (LN 6/6). La operación es conocida. Grupos económicos, que por su posición monopólica en el mercado son formadores de precios y además retiran del país sus capitales cuando lo ven conveniente, cargan sobre el gobierno el resultado de lo que ellos mismos generan.

Pero el escenario se ponía realmente movido en el mundo empresario cuando el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, salía a defender abiertamente el modelo económico y

Las Madres siempre hemos seguido el camino de los hijos y nuestros hijos sabían qué significaba la ética, la solidaridad, la igualdad, el amor, la comprensión, el compañerismo. Eran de nuestra clase. Las otras clases sociales hacen esto que hacen: les ponés la mano y te la comen.

(Hebe de Bonafini, presidenta de Asociación Madres de Plaza de Mayo)

hacía votos por su continuidad, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, en un almuerzo que la cúpula empresaria compartía con el gobernador Scioli: “*Damos por sentado que todas estas políticas tienen que estar por un período mucho más amplio. Estamos hablando de un proyecto a largo plazo, y esta oportunidad que la Argentina tiene, ni el gobernador ni nosotros queremos desaprovecharla*”. A su vez, el titular de la UIA aclaraba que “*uno de los temas cruciales que tenemos para poder seguir en este crecimiento es la competitividad. La gente muchas veces asoció competitividad a tipo de cambio y parecería que solamente la Argentina puede resolver esto vía devaluación, pero acá quedó demostrado [haciendo alusión al conflicto ya solucionado con Brasil] que es un tema mucho más profundo, que tiene que ver con muchas facetas*”. Y sentenciaba, para que no quedasen dudas acerca de su alineamiento: “*Estuvimos con la Presidenta en México e Italia y tuvimos misiones comerciales muy importantes que son para un proyecto a largo plazo*”. Recordemos que el mes anterior, el mismo De Mendiguren había afirmado: “*Por lo que veo por ahora, voto a Cristina*”. Y defendía la política económica, que según él “*tiene una definición del rumbo muy clara*” (LN y P12 7/6).

Frente a esto, la oligarquía, a través de su Tribuna de Doctrina, salía a “adoctrinar” al empresariado que, al parecer, no termina de comprender del todo su papel en la sociedad. Lo hacía desde su editorial titulado “*La confusión entre lo público y lo privado*”: “*La confusión de lo público con lo privado se manifiesta también en las entidades intermedias. El ejemplo clásico es, desde los años 50, el alineamiento incondicional de la única central obrera reconocida por el Estado, la Confederación General del Trabajo (CGT), con el peronismo. (...)*

”Por más escandalosa que resulte esta promiscuidad política del gremialismo, la Argentina parece haberse adaptado a ella. Peor aún, en los últimos años y, en especial, durante la actual carrera proselitista, la opinión pública ha visto cómo, en vez de replegarse, este vicio se ha expandido. Lo que antes parecía una lamentable peculiaridad del movimiento sindical ha comenzado a contaminar a algunas organizaciones empresariales.

”El caso más estridente ha sido el de la Asociación de Bancos Argentinos, cuyo presidente, Jorge Brito, manifestó su apoyo a la reelección de la señora de Kirchner, con absoluto desdén por la representación que sus pares le han confiado.

”El titular de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren, debió aclarar que sus ambivalentes declaraciones sobre la necesidad de hablar con la Presidenta y con el gobernador Daniel Scioli sobre las políticas de los próximos años no eran una adhesión ni una apuesta a sus reelecciones. Poco después de hacerlo, Mendi-

guren participó de un acto en la localidad de Mercedes del que salió apoyando al candidato oficial a la intendencia, un militante de la agrupación La Cántora. (...)

”Desde que el kirchnerismo se estableció en la Casa Rosada, se han multiplicado los indicios de que algunos encumbrados dirigentes empresariales podrían haber canjeado su adhesión al Gobierno por diversos beneficios materiales: en algunos casos, créditos especiales del Banco Nación; designaciones como representantes del Estado en empresas en las que éste tiene participación o contrataciones para proveer al sector público determinados productos o servicios” (LN 29/6).

Cada vez más capitalismo de amigos, cada vez menos capitalismo de libre iniciativa privada, de libre empresa, terreno en el cual los monopolios que producen en el campo y la agroindustria se devoran a los capitales menos concentrados, que buscan desesperadamente la mano del Estado para subsistir.

Lo cierto es que, ante la caída de Héctor Méndez –ligado al sector agroindustrial– y la asunción de De Mendiguren como presidente de la UIA, la alianza conducida por los propietarios pamperos vuelve a tener al principal nucleamiento del empresariado industrial en contra. Lo mismo ocurre con la central que nuclea a los bancos privados de capital nacional (Adeba), que conduce el vilipendiado Jorge Brito. El pecado de estos empresarios consiste en no respetar el espíritu de cuerpo, en privilegiar sus negocios privados por sobre la defensa de la clase empresaria en su conjunto, a la cual deben defender desde sus centrales patronales.

Sobre esta base, se sale a golpear el modelo económico, poniendo como espejo lo que le sucede a Grecia en estos momentos, donde “el ajuste parece agravar y no solucionar la crisis, pero la realidad es que no tiene alternativas”, y a su vez “algunos argumentan sin fundamento legal ni económico, que la deuda es ilegítima”.

“En estos últimos años el viento externo a favor facilitó un crecimiento desmedido del gasto público y permitió que se alentara artificialmente el consumo. Se congelaron las tarifas de los servicios públicos compensando a las empresas con subsidios crecientes. El déficit fiscal es una realidad y, sin crédito, el Gobierno se obliga a financiarlo con el Banco Central y los fondos de la Anses. Resulta así que se expande la cantidad de dinero y se produce inflación. Se apela para reducirla sólo al ancla cambiaria y al inútil control de precios. La inflación en dólares supera el 20 por ciento anual, afectando la competitividad y el saldo comercial. Pero hay límites. Se están recreando las condiciones que, sin corrección, pueden llevarnos a serias dificultades para enfrentar los vencimientos de la deuda pública. Si eso sucede habrá consecuencias dolorosas y habrá que llegar a un ajuste. En ese momento será preferible que se lo haga ordenadamente; de lo contrario, se producirá en forma descontrolada y con peores resultados, como ocurrió tras la crisis de fines de 2001. Si esto sucede será importante saber que no hubo culpas ajenas y que se estarán pagando las consecuencias de haber hecho persistir un modelo ya agotado, pero presentado como digno de ser profundizado. Las correcciones deben iniciarse ya mismo, siguiendo aquello de que es mejor prevenir que curar”, sostenía el editoria lista (LN 12/6). Las “correcciones” que se exigen son claras: reducir el gasto público y por lo tanto el consumo popular, permitir el aumento de tarifas de servicios

públicos, volver a recibir créditos de los organismos financieros internacionales y por lo tanto someterse a sus planes, dejar que los precios fluyan sin control. En síntesis: “ajustar ordenadamente”, con lo cual queda claro que no se está demandando ninguna corrección al modelo sino su reemplazo liso y llano por otro más afín a los intereses de la oligarquía terrateniente y a toda su cadena de mando internacional.

Y, como continuidad de esto último, la Fundación Sociedad Rural Argentina presentaba una acción judicial reclamando que se declarasen inconstitucionales y confiscatorias las retenciones. La presentación estaba basada en el “perjuicio económico” de \$ 240.000 que dicha fundación tuvo en su colegio educativo agropecuario de Realicó (La Pampa), durante 2006 y 2009, a causa de las retenciones. El presidente de la SRA, Hugo Biolcati, denunciaba un sistema de comercialización “corrupto” y agregaba: “*Todo es discrecional y depende de los favores que hace un secretario de Estado a determinados grupos empresarios porque le conviene, porque le saca las baratas* [los cortes cárnicos a precios rebajados que empresarios de la carne están obligados por Moreno a colocar en el mercado interno]”. Al mismo tiempo, sostenía que el plan del Gobierno es continuar “*destruyendo el aparato productivo*”, favoreciendo “*la sojización y la despoblación de los campos*” (LN 15/6).

Días más tarde, le llegaba el turno al titular de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Pablo Taussig, quien en una entrevista disparaba no tanto contra el gobierno sino contra sus colegas que “*se callan la boca*” ante aquel. Comenzaba indicando que “*el Estado debe ser regulador, no empresario, salvo en situaciones puntuales. El Estado empresario no va*”, al tiempo que cuestionaba “*la ruptura de la institucionalidad y el no acostumbrarse a que la sociedad se gobierna por leyes, no con llamadas telefónicas*”. No obstante, frente a esto “[los empresarios] *tienen muy poca conciencia de clase y no tienen una agenda consensuada. Si les va más o menos bien, se callan la boca, hasta que los tocan a ellos. Creo que todos tenemos una culpa en eso. (...) Falta un pensamiento de mediano plazo y de cámaras representativas. Mientras dura la buena situación, nadie se queja*” (LN 18/6). El alineamiento es claro respecto de la línea crítica que las patronales del campo vienen sosteniendo respecto de la conducción empresarial industrial.

Una semana más tarde se realizaba el XIV Encuentro de la ACDE. Desde allí, disparaba Gonzalo Tanoira, director financiero de la minera Patagonia Gold: “*Necesitamos un marco legal de estabilidad que al menos durante diez años sea inamovible para generar las inversiones*”, cosa que no existe hoy debido al “*cierre de importaciones y exportaciones*”, la fijación de precios máximos a algunos productos y la existencia de una “*actividad sindical fuera de control*”. Por ello, proponía a sus colegas: “*Lo que nosotros podemos hacer es no invertir. El Estado nos puede obligar a muchas cosas, pero no a invertir. Puede sonar antipático, lo sé. Los argentinos no estamos dispuestos a invertir sin reglas de juego estables*”.

El argumento es tan sencillo como reiterado: todo lo que sean reglas de juego estables pero distintas a las deseadas por este sector del empresariado no son consideradas “reglas de juego estables”. A su vez, el empresario

hace gala de su negativa a asumir cualquier función social del capital. Para él, las inversiones empresarias son cosa pura y exclusivamente del empresario, quien no debe rendir cuentas a nada ni a nadie de lo que hace. El Estado debe dejarlo ganar dinero y ya. Es esta lógica la que busca contrarrestar el proyecto de ley de reparto de ganancias entre los trabajadores, que estipula la participación de los mismos en los directorios de las empresas, como modo de controlar que las inversiones y la producción tengan un fin social, es decir, que beneficien al conjunto de la sociedad, y no sólo al empresario. Así lo definía la Constitución aprobada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1949.

Por ello mismo, Tanoira consideraba “excesivo” pedir que los empresarios, además de “compartir sus ganancias con el Estado” a través de los impuestos (dijo que el fisco se lleva casi el 50% de lo que generan), las distribuyan entre los trabajadores: “Si agregamos la distribución de ganancias, vamos a quedar todavía más rezagados en la captación de inversión privada”. Y sentenciaba: “Castigar la inversión privada no es la manera de beneficiar a los que menos tienen”.

Al mismo tiempo, el directivo de la minera reconocía que “todavía existe una enorme informalidad en el sector empresario, en cuanto al pago de impuestos, coimas y cumplir con las normas de medio ambiente”, pero lo justificaba contando que muchos de sus colegas “cuando pierden su libertad como empresarios sienten que ya no les corresponde” aportar a la sociedad. El argumento es tan magnífico como absurdo. La millonaria evasión fiscal y todas las violaciones normativas que realiza el empresariado se producirían justamente por culpa de un exceso de dichas normativas, es decir, de un excesivo “marco legal de estabilidad”. Si dejaran de controlar tanto, si nos permitiesen hacer lo que nos de la gana con nuestro capital, todos seríamos respetuosos de las normativas establecidas. Dando un paso más en el razonamiento: sólo cumpliríamos las normas si dejaran de existir las normas.

A su turno, Nicolás Braun, director de Mercaderías de Supermercados La Anónima se refería a otra de las trabas que los empresarios encuentran para el libre desarrollo de su actividad creativa: “En los últimos 5 o 6 años los conflictos laborales han pasado a ocupar una parte importantísima de nuestra agenda. En general, los empresarios encontramos muchísima más conflictividad laboral que antes” (LN 24/6). Y encima del Estado, los sindicatos, así no se puede muchachos, así no invertimos...

Autoritarismo K

Sobre la base de este panorama empresario, todos los cañones volvían a empujarse en la dirección de denunciar el autoritarismo gobernante, de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

La incansable Beatriz Sarlo volvía a insistir con un argumento que viene repitiendo: la incapacidad intelectual con que carga la oposición política para librar la batalla ideológica contra el kirchnerismo: “Borrar las diferencias ideológicas implica borrar un ordenamiento de valores; implica también considerar a la sociedad como ‘a gente’, a los ciudadanos como ‘vecinos’. Todo eso integra el arsenal de la des-ideologización

de la política, que no es el mejor camino cuando, justamente, la re-ideologización kirchnerista todavía se mantiene en alza. Discutir con el kirchnerismo el campo progresista implica reconocer la existencia de ese campo, no su negación por una circular de los asesores de imagen” (LN 17/6). A la pelea por ese “campo”, entonces.

A mediados de mes, la Fundación Libertad y Progreso publicaba un trabajo en el que se consignaba que la Argentina había caído de la posición 120 a la 125 –sobre un total de 194 naciones– en materia de calidad institucional, a partir de mediciones realizadas por organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras. Nuestro país sería, según este informe, uno de los siete que más han caído en su Índice de Calidad Institucional (ICI) respecto del año anterior y al mismo tiempo descendía 32 lugares desde 2007 a la fecha (LN 16/6). El problema de la institucionalidad estaba a la orden del día para el órgano de los Mitre, que planteaba en un editorial al respecto: “Los últimos años han sido testigos de un profundo retroceso en materia institucional, al extremo de que, para algunos actores políticos, la división de poderes y ciertos mecanismos propios de la vida republicana constituyen un mero estorbo burocrático. Esa lamentable cultura política se traslada, invariablemente, a parte de la sociedad, incrementando la percepción de que, en todos los terrenos, la fuerza está siempre por encima de la ley” (LN 17/6).

De allí, se insistía con un asunto predilecto para la oligarquía: el concepto de Justicia y cómo se imparte la misma. Así sostenía otra nota editorial, denominada “¿Justicia o persecución?”: “Lo que ha estado y continúa ocurriendo con algunos procesos judiciales en nuestro país, como los casos audazmente emprendidos contra algunos empresarios rurales o contra Shell, Papel Prensa, Fibertel o, más recientemente, el grupo Techint, sugiere que el momento es propicio para recordar que cuando, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados comenzaron a organizar el histórico Tribunal de Nuremberg, se pusieron en evidencia dos visiones muy diferentes acerca de cómo debía operar y cuál debía ser su cometido institucional en la búsqueda de administrar justicia.

“Para el principal representante soviético en esas conversaciones, el general Nikitchenko, en ese momento vicepresidente de la Corte Suprema de la Unión Soviética, el tribunal debía simplemente ‘determinar la medida de la responsabilidad de cada persona en particular y establecer el castigo necesario’. Es lo que sucede todavía en Cuba y en otros países autoritarios, en los que el papel del Poder Judicial es el de un mero agente de quien ocupa el Poder Ejecutivo. Presumía aquel general, desde el comienzo, que todos los que resultaran convocados a comparecer ante el tribunal para ser juzgados eran inexorablemente criminales.

“Esta visión, de naturaleza profundamente totalitaria, supone que la justicia es apenas la ejecutora de la voluntad del poder político, al que debe estarle siempre subordinada de manera sumisa.

“La concepción soviética apuntada tiene un llamativo paralelo con la visión de aquellos que, entre nosotros, se refieren constantemente a la necesidad de que existan ‘juicio y castigo’. De hecho, así rezan los carteles y las consignas de algunas de las más conocidas organizaciones de derechos humanos en nuestro país. Como si la mera iniciación de un proceso debiera necesariamente terminar en la culpabilidad de los acusados, sin que exista, siquiera, en su favor

la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Nacional. Como si el acusador fuera, a la vez, juez. (...)

”Más allá de las presiones de distinto tipo y hasta de las intimidaciones, cabe esperar que nuestros jueces mantengan, en todas las circunstancias, una actitud real de imparcialidad e independencia, sin la cual se derrumbarían los equilibrios y contrapesos republicanos de nuestra Constitución, al tiempo que los argentinos quedaríamos enteramente a merced de la arbitrariedad de un poder que, en su perverso accionar, desgraciadamente no reconoce fronteras de ningún tipo” (LN 8/6).

Anotemos. Se identifica el concepto de Justicia del Gobierno con el de la Unión Soviética —y por lo tanto con los actuales gobiernos de Cuba y Venezuela—, algo con lo que La Nación viene insistiendo desde hace tiempo. Tal concepto no se reconoce en los procesos judiciales normales de la democracia occidental —donde rige la plena división de poderes— y violenta nuestra Constitución. A su vez, algunos organismos de DDHH invocan esta categoría soviética bajo la consigna “juicio y castigo”. Frente a todo esto, no queda sino atrincherarse en la corporación judicial, terreno en el cual la oligarquía mantiene cierta estructura que responde a sus intereses. Pues está en juego la propiedad privada: “Esta necesidad intrínseca del populismo hace que los gobiernos de ese signo ignoren la democracia republicana y sean cada vez más autoritarios. Para sostenerse en el poder, necesitan violar cada vez más derechos de propiedad. Y para violar más derechos de propiedad, necesitan que no haya división de poderes, ignorar los fallos de la Justicia y silenciar las voces opositoras”, sostiene una vez más el editorialista (LN 12/6). La justicia comienza a convertirse, entonces, en el único garante de los derechos de propiedad, ya que “es evidente que hay una impronta de Fidel Castro y Hugo Chávez en este estilo populista y demagógico” (LN 23/6).

Y se reproducían las voces académicas para intentar explicarse y explicar, desde la perspectiva oligárquica, en qué consiste esto del populismo en la actualidad. Así, por ejemplo, una nota en el diario mitrista firmada por el economista Daniel Gustavo Montamat, titulada “El populismo posmoderno”, teorizaba: “El populismo político espanta a los que comparten valores republicanos fragnados en los principios del constitucionalismo moderno y el Estado de Derecho, pero resulta edulcorado para quienes se conforman con una democracia formal basada en la regla de la mayoría. Las versiones maniqueas de la realidad a menudo suman votos y ganan elecciones. Si enfrentan instituciones débiles y crisis sociales recurrentes, muchas veces degeneran en las denominadas democracias ‘delegativas’ o ‘prebendarias’ que, salvo por los turnos electorales, en nada se parecen a las democracias representativas o participativas. Bajo la lupa de la argumentación moderna, todas las variantes de democracia populista son ni más ni menos que reencarnaciones de los proyectos corporativos fascistas de mediados del siglo pasado; reminiscencias de los nacionalismos románticos del siglo XIX. (...)

”Pero el auge populista de principios del siglo XXI tiene más que ver con el presente que con el pasado. El populismo es la nave insignia de la política posmoderna, en la que rige el ‘imperio de lo efímero’. La obsesión por ocuparse en las demandas del hoy —del aquí y del ahora—, movilizándolo pasiones y sentimientos exculpatorios, el pragmatismo exacerbado para brindar soluciones rápidas que no reparan en consecuencias futuras y el culto a la sensación

que domina el presente constituyen una poderosa apelación a eternizar el instante: el proyecto excluyente de la posmodernidad. (...)

”La redistribución ya no es un objetivo de justicia social, sino un medio (un pretexto) para alentar sensaciones de consumo efímero, desigual y clientelar para muchos, pero anestésico en la angustia del instante. El populismo en clave moderna se anatemiaba como ‘pan para hoy, hambre para mañana’; en la posmodernidad es ‘pan para hoy, no existe el mañana’” (LN 29/6).

La propia doctrina que los apologistas del capitalismo eterno crearon hace varias décadas como elemento de dominación en el plano de las ideas, el llamado “posmodernismo”, es cuestionado ahora por ellos mismos como un elemento nocivo más que contiene esa bacteria llamada “populismo”. Obsérvese que se culpa a estas democracias “delegativas” o “prebendarias”, de aquello que las relaciones de producción capitalistas —con sus bellas democracias occidentales— producen en la subjetividad: “el culto a la sensación”, la “eternización del instante” y el “imperio de lo efímero”.

Frente a esto, la propuesta que hacía La Nación en otro editorial era “La democracia en serio”. Allí se consignaba “el resultado de una encuesta realizada entre alumnos de escuelas públicas que ha demostrado que para el 60 por ciento de nuestros chicos la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno para la Argentina y el mundo.

”El trabajo se realizó con alumnos de primero y segundo año de los institutos secundarios de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Sus edades oscilan entre los 12 y los 15 años. (...)

”El 40 por ciento de los 500 adolescentes consultados ha dicho que cree que la democracia es la mejor forma de gobierno. El 30 por ciento contestó que lo cree también, pero a veces sí, otras no. El 25 por ciento dijo que no sabe y el 5 por ciento afirmó que la democracia no es lo mejor con que podamos contar para un buen gobierno.

”El ministro de Educación ha prometido que habrá medidas para fortalecer los conceptos de democracia y partidos políticos en los colegios y que a esos fines se distribuirá material didáctico. Así dicho suena muy bien, pero no vaya a ser que por allí se cuelen incongruencias tan manifiestas como la de una tendencia todavía subterránea, que amenaza con aflorar, y que pretende despojarnos de la ‘democracia representativa’ en nombre de una ‘democracia participativa’ sobre la que hay mil razones para desconfiar” (LN 25/6). De este modo, la oligarquía toma nota del peligro que conlleva para la manutención de lo existente el creciente grado de participación y politización popular. Ante esto, la respuesta es “no hagan olas”, y menos en la educación, punto sensible para la construcción hegemónica. Porque en la “democracia representativa”, donde “el pueblo no gobierna ni delibera”, la clase dominante ejerce el poder más allá de gobiernos de uno u otro signo. Recordemos los llamados desesperados por parte de aquella para recrear el sistema de partidos políticos, quebrado por una crisis en el sistema de dominación de dimensiones crecientes. Este es el verdadero miedo oligárquico, escondido detrás de las diatribas contra el “autoritarismo” y el “despotismo”. El temor de que el auge de la intervención popular en la política, la militancia, se consolide e institucionalice.

De ahí las alertas que comenzaban a llegar respecto de una potencial reforma constitucional que ensayaría Cristina Fernández en caso de resultar reelecta, con el supuesto objetivo de permitir la reelección indefinida. Comienza a circular el fantasma de las reformas realizadas en los países del denominado ALBA –Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua– donde más que la reelección indefinida se consolida un proyecto contrario a los intereses del capital, y para ello se impulsan distintas herramientas para el ejercicio del poder popular. Así se expresaba el experto en temas de justicia de la Tribuna de Doctrina, Adrián Ventura, en su artículo “Reformas para conservar el poder”: “No era difícil predecir que la presidenta Cristina Kirchner se presentaría para otro período. Ahora, no es difícil prever que, en caso de resultar elegida, intentará reformar la Constitución nacional para asegurarse la reelección indefinida. Por lo menos, se reclamará esa reforma para evitar que la mandataria se convierta, después de diciembre de 2011, en un pato rengo, como se llama en los Estados Unidos a un presidente que se acerca al ocaso de su mandato” (LN 23/6). En última instancia, están comenzando a preparar el terreno para dar una pelea que entienden inevitable, la pelea por impedir que se reforme la Constitución en el sentido señalado.

Y en este terreno comenzaba a jugar a fin de mes la Primera División del equipo terrateniente. El primero era el renombrado Mariano Grondona, con su nota dominiguera titulada “Cristina Kirchner, ¿es democrática o monárquica?”: “La Argentina enfrenta un profundo dilema institucional. Si de aquí a octubre gana la democracia, el despotismo kirchnerista se desvanecerá. En caso contrario, enfermo o no, Chávez nos visitará. Este dilema confiere a las próximas elecciones un doble carácter. De un lado, se elegirá a los funcionarios que habrán de gobernarnos. Este es el aspecto supuestamente ‘normal’ de lo que ocurrirá en los próximos meses. Del otro lado, empero, el pueblo decidirá cuál de los dos principios que están en pugna, la democracia y el despotismo, prevalecerá porque, en tanto la derrota de Cristina traería consigo la plena restauración de la república democrática, su victoria reabriría de inmediato la propuesta, que adelantó el gobernador Gioja en San Juan, de una ‘Cristina eterna’ mediante plebiscito, tal como la definió en su momento, adelantándose afanosa a todos sus correligionarios, la diputada Diana Conti. ¿Qué tendremos, entonces, por delante? Una ‘presidenta Cristina’, en el tramo final de su ciclo republicano, o una ‘reina Cristina’, dinástica y sin plazos?” (LN 26/6).

Y finalmente, jugaba el filósofo Santiago Kovadloff, en su escrito “La Constitución o el delito”: “Queda claro: la lucha de fondo, a partir de aquí, será a favor o en contra de la Constitución. A favor o en contra de la ley. A favor o en contra de la alternancia. A favor o en contra del autoritarismo. Sólo después, si se impusiera el marco de un sistema político y jurídico saneado, la izquierda y la derecha tendrán ocasión de ofertar sus matices doctrinarios.

”Hasta ese momento la lucha será otra. Hasta allí, lo que está en juego son dos concepciones de la gobernabilidad. Una es democrática, la otra no. Anteponer lo ideológico –como campo de confrontación prioritaria– a esta alternativa axiomática equivale a darle la espalda al drama del país para buscar amparo en el lirismo conceptual. O, lo que es peor, a instalar la discusión en un escenario que a todas luces le conviene al oficialismo para seguir camu-

flando con bellas palabras hechos deleznable y propósitos demagógicos. (...)

”Hay horas en las cuales no entender qué es lo decisivo para una nación puede resultar fatal para su porvenir. Esta es una de ellas. Las circunstancias exigen de las dirigencias opositoras una lucidez perceptiva que no admite más dilaciones. Lo que primeramente hace falta es derrotar al kirchnerismo. Se trata de identificar o dejar de identificar la línea divisoria entre quienes comprenden que es indispensable defender la democracia y volver a consolidarla y quienes la esquilman sin pudor por entender que es otro el camino que debe seguir la organización nacional. De modo que o se está con la Constitución o se está contra ella. Con el propósito de respaldarla o con el proyecto de abolirla en favor de otra legalidad. (...)

”De modo que la cuestión primordial no es saber quién ganará y quién perderá. Lo que cabe saber es qué se ganará y qué se perderá con quien gane y con quien pierda. Se trata de ver si estamos dispuestos a ir hacia una reforma constitucional que asegure la reelección indefinida del oficialismo actual o hacia un proyecto de alternancia que devuelva consistencia y seriedad a la democracia argentina (LN 30/6). El filósofo no deja mucho comentario por hacer. Los candidatos opositores deben entender que no es necesario ni posible esperar hasta la segunda vuelta. Hay que unirse contra el Gobierno luego de las primarias. Está en juego la República y todos los comprometidos con su causa deben acudir a su salvataje. Luego llegará el tiempo de las “ideologías” y de los “matices doctrinarios”. Está en juego la propiedad privada, el dominio de clase. Toda la dirigencia comprometida con ese dominio debe salir a defenderlo.

La corrupción

Iniciando el mes, aparecía –agigantado por la compulsión mediática– la noticia que tendría en vilo a los argentinos durante semanas.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Gobierno e investiga casos de lavado de dinero, remitía a la Justicia su expediente contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. La acusación estaba centrada en el desvío de fondos por parte de la empresa Meldorek, supuestamente propiedad de Schoklender, que recibía los fondos del Estado para la construcción de las viviendas sociales del proyecto Sueños Compartidos, llevado adelante por la Fundación. Schoklender era sospechado de hacer desaparecer millones de pesos girados a la Fundación, utilizando como “pantalla” la empresa Antártica Argentina SA, con lo cual, la imputación era por tres delitos: fraude al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita.

El caso incluía la denuncia que realizaran el 18 de junio de 2010 dos diputadas de la Coalición Cívica contra Schoklender por lavado –que revela irregularidades en la compra de terrenos en José C. Paz– pero tenía además informes de varios organismos públicos sobre la situación patrimonial de quien había sido hasta una semana antes representante de las Madres de Plaza de Mayo.

Ante los hechos, Sergio era reemplazado como apoderado de la Fundación por su hermano Pablo, quien a su vez sería separado por la Presidenta de la asociación pocos días después (LN y P12 2/6).

La causa avanzaba en pocos días hacia la prohibición de salir del país para los hermanos Schoklender –medida dispuesta por el juez que entiende en la causa, Norberto Oyarbide– a lo que seguía una intimación a la fundación para que entregase toda la documentación ligada a la construcción de las obras y el allanamiento de cuatro domicilios –entre los que se cuentan las oficinas de las mencionadas Meldorek y Antártica Argentina SA (LN y P12 4/6).

Finalmente, el día 13, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se presentaba en los tribunales y pedía al juez Oyarbide ser aceptada como querellante de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por una serie de cargos, a saber:

- ✓ No haber depositado en las cuentas de la Fundación Sueños Compartidos todos los cheques destinados a la construcción de viviendas sociales y, en cambio, haberlos cambiado en cuevas financieras. Tal dinero aparentemente sustraído podría haber producido un endeudamiento de Madres.
- ✓ Haberse llevado en forma clandestina documentación clave de sus dependencias en un camión blindado la noche del 3 de junio, justo cuando se conoció públicamente el conflicto que mantenían.
- ✓ Poner a nombre de Meldorek parte de los vehículos que se usaban para tareas de la fundación (P12 y LN 14/6).

A principios de mes, cuando recién se oían los primeros estertores del caso, Madres intentaba restarle trascendencia al caso, a través de su presidenta. La misma expresaba, en la marcha número 1728 que las Madres realizan todos los jueves: “*Muchos vinieron hoy a esta plaza vorazmente para ver qué carajo va a decir la Hebe, pero se van a tener que morder la cola porque lo que la Hebe va a decir es que queremos que este país sea como lo deseaban nuestros hijos. Nuestros hijos dieron la vida por un país mejor y hay demasiada sangre como para perder el tiempo en pelotudeces*”. Y dejaba en claro su alineamiento: “*Gracias, compañeros, por ser hijos de las Madres, y porque hoy estamos defendiendo algo más que a las Madres: al proyecto nacional y popular*” (LN y P12 3/6).

Desde el propio Gobierno llegaba la defensa del proyecto de las Madres. “*En todo caso, lo que habrá ocurrido es que [Schoklender] ha defraudado a las Madres de Plaza de Mayo*”, expresaba el ministro del Interior Florencio Randazzo, aclarando que Schoklender “*no es funcionario del gobierno nacional*” y que “*de ninguna manera se deben sembrar dudas respecto de una organización*” que es “*orgullo y prestigio en todo el mundo*”. Por su parte, el canciller Héctor Timerman manifestaba su “*total y absoluta confianza*” por las Madres “*y por nadie más*”. “*Voy a seguir promoviendo su obra en el extranjero, a pesar de cualquier crítica que le quieran hacer*”, enfatizaba el ministro de Relaciones Exteriores. Para culminar que “*muchos de los que se beneficiaron, compraron y se apropiaron de empresas hoy han elegido culpabilizar a Hebe y, a través de Hebe, pegarle a todo un movimiento de derechos humanos, en esa no voy a entrar*” (P12 3/6). El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández sostenía: “*Tengo claro que las Madres no tienen nada que ver con esto. Sé cómo vive Hebe de Bonafini, cómo se desarrolló toda la vida y sé lo que hace todos los días*” (LN y P12

6/6). También opinaba el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Frente a la pregunta del periodista de La Nación acerca de si “*pondría las manos en el fuego por Hebe de Bonafini?*”, respondía: “*Por supuesto. No sólo por Hebe, sino por toda la fundación. Por los demás, por los que circunstancialmente han administrado, no. (...) Ahora salió el nombre de Schoklender, pero son 16 personas las que están involucradas. Las denuncias no deben desmerecer la tarea de esa fundación*” (LN 8/6). Y el día 8 la titular de las Madres se entrevistaba con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, como un gesto de respaldo político por parte del Gobierno en medio de la investigación sobre las operaciones de Sergio Schoklender (P12 9/6). En el mismo sentido se expresaba el diputado del SI-UP Eduardo Macaluse: “*Schoklender se ha enriquecido con plata que era para los más pobres entre los pobres*”, y advertía que “*no hay que impugnar a las organizaciones para no caer en una discusión electoral*”. Para finalizar: “*Estoy convencido de que Hebe de Bonafini no ha tocado un solo centavo ni guarda complicidad*” (P12 9/6).

Desde la CGT, salía a opinar su secretario de Derechos Humanos, Julio Piumato: “*Es una utilización para manchar a las Madres de Plaza de Mayo (...) Algunos medios de comunicación aprovechan esta causa para cuestionar indirectamente las políticas de derechos humanos*” (P12 4/6)

Por su parte, el fiscal Jorge Di Lello, quien había requerido al juez las medidas mencionadas al comienzo, declaraba que “*no sólo el Estado sino también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los Derechos Humanos*” era la damnificada por los hechos a investigar (LN 4/6).

Del otro lado, comenzaba a escucharse el coro opositor, parejito y ordenado de derecha a izquierda del teatro. La diputada del GEN Margarita Stolbizer afirmaba que es “*aberrante*” tratar de amparar “*la corrupción y los delincuentes en el discurso legítimo y justo de los derechos humanos*”, advirtiendo que “*hay una responsabilidad muy fuerte y grande del Estado por haber inyectado recursos a una organización privada sin ningún tipo de controles*”. El jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, sostenía que es “*increíble el silencio*” que mantiene el Gobierno y le atribuía responsabilidad en el escándalo: “*Esto no podría haber sido posible sin una red enorme de corrupción estatal que los ampare*”. Al mismo tiempo, el diputado presentaba un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer el uso de los fondos del programa Sueños Compartidos. También el diputado Gustavo Ferrari presentaba un proyecto de resolución reclamando al Ministerio de Planificación Federal informes sobre “*la ejecución de obras habitacionales y de equipamiento comunitario por parte de las Madres de Plaza de Mayo*”. El legislador denunciaba a su vez que, según una auditoría al Instituto de la Vivienda bonaerense, realizada por el gobierno nacional, la construcción de 748 viviendas adjudicadas a las Madres tuvo un costo de \$ 161.087 por unidad, cuando otro programa habitacional de villas y asentamientos costaba un promedio de \$ 94.766. “*El kirchnerismo está repleto de casos como el de Schoklender; no le encuentro grandes diferencias con los negociados que hicieron Jaime, Moyano y De Vido*”, disparaba por su parte Ricardo López Murphy, candidato a jefe de gobierno porteño por el

Partido Autonomista Nacional, durante una recorrida por Palermo y Recoleta. También afinaba en el coro el candidato a presidente por el Frente de Izquierda, Jorge Altamira: *“Estamos asistiendo al episodio más triste de los últimos años, que es la completa desnaturalización del mejor símbolo que tenía el país, como las Madres de Plaza de Mayo, por culpa de una corruptela de un grupo que las rodea. (...) Esa corruptela viene de la política de cooptación y regimentación que sigue el Gobierno con todas las organizaciones populares”* (LN 4 y 5/6). Y en la misma línea, salía a la palestra la diputada nacional cordobesa y candidata a vicepresidente por el Frente Amplio Progresista que encabeza Hermes Binner, Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos durante la última dictadura. Así sentenciaba: *“Yo no eximo de responsabilidad a nadie por el dolor”*. Y trataba de restarle relevancia a la historia de lucha de la Asociación Madres de Plaza de Mayo: *“Las Madres no son Hebe de Bonafini; detrás de ese pañuelo blanco hay muchísimas mujeres a las que nadie les conoce la cara y que cuando todo el país estaba muerto de miedo tuvieron el coraje de ir en silencio a increpar al poder”*. En tanto, el diputado nacional por la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, sostenía: *“El Gobierno formó parte de la estafa por connivencia”*. Y nuevamente la diputada Margarita Stolbizer, cuando se le pedía opinión sobre si Bonafini estaba involucrada en las maniobras que tienen como protagonista a su ex apoderado, aseguraba: *“Totalmente”*. (LN 13/6). Otro que aportaba a la causa era el ex presidente y candidato por el partido Unión Popular, Eduardo Duhalde, sosteniendo que las irregularidades por las que se investiga a ex miembros de la fundación *“eran un secreto a voces”*. *“Es el Gobierno el responsable, ni siquiera Hebe de Bonafini”*, afirmaba Duhalde, y agregaba un elemento más al tema: *“¿Qué tienen que ver las Madres con el hecho de ser empresarias de la construcción? Es absurdo”*. (LN 6/6). Y desde la Coalición Cívica (CC), los diputados nacionales Juan Carlos Morán, Elsa Quiroz y Fernanda Reyes presentaban en la Cámara baja un pedido de interpelación contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros funcionarios, como José López y Abel Fatała. *“Queremos preguntarles por todas las transferencias que se hicieron a distintas ONG para la construcción de viviendas”*, decía Morán. *“La sospecha es que no hay uno, sino muchos Schoklender, y que se repiten sobreprecios, empresas amigas y retornos en perjuicio de todos los argentinos”*, sumaba el diputado bonaerense y candidato a gobernador por la CC (LN 6/6). En la jornada de interpelación, la diputada Quiroz consideraba que *“los ciudadanos no le pueden pedir rendición de cuentas a Schoklender sino a funcionarios en los cuales se delega la gestión y las decisiones”* (P12 9/6). Y quien llamativamente se sumaba al coro de críticas hacia Madres era el militante social y ex funcionario del Gobierno Luis D’Elía, para quien *“la investigación se debe hacer a fondo, incluida Hebe, afecte a quien afecte”*; ampliando: *“No puedo creer que entraron 765 millones de pesos y no se sabía nada. Creo que ella debería estar al tanto de las obras, lo que entraba y salía”* (LN 11/6).

Quedaban así señalados los ejes a través de los cuales girarían los argumentos que la oligarquía y su personal político utilizarían para sumar fuerza a su proyecto. Primero, la corrupción y el uso faccioso de los organismos

de control (como la UIF). Segundo, el exceso del gasto público y el reemplazo por este del libre juego creativo de la actividad privada para satisfacer las necesidades de la sociedad. Tercero, la corrupción y el uso faccioso de dichos fondos por parte de los gobiernos kirchneristas. Cuarto, la “partidización” y la “faccionalización” de los organismos de Derechos Humanos, que al ser cooptados por el kirchnerismo han perdido su carácter universal para el que fueron creados y se desviaron de sus más elevados propósitos para abrazar una causa corrupta. Quinto, el salto de dichos organismos a la realización de actividades que no les competen y nada tienen que ver con su naturaleza, como la realización de viviendas sociales. Sexto, el uso faccioso de la Justicia y la consiguiente pérdida de su carácter independiente a causa de la falta de respeto por la división de poderes por parte del gobierno kirchnerista.

De este modo, la batería oligárquica apuraba la pluma e iniciaba su bombardeo ideológico a través de las páginas de su periódico matinal, La Nación. El primer editorial dedicado al tema, que llevaba el título de “Corrupción y derechos humanos”, rezaba: *“En el dinero estatal radicaría la clave del escándalo que estalló con el abrupto alejamiento de Sergio Schoklender del cargo de apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que puso al descubierto el escandaloso enriquecimiento de quien en 1981 asesinó, junto con su hermano Pablo, a sus padres. (...)”*

“La UIF nada hizo durante un año, demostrando una vez más el grado de politización y falta de independencia del organismo. Ayer, horas después de que su titular, José Sbattella, afirmara que faltaban ‘indicios’, la UIF no tuvo más remedio que cumplir con su obligación y trasladar la denuncia al fiscal federal Raúl Pleé. (...)”

“Todo hecho de corrupción es deleznable, pero lo es más cuando se realiza con el dinero destinado a los sectores más carenciados. Y lo es más aún si quienes lo llevan a cabo pertenecen o están relacionados con un organismo de derechos humanos. Por eso es que la seriedad e imparcialidad de la investigación judicial no debe dejar lugar a dudas. (...)”

“Sergio Schoklender ya envió un pesado mensaje de neto corte político cuando afirmó en una entrevista que la dirección y la presidencia del consejo de administración de la fundación la ejercía Bonafini. Involucrarla a ella equivale a involucrar al Gobierno. No debería extrañar. El kirchnerismo parece corromper todo lo que toca” (LN 2/6).

Días más tarde, la Tribuna de Doctrina volvía a golpear con un segundo editorial titulado “Caso Schoklender: nadie está por encima de la Justicia”: *“Resultan inaceptables los diversos intentos por circunscribir el caso Schoklender a la actuación de un supuesto administrador deshonesto, cuando el hecho tiene una proyección mucho más grande y más grave porque atañe al Gobierno, responsable en primera y última instancia de los millonarios fondos malversados, y a uno de los organismos de derechos humanos más conocido dentro y fuera del país.”*

“Es un caso que muestra en toda su crudeza cómo los fondos estatales se emplean sin controles para hacer política y en qué deviene un organismo de derechos humanos cuando, a cambio del manejo de esos millonarios fondos, olvida su razón de ser para convertirse en una suerte de unidad básica del kirchnerismo. (...)”

”Investigar la operación en toda su magnitud no es atacar a las Madres, como se quiere hacer creer, ni atacar a todos los organismos defensores de derechos humanos. Se trata, solamente, de no colocar a nadie, ya sea persona física o jurídica, por encima de la Justicia. (...)”

”Se equivoca el Gobierno si, acostumbrado como está a la corrupción, cree que éste es un caso más. No lo es. Al haber permitido la malversación de caudales públicos destinados a los sectores más pobres empleando a un organismo de derechos humanos que simultáneamente se convirtió al oficialismo, han abusado de esas banderas y se han burlado de la pobreza (LN 7/6).”

Luego aparecía un tercer Editorial llamado “Descontrol presupuestario y uso faccioso del Estado”: *“El reciente escándalo que involucra a la fundación Madres de Plaza de Mayo y al Gobierno en relación con la construcción de viviendas no es casual. Si bien ambos actores han puesto énfasis en la responsabilidad de Sergio Schoklender en la monumental defraudación al fisco y a los contribuyentes, lo ocurrido tiene raíces más profundas en el actual descontrol presupuestario, el uso faccioso de las agencias de control del Estado y la falta total de transparencia en los actos de gobierno que ha caracterizado las gestiones del matrimonio Kirchner. (...)”*

”Enmarcar el caso Schoklender como una acción aislada de una persona o un conjunto de personas de dudosa conducta ética es un enfoque tan incorrecto como tendencioso, que sólo conducirá a más hechos como el recientemente descubierto. No son las personas sino el sistema el que merece una exhaustiva revisión (LN 9/6).”

Y finalmente, el columnista del diario de Mitre, Fernando Laborda, le dedicaba unas palabras a este asunto en su artículo “El mal llamado caso Schoklender y el futuro de Cristina”: *“El mal llamado caso Schoklender —que no empieza ni termina en la deshonestidad de un ‘sátrapa’, como se intenta hacer creer desde el oficialismo— es apenas un ejemplo de una operatoria por la cual se canalizan recursos fiscales hacia entidades que, al ser de naturaleza no estatal, no están sujetas a los procedimientos de contratación y de control que rigen dentro del Estado. En la misma lógica, se ubican las transferencias del sector público hacia empresas privadas o a sociedades anónimas con participación estatal, como Enarsa o Aerolíneas Argentinas. Cabe preguntarse, entonces, cuántos personajes como Schoklender harán negocios con el Estado sin que lo sepamos” (LN 12/6).*

Varias cuestiones se intentan fijar aquí. Primero, el responsable de los hechos de corrupción mencionados no es Sergio Schoklender sino la presidenta de la Asociación, Hebe de Bonafini, y el propio Gobierno que tiene a las Madres como pilar fundamental de su política de Derechos Humanos. Segundo, el causante último de tan grandes males es el hecho de que se trata de fondos de origen estatal, o sea, el gasto público (recordemos las incansables quejas que se vienen realizando al respecto, como las mencionadas en el apartado anterior). Tercero, los organismos “independientes” de control financiero no cumplen con su función al ser controlados por el Gobierno. Cuarto, el oficialismo y las Madres “se han burlado de la pobreza”. La oligarquía se erige como la principal defensora de pobres y ausentes frente a un gobierno corrupto que convierte el combate a la pobreza y la noble causa de los Derechos Humanos en una maquinaria para enriquecerse.

Lo que está en el centro de la discusión, en última instancia, es quién es más eficiente para el manejo de los fondos públicos. Para la Tribuna de Doctrina terrateniente esto es claro. Son las empresas privadas las elegidas para tal fin. No puede ser el Estado el ejecutor de los fondos, y muchísimo menos una organización popular.

El papel de los organismos

Uno de los objetivos de la oligarquía terrateniente con su bombardeo mediático sobre el caso Schoklender, había sido sin dudas abrir grietas entre las diferentes organizaciones de DDHH, en tiempos en que muchas de estas experimentan un creciente proceso de politización, al encolumnarse abiertamente del lado del proyecto nacional y reconociendo cada vez más detrás de la dictadura militar —que acabó con la vida de 30.000 argentinos— no a una violencia perversa y abstracta, sino la violencia que descarga una clase social sobre otra en la defensa de sus intereses.

“Abuelas es autónoma, es diferente, nacimos en el mismo momento [que las Madres], pero tenemos objetivos, tácticas, disciplinas y actitudes totalmente distintas”, sostenía la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Y añadía: *“Es un momento realmente muy triste, por muchas razones. La más importante quizás es que no nos confundan, a veces dicen abuelas en vez de madres y madres en vez de abuelas”.* Y se distanciaba de las actividades sociales realizadas por Madres, que trascienden el reclamo desde el estricto punto de vista de los DDHH: *“No voy a hacer cosas que no sé hacer ni debo. Nosotras tenemos la misión de encontrar 400 nietos lo antes posible. El objetivo no es ser empresarios, sino buscadora de dos generaciones”.* Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, pedía no confundir el escándalo con la lucha de las Madres. *“Pero con el kirchnerismo se metieron en el negocio más corrupto, que es la obra pública”,* para subrayar que *“el Gobierno buscó esterilizar las organizaciones de derechos humanos para que no denuncien las violaciones del presente” (LN 10/6).* Por su parte, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida señalaba: *“Atrás de un pañuelo están los 30.000 (desaparecidos)... hay que saber llevar el pañuelo realmente”.* Y aclaraba, en la misma línea de Carlotto: *“Nosotras nos separamos en 1986 de la señora Hebe de Bonafini y no tenemos idea de qué hace o deja de hacer”.* E insituía ante las preguntas periodísticas: *“Por algo nos separamos en el ’86, cuando se investigue a la señora de Bonafini la gente sabrá quién es quién”.* La frase comenzaba a circular libremente y fuera de contexto por todos los medios concentrados, cuyos titulares se limitaban a decir que Almeida estaba exigiendo una investigación judicial hacia Hebe de Bonafini. Ello generaba una protesta airada por parte de la integrante de Madres Línea Fundadora y una exigencia de rectificación a dichos medios: *“Exijo que el canal Todo Noticias (TN) deje de inventar declaraciones que yo no hice, hay algunos multimedios que lo que quieren hacer es desunir a los organismos de derechos humanos y por eso no tolero que me den vuelta las cosas” (LN y P12 11/6).* Lo mismo ocurría con Estela de Carlotto, quien aparecía en tapa de diarios acusando a Hebe de estar ligada a los delitos de Schoklender: *“Deformaron lo que dije,*

lo tergiversaron con mala intención”, denunciaba a los medios, para aclarar: “Tratan de dividirnos, de que nos desconfiemos, que nos reprochemos. En una historia de 34 años no tuvimos siempre las mismas opiniones. Hemos discutido, hemos resuelto las cosas y seguimos juntos. De ninguna manera esto va a romper una amistad, ni un afecto de tantísimos años. Lo siniestro es que quieren con esta situación entintar las gestiones tanto de Néstor Kirchner como de Cristina, que fueron las que más hicieron por reconocer nuestra historia, de respetarla y darnos respuestas de manera permanente sobre lo que queremos, como verdad, memoria y justicia” (P12 12/6). Otro que opinaba desde la militancia en DDHH era el titular del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel: “Creo que hay una gran responsabilidad del Gobierno, que debe determinar controles, auditorías y rendiciones de cuentas, porque no se habla de monedas, sino de millones y millones de pesos. La lucha por los derechos humanos en la Argentina no pertenece sólo a las Madres de Plaza de Mayo, sino a muchísimos organismos y a toda la población”, se desmarcaba. Finalmente, Madres Líneas Fundadora emitía un comunicado en el que explicaban que “somos numerosas Madres, miembros de esta asociación heterogénea en ideas y acciones, pero unidas por el fraterno sentimiento de tener a nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos siempre presentes, y por la incansable búsqueda por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nuestra asociación tiene personería jurídica y total transparencia en sus actividades y manejo de recursos. Nunca hemos aprobado que nos representara, y menos que asumiera decisiones, ninguna persona que no fuera una compañera en nuestras mismas condiciones. No hemos tenido ni tenemos relación alguna, más allá de nuestro común dolor, con la Asociación Madres de Plaza de Mayo” (P12 7/6). Por su parte, el periodista y poeta Vicente Zito Lema, cofundador y ex rector de la Universidad de las Madres, sostenía que “Bonafini cometió un gigantesco error trágico” al delegar en Schoklender la administración de la Fundación. (LN 11/6). Quien expresaba su solidaridad, conciente de lo que estaba en juego en esta pelea política, era la ex presidenta de Abuelas, Chicha Mariani. A través de una carta, le manifestaba a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo su “respeto y admiración por tu lucha incansable” en “este momento donde cobardes y oportunistas te están lapidando”. Recordó que “no siempre estuvimos juntas por diferencia de criterios”, pero destacó: “Siempre valoré tu honestidad y especialmente tu valentía y solidaridad” (P12 11/6).

Lo cierto es que la alianza social terrateniente profundizaba la construcción del caso Schoklender en la búsqueda de medir fuerzas con la alianza social encarnada en el gobierno y construir hegemonía, esto es, imponer su punto de vista en el territorio específico de los DDHH.

De esta forma, salía al cruce en su clásico suplemento dominical Enfoques, cuya edición del día 24 llevaba como título “Derechos Humanos hoy, ¿cuál debe ser su rol en democracia?” y comenzaba con estas palabras: “El caso Schoklender en su versión recargada con corrupción y organismos de derechos humanos (DD.HH.) es mucho más que un escándalo judicial. Es también un antes y después a partir del cual volver a pensar el devenir de las organizaciones de derechos humanos en tiempos de democracia plena, cuando el peligro inminente y el enemigo claro de los gobiernos militares son un fantasma del pasado”.

A primera vista, una simple introducción a las voces expertas que vendrían luego. Mirado con lupa, todo un intento de cortar, de marcar la cancha respecto a cuál es la verdadera lucha por los Derechos Humanos. “El enemigo claro”, “el peligro inminente”, ya pasaron. Los DDHH tienen que ver con la lucha contra las dictaduras, de cualquier signo, no con otra cosa. No hay ningún otro peligro ni ningún otro enemigo. No importa qué condiciones y qué conflictos sociales derivaron en la dictadura y sus consecuencias.

Las voces que se hacen presentes en La Nación reafirman esta postura. “La no relación entre gobierno y DD.HH. es la mejor relación”, sintetizaba el filósofo de derechas Tomás Abraham, que agregaba: “El individuo tiene que estar protegido de los poderes del Estado, que es el que viola los derechos”. El Estado es un ente abstracto por fuera de cualquier conflicto de clases, no hay intereses históricos de clase que llevan a violar los DDHH. En la misma dirección enfilaba la ex integrante de la CONADEP Graciela Fernández Meijide: “Cuando en 2006 las Madres dicen que no hacen más las Marchas de la Resistencia porque ya no hay un enemigo en la Casa de Gobierno, en ese momento se perdió el rol de las organizaciones de DD.HH.”. “No hay que intentar suplir el papel del Estado”, razona Fernández Meijide. “El rol de las organizaciones es la denuncia con la intención de que el Gobierno corrija las violaciones o los problemas. Esa es la obligación en democracia porque se supone que las instituciones de la democracia tienen que funcionar”. Es decir, las organizaciones deben limitarse a un rol absolutamente pasivo: la denuncia, dejar que otros, la clase dominante, la clase terrateniente, en el caso argentino, lleve la parte activa del país, conduzca desde el control del Gobierno del Estado los destinos de la sociedad. Y si circunstancialmente —por esas imperfecciones del sistema democrático— esa clase no controla dicho gobierno, estos organismos deben enfrentar a este último con todas sus fuerzas. En la misma línea se refería el periodista Ceferino Reato —autor de varios libros que intentan refloatar en el presente la denominada “teoría de los dos demonios”— a las organizaciones: “Me parece que han perdido mucha autonomía y representación y uno podría decir que en parte lo han hecho por las ventajas materiales que ellas y sus familiares han obtenido de este gobierno pero también de otros gobiernos. Lo del dinero de las Madres de Plaza de Mayo no es el primer episodio. Yo recuerdo algún episodio que involucró a Carlotta en la provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador [Felipe] Solá; también hubo una pelea por plata, aunque no a estos niveles, claro. Además, sus hijos ocupan cargos políticos importantes”.

Los organismos no deben meterse en política, sentencia La Nación. Caso cerrado. Así es cómo las Madres convirtieron la bandera incólumne, blanca y pura de los DDHH en “una bandera manchada”, tal como titula La Nación, por esos días, una nota al respecto firmada por Fernando Laborda (LN 9/6).

A través de esta multiplicación de voces que se suceden en las páginas de la Tribuna de Doctrina, se desnuda la política de la propia oligarquía hacia los organismos de Derechos Humanos; política que se extiende desde fines de la dictadura y los albores

del alfonsinismo hasta la actualidad, y que tiene como base material la derrota política y militar inflingida a la clase trabajadora. Esta estrategia de intentar mantener el control ideológico en la lucha por los DDHH resulta una pieza esencial, una condición previa para poder armar su relato de los hechos, para poder elaborar una narración de la historia según su propia perspectiva de clase. Es esto, desde qué perspectiva de clase se cuenta la historia, y por lo tanto cómo se actúa en el presente, y no la mera adhesión u oposición a un gobierno, lo que se puso en juego con la construcción del caso Schoklender.

Derechos Humanos y lucha de clases

“Hace un año empecé a tener discusiones con él porque quería convertir la fundación en una empresa. Y yo no tengo ningún interés en que esto sea una empresa, quiero que siga siendo una fundación, como está”. Así comentaba Hebe de Bonafini el contenido de las disputas al interior de Madres con los hermanos Schoklender. A lo que agregaba: *“Hace un año empecé a tener discusiones con Sergio porque quería convertir a la Fundación en una empresa, y yo le decía: ‘Somos soldados del proyecto nacional’”* (LN 6/6). Luego, durante una entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales, en el programa Bajada de línea, señalaba que en el último tiempo había discutido con Sergio Schoklender, porque *“él entendía que teníamos que pasar a ser una empresa”* y *“yo no quería porque una empresa ya es un negocio. No puedo negar que no hizo nada, creí en ese hombre que salió de la cárcel y estuvo a disposición de las Madres”* (P12 6/6).

Y con el correr de los días, la titular de la Asociación iba ampliando el contenido de las contradicciones internas: *“Lo que hacía era que cuando iban a algún lado, él no iba a San Clemente a una piecita como voy yo con mi hija, él iba al hotel más caro. Siempre le protestaba por eso, le decía ¿por qué? Nosotros tenemos que ser muy discretos en lo que hacemos, estamos en la cresta de la ola, tenemos que cuidarnos. El decía ‘pero yo trabajo para esto y mi mujer trabaja’”.* Y frente a la pregunta acerca de qué enseñanzas le dejaba el presente conflicto, contestaba: *“Uy... que uno tiene que ser mucho más desconfiada y un poquito más egoísta a veces. También mirar bien la clase. Cada vez creo más en la lucha de clases. Ellos se criaron en una clase que no tiene nada que ver con la nuestra y a la larga les volvió a agarrar la de ser empresarios. No les importó a costa de qué. Nosotras somos de otra clase social, no pensamos igual. No pensamos en ser una empresa”.* No obstante, dejaba en claro la continuidad del proyecto Sueños Compartidos, como parte de la lucha continua de su organización: *“Tengo bronca. Pero cuando uno está al frente de una cosa tan importante como ésta, de una organización que creció con el trabajo y el esfuerzo de las Madres eso es lo que tengo que defender a capa y espada, con lo cual los sentimientos no pueden primar sobre este proyecto, de ninguna manera, lo tengo clarísimo. (...) Pienso que tendría que haber puesto más personas al frente. Ahora en lugar de dos va a haber seis personas en las que confío. Tengo que seguir confiando, si no qué hago, cierre. Esto es seguir creyendo en el ser humano, que es lo mejor que nos puede pasar”* (P12 7/6). Y días más tarde, volvía a insistir con que, en última instancia, el conflicto con los

Schoklender era un problema de clase: *“Las Madres siempre hemos seguido el camino de los hijos y nuestros hijos sabían qué significaba la ética, la solidaridad, la igualdad, el amor, la comprensión, el compañerismo. Eran de nuestra clase. Las otras clases sociales hacen esto que hacen: les ponés la mano y te la comen”* (P12 17/6).

De esta forma, Hebe dejaba en claro cuál era la cuestión de fondo en el presente conflicto. Tal como analizábamos en el apartado anterior, los DDHH no son una cuestión universal abstracta. Están enraizados en la historia, en la conflictividad de clases inherente a la sociedad capitalista con su carnadura particular en la formación económico-social de un país dependiente como la Argentina. De eso habla la presidenta de Madres a la hora de cuestionar las actitudes de los hermanos Schoklender. No se trata de un problema de “corrupción” a secas, tal como quiso construir la oligarquía terrateniente a lo largo de todo el conflicto. Lo que intenta decir Bonafini aquí es que aquella mentada “corrupción” no proviene de la nada ni de cualquier parte, proviene de una clase social específica que es el empresariado, o la burguesía. Es este, según ella, el origen de la conducta de los Schoklender, el interés de clase que se defiende a la hora de encarar cualquier proyecto social y político. El sentido de su apelación a la conducta de lucha de sus hijos, algo que estuvo presente en su discurso y en los hechos desde el comienzo de la vida de su organización: la perspectiva de clase como motor de la lucha por la transformación del país.

Sobre este punto insistían los dueños de la tierra a través de una de sus plumas predilectas, Mariano Grondona, en una columna dominical titulada: *“De Schoklender a Hebe; ¿de Hebe a Cristina?”* *“En los años setenta, miles de jóvenes civiles y militares fueron arrastrados por la utopía de la violencia. ¿Quiénes los habían tentado? Aquellos que alegremente incitaron a los militantes de uno y de otro bando a asomarse a las fantasías revolucionarias o contrarrevolucionarias, ¿no guardan en sus almas, todavía, las semillas del arrepentimiento? Cuando un adulto de cualquier signo instala en jóvenes inmaduros una versión maniquea de la realidad, ¿no se da cuenta de que, al hacerlo, si bien él mismo no tomará el fusil esos jóvenes lo harán? La mecha encendida por algún adulto puede convertirse, en manos juveniles, en un arma letal. ¿No es esto lo que pasó, precisamente, entre nosotros? Pero ¿se ha instalado acaso en los que instigaron a los jóvenes a la violencia una seria autocrítica acerca de la masacre que precipitaron? Los padres, los maestros, los formadores de los jóvenes de los años setenta y sus continuadores de hoy, ¿no debieran hacerse esta pregunta, al menos en el silencio de sus conciencias?”* (LN 5/6). Una vez más, la negación del conflicto social a la hora de presentar los hechos de la historia reciente. Fueron jóvenes de uno y otro bando que se sintieron tocados por la varita mágica de la “revolución” o de la “contrarrevolución” proveniente de algún lugar misterioso de la historia y la geografía argentinas.

El mismo Grondona profundizaba, un domingo después, su búsqueda de mistificación del problema en otra columna titulada *“La rebelión de ‘las Madres’ contra ‘la Madre’”*. Así se expresaba: *“Para cada uno de nosotros, ‘madre hay una sola’. Pero dentro del poderoso universo afectivo al que*



alude este refrán, hay una clase especial de madres: aquellas a quienes sus hijos se les fueron primero, contraviniendo la ley natural según la cual son las madres y no los hijos quienes adelantan su partida. La tribulación de las madres que pierden a sus hijos antes de tiempo es tan intensa que el Diccionario de la lengua española, pese a su inmensa riqueza, no ha encontrado

una palabra para designarla. A quienes han perdido a sus padres los llamamos huérfanos. ¿Cómo llamaríamos a las madres que han perdido a sus hijos? Esta pregunta no tiene respuesta en nuestro idioma. Que el Diccionario enmudezca en este punto prueba que la condición de una madre privada de su hijo es única y que, por serlo, merece el insondable respeto de todos aquellos que, por no haberla vivido, no podríamos comprenderla. Por eso es válido que a estas madres portadoras de un dolor inalcanzable para el resto de los mortales las llamemos Madres, con mayúsculas, en cuanto víctimas de una tragedia sólo aceptable, en el límite, por la esperanza de que las injusticias de la vida puedan explicarse en un plano superior desde el cual Alguien, como sea que lo llamemos, confiere su sentido a la historia”.

Frases como “sus hijos se le fueron primero”, “hijos quienes adelantan su partida”, “pierden a sus hijos”, “una madre privada de su hijo” hablan de este intento mistificador. Las madres no “perdieron” a sus hijos ni estos “se fueron” a ningún lado. La oligarquía pone en las manos de Dios, de ese “Alguien”, la responsabilidad del terrorismo de Estado, de los crímenes perpetrados por ella en función de la defensa de sus intereses clasistas.

Avanza Mariano: “*Algunas veces, las Madres desgarradas se organizan para apoyarse unas a otras. Así ha ocurrido en la Argentina reciente, particularmente fecunda en tragedias familiares, de las cuales surgieron movimientos como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y, desde el ángulo opuesto, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas en Argentina (Celtyv), además de las Madres del Dolor que procuran agrupar a las numerosas víctimas de la inseguridad. En otras latitudes también actúan formaciones de madres desgarradas, como las Damas de Blanco, que resisten la represión castrista en Cuba”.*

La operación discursiva aquí consiste en colocar en el centro de la escena la condición de “madre”, por encima del carácter político de la lucha de todas estas organizaciones. Así, se intenta colocar en un mismo sitio a las Madres de Plaza de Mayo, quienes reivindican la actitud de sus hijos de dar la vida por un proyecto de país diametralmente opuesto al que defiende, con una organización de derecha como el Celtyv, o aún más las Damas de Blanco, una de las puntas de lanza con las que el imperio yanqui hostiga desde hace cincuenta años a Cuba para acabar con la revolución. Recordemos las palabras de

Hebe de Bonafini: “No hacemos lo que hacemos por ser Madres”...

Continúa: “*El reclamo de todas aquellas familias heridas por la violencia, de cualquier signo que sea, es universal, como lo es el derecho a la vida, de modo tal que el énfasis sobre los derechos humanos cuya exaltación honra a nuestra época lo ha puesto al tope de la lista de los principios irrenunciables que debieran proteger a todos los hombres y mujeres sin distinción, contra cualquier discriminación étnica, religiosa o ideológica”.*

Al ser universales, los derechos humanos y el derecho a la vida están por encima del conflicto social. Esto es, en el mundo hay valores sagrados, abstractos, que trascienden las clases sociales y que por lo tanto todos debemos defender. Por eso es lo mismo la lucha de las Madres que la de las Damas de Blanco.

Sigue más adelante: “*Bonafini procuró apropiarse, en este sentido, de una lucha cuyo generoso horizonte la excedía. ¿Cómo fue posible esta apropiación, que ya ha durado más de ocho años? Por la militancia de los esposos Kirchner, que se autoproclamaron de 2003 en adelante sus principales representantes a tal punto que, además de declararse los ‘hijos adoptivos’ de la señora de Bonafini, volcaron en su favor ingentes sumas de dinero no controlado del Estado, de los contribuyentes, cuyo manejo quedó a cargo de otros dos de sus ‘hijos adoptivos’, los hermanos Schoklender, quienes ahora enfrentan penas de cárcel por haber desplegado una serie de acciones corruptas que exceden, incluso, las costumbres transgresoras de nuestro tiempo”.*

Las Madres son lo que son por la militancia de los Kirchner, no por la militancia de las propias Madres, que excede al presente gobierno. Esto contradice otro argumento que la propia oligarquía viene esgrimiendo. Aquel que reza que los Kirchner se montaron sobre la lucha de las Madres para direccionar a estas hacia su mezquino proyecto de poder. De un modo o de otro, así es cómo las Madres han perdido su “generosidad”, al abrazar la mezquina causa autoritaria kirchnerista. Las causas de la oligarquía terrateniente son amplias y generosas, tal como lo muestran la última dictadura militar, la Revolución Libertadora y el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955 o la Guerra contra el Paraguay en el siglo XIX, por citar solo algunos ejemplos “generosos” de nuestra historia.

Para finalizar: “*De favorita del Estado y de los militantes afines en la lucha por los derechos humanos, Bonafini ha caído en un aislamiento hasta ayer inimaginable. Sólo falta que la propia Cristina Kirchner se distancie de su antigua ‘madre adoptiva’, en un postrer intento de salvar su propia imagen.*

”*De todos lados resurge además el activismo de una oposición que, habiéndose simplificado en un manojo de sólo cinco opciones para las próximas elecciones presidenciales (Alfonsín-González Fraga; Duhalde-Das Neves; Carrió-Adrián Pérez; Alberto Rodríguez Saá y Hermes Binner) está encontrando nuevos argumentos para desmentir con renovados bríos la hipótesis oficial de que ‘Cristina ya ganó’, sobre la base de una plataforma que empieza a ser común: el impetuoso crescendo de las denuncias por corrupción que rodea al alicaído oficialismo, generando a su vez una hipótesis, aunque improbable, recurrente: que la fórmula presidencial del kirchnerismo podría no girar al fin en torno de Cristina, sino de Daniel Scioli y Alicia Kirchner” (LN 12/6).*

Finalmente, Don Mariano se brinda “generosamente” a los candidatos opositores, regalándoles argumentos para que puedan armar sus campañas de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Y volviendo sobre las contradicciones al interior de Madres y del Gobierno, que señalábamos al comienzo de este apartado, se explayaba el diario de los Mitre a través de su periodista Luis Majul, en una nota titulada “Anestesia marca K”: *“Solo la buena marcha de la economía y la empatía que sigue generando la condición de viuda de la Presidenta pueden explicar que las irregularidades atribuidas a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Misión Sueños Compartidos no hayan derivado todavía en graves consecuencias para el Gobierno. A veces da la sensación de que una buena parte de la sociedad estuviera anestesiada”*.

Una denigración explícita de “buena parte de la sociedad” argentina que no comulga con los postulados ideológicos de la oligarquía. Sólo unos pocos iluminados por la gracia divina –como Majul y otros “periodistas independientes”– logran penetrar en el corazón de las problemáticas sociales. El resto estamos “anestesiados”, somos ciegos ante el dolor profundo que vive el país. Se trata, en realidad, del grueso de la sociedad –clase trabajadora, capas medias, pequeño, mediano y hasta gran capital– a quien el plan sojero exportador dejaría afuera en caso de aplicarse. Es decir, aquellos a quienes el discurso de Majul no logra “anestesiarse”.

Más abajo: *“El ‘puedo comprarme una Ferrari o un Porsche’ de Sergio Schoklender no parece tan diferente a la alusión del ex presidente Carlos Menem cuando, en diciembre de 1991, exclamó: ‘La Ferrari es sólo mía’. Tampoco se presenta tan distinta a la travesura del ahora senador kirchnerista cuando lo vieron pasar con la misma Ferrari a 200 kilómetros por hora cerca de una cabina de peaje en la zona de Pinamar. La época es diferente, pero el contexto no tanto. En ese tiempo, al riojano se le podía perdonar casi todo, porque el uno a uno gozaba de buena salud. Además, cualquier crítica o denuncia contra su gobierno era presentada como una acción interesada o desestabilizadora de los medios ‘antimenemistas’”* (LN 2/6).

Así llegaba Majul al corazón del asunto que mencionábamos arriba, echando vinagre en una herida abierta al interior del kirchnerismo. A través de la figura de Schoklender, el texto desnuda un punto verdaderamente débil del proyecto nacional encabezado por el Gobierno. Y es el nudo de la contradicción existente que dejó al descubierto la explosión del presente caso. **Los dichos citados de Schoklender, pero mucho más su actitud empresarial a la hora de llevar adelante el proyecto Sueños Compartidos, chocan con el mismo sentido del proyecto, que no persigue la ganancia como objetivo final sino el mejoramiento del nivel de vida de un sector postergado de la población. Contrasta, en definitiva, con el propio concepto de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la cual desde su comienzo planteó que su pelea no solamente perseguía el castigo a los asesinos de sus hijos y la recuperación de los nietos expropiados por la dictadura. La organización conducida por Hebe de Bonafini concibió (y concibe) la lucha como una continuación de**

aquella que expresaban sus hijos en los ’70, y por la cual fueron desaparecidos por la dictadura de la oligarquía; la pelea por la liberación nacional y social. Y esto es lo incompatible con los rasgos de comportamiento empresarial de Schoklender. Es en esta contradicción abierta al interior del proyecto nacional en donde golpea el matutino mitrista, conciente de que el “empresariado nacional”, que se reproduce en base al sostén del Estado –subsidios, aranceles a la importación, retenciones a la exportación, obra pública y otras políticas que sostienen lo que se combate bajo el nombre de “capitalismo de amigos”– no puede sobrevivir por mucho tiempo. Esto no es capitalismo en serio, nos dice el órgano que expresa los intereses del capitalismo real, los intereses de los dueños del campo, en la Argentina. Recordemos, a este respecto, los ataques constantes que este mismo sector le propinaba al empresariado industrial nacional, que tratamos en el primer apartado. Es el carácter contradictorio de la alianza, el choque de intereses entre el sector de la clase capitalista y el de la clase trabajadora que componen la misma, lo que comienza a desatarse.

Se pone así de manifiesto un límite preciso del proyecto nacional: el intento de avanzar hacia la justicia social con políticas empresariales que se parecen bastante a aquellas que se dicen combatir. Esto es, pelear contra el enemigo con las mismas armas de aquel. Ante la ausencia de una política de formación de cuadros que de respuesta ante la multiplicación conflictos sociales que provoca la crisis, se pretende desarrollar la batalla contra la oligarquía desde el aparato del Estado y con la “bajada” de fondos públicos. Y esto es lo que la clase terrateniente comprende bien, la imposibilidad objetiva que tiene la alianza social en el Gobierno de triunfar sobre ella en los marcos de las relaciones capitalistas.

Organismos de DDHH y movimiento obrero

“Por ejemplo que convoque la CGT a la marcha del jueves pasado, lo agradecí públicamente porque nunca lo hubiera pensado”, decía la presidenta de Madres en relación con la convocatoria que la principal central obrera del país realizaba al acto de apoyo a las Madres, ante las acusaciones que caían sobre ellas (P12 7/6). Dicho acercamiento tiene que ver con un proceso que venimos analizando en las páginas del *Análisis...* El intento que el movimiento obrero organizado viene realizando de dejar atrás el horizonte meramente reivindicativo, la respuesta puramente gremial ante los diferentes conflictos que aparecen. El acercamiento a la política de DDHH es uno de los puntos por los cuales busca su acercamiento a la política. Así, no podemos dejar de mencionar la convocatoria realizada por la Juventud Sindical los dos últimos 24 de marzo a la movilización que todos los años recuerda el genocidio perpetrado por la dictadura, como manifestación de su reivindicación de la lucha de los compañeros desaparecidos y de su condición de militantes obreros.

Esto llevaba a la oligarquía pampera a identificar a la dirigencia de la CGT, y fundamentalmente a la figura de Hugo Antonio Moyano, y a la dirigencia de Madres como un sinónimo de corrupción, en tanto ambos adscriben al corrupto proyecto kirchnerista. Así, nuevamente en palabras de Majul: *“Aunque parezcan cosas distintas, los escándalos que involucran a Sergio Schoklender y Hugo Moyano son hijos naturales de esta política perversa de prebendas y hostigamiento. Los fondos públicos que recibió el apoderado de las Madres de Plaza de Mayo no se controlaban ni auditaban porque eran para gente ‘del palo’. Al contrario. Hasta donde les fue posible, organismos como el Banco Central o la Unidad de Información Financiera (UIF) ocultaron información y demoraron la investigación. Había y hay una justificación ‘política’: la lucha y la honestidad de Hebe de Bonafini hacían las veces de enorme paraguas protector en caso de que a cualquiera se le ocurriera preguntar.*

”Con la misma lógica, al líder de la CGT y del sindicato de camioneros se le facilitaron decenas de negocios porque era, y sigue siendo, un socio privilegiado del Gobierno. Alguien a quien es mejor tener de aliado, por más dinero del Estado que cueste semejante relación. Enumerarlos aquí sería tedioso. Es suficiente con decir que desde 2004 hasta 2009 el grupo económico Moyano-Liliana Zulet obtuvo ganancias por más de 13 millones de pesos?” (LN 9/6).

Y agregaba Fernando Laborda: *“El caso en cuestión ha puesto al descubierto la fragilidad y la corrupción de un modelo basado en la entrega de subsidios o de espacios de poder, a cambio de alineamiento político y de retornos, a través de las vías más grotescas o las más sofisticadas.*

”Este modelo de intercambio de favores es común a las transacciones que el gobierno kirchnerista efectuó tanto con las Madres de Plaza de Mayo como con el grupo sindical encabezado por el titular de la CGT, Hugo Moyano. Ambos sectores pasaron a ser nuevos beneficiarios del capitalismo para los amigos” (LN 12/6).

Aquí, a la identificación de la CGT y Madres como beneficiarios de la corrupción K se suma la identificación de ambas organizaciones como empresarias beneficiadas por el capitalismo de amigos, negando por un lado el carácter político-social, es decir, militante del trabajo de estas organizaciones, pero a su vez machacando sobre las contradicciones que atraviesan a las mismas como componentes del proyecto nacional.

Finalmente, remataba La Nación con una nota editorial: *“La sociedad argentina no estaría sometida a la incapacidad de los funcionarios para controlar el destino de los recursos públicos sino a un fenómeno más preocupante: en el seno de esa sociedad habría poderes fácticos, de la naturaleza que fuere, a los que el Gobierno les ha venido concediendo semejante autonomía que han quedado fuera de la ley. Es indudable que el kirchnerismo les ha extendido fueros a Moyano y a Bonafini a cambio de los servicios simbólicos y políticos que ellos han venido prestando al fortalecimiento del Gobierno.*

”Para la concepción populista de la vida pública que el oficialismo se empeña en imponerle a la Argentina, esta conducta sólo puede parecer aberrante a quienes son presa de los pruritos institucionales propios de una mentalidad burguesa. Es lamentable esa concepción, sobre todo cuando se la defiende, como hace el kirchnerismo, en nombre de la igualdad y de los derechos humanos.

”El descontrol del Estado, tal como aparece en los desbarajustes de Bonafini y Moyano, es imperdonable siempre. Pero se vuelve in-



tolerable cuando expresa el cinismo de un grupo que, como el kirchnerismo, oculta su irresponsabilidad detrás de la consigna de la inclusión social” (LN 22/6).

Los ataques son transparentes y para nada casuales. En el centro de todas las acusaciones de corrupción que se encargó de armar la alianza social que conducen los propietarios de las grandes extensiones de tierra de nuestro país, se encuentra por un lado el sector del movimiento obrero organizado que ha comenzado a dar los primeros pasos en la dirección de abandonar su rol de subordinado en la alianza social gobernante; por otro, el sector de la militancia por los DDHH que, como analizamos a lo largo del presente artículo, siempre identificó su lucha como una lucha política ligada a los intereses de la clase trabajadora.

Si bien el objetivo de la oligarquía es crear la percepción social de que tanto la CGT como Madres –Hebe de Bonafini y Hugo - son enfermedades sociales a exterminar, esta operación ideológica de identificación acarrea para la clase dominante el peligro de generar una profundización aún mayor del encuentro y la acción política conjunta entre estas organizaciones desde el punto de vista de la clase trabajadora.

En este sentido, remataba el mes el otorgamiento del premio Rodolfo Walsh por parte de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, otorgado a personajes destacados en el trabajo de la comunicación. Esto generaba un nuevo y violento despacho de la Tribuna de Doctrina a través de una nota editorial, titulado *“¿Premio o provocación?”*: *“En línea con el cuestionado premio que le otorgó en marzo último al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata agasajó a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, con el premio Rodolfo Walsh, en la categoría Comunicación y Derechos Humanos.*

”Más allá del desafinamiento cronológico, el premio entregado días atrás resulta a todas luces una provocación. Los permanentes agravios verbales perpetrados por Hebe de Bonafini en las orillas de la violencia contra quienes han osado pensar o actuar en forma distinta que ella -desde Juan Pablo II hasta la sociedad norteamericana y la actual Corte Suprema de Justicia argentina- evidencian una debilidad emocional que deriva hacia formas obsesivas de odio y resentimiento. Nada más lejos, pues, de la humildad, la piedad y la consideración que se esperan de quien dice defender los derechos esenciales de las personas. Esa peculiar visión sobre los derechos humanos se ciñe a intereses y sensibilidades personales que comienzan por olvidar que los numerosos crímenes cometidos por el terrorismo de izquierda en los años setenta fueron el disparador del terrorismo de Estado con el que dos partes contrapuestas bañaron en sangre al país. Nada hay para celebrar en todo eso.

”No debe llamar la atención que detrás de la controvertida premiación se encuentre el gobierno nacional. Su estrategia de despegar a la titular de la fundación en la que operaba Schoklender de los manejos irregulares con la construcción de viviendas para los más privados de recursos ha encontrado en la Facultad de Periodismo platense a un aliado incondicional.

”Premios como el recientemente otorgado por la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, fundamentados en la sintonía ideológica, teñidos de la militancia que se transparentó con un premio anterior otorgado nada menos que a Hugo Chávez, impregnados de política subalterna, y tan teñidos con la defensa de la libertad de prensa, constituyen una ofensa al mundo académico y una provocación a la cada vez más debilitada democracia republicana, que se reconstituyó en 1983.

”La ciudadanía debe decidir si es éste el país que quiere para sí y para las nuevas generaciones de argentinos” (30/6).

Preparando la invasión

Y para completar, se peleaba también en el territorio de la seguridad.

Luego de meses en que estuvo en debate la capacidad de la Argentina para controlar el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –reunido en México– incluía finalmente a la Argentina en la denominada “lista gris”, es decir, entre los países con “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado de activos. Países como Grecia, Turquía y Venezuela integran la mencionada lista. El escalón más bajo de la calificación lo constituye la llamada “lista negra”, con países como Irán y Corea del Norte, países que representan un riesgo para el sistema global, según el GAFI. La posición más dura sobre la Argentina la llevó EEUU, que evaluó, junto con otros países, suspender a la Argentina como miembro pleno del GAFI, uno de los tres países latinoamericanos que integra dicho grupo, además de Brasil y México. En su comunicado final, el GAFI emitía un comunicado donde destacaba el avance que constituía la nueva ley antilavado, pero reclamaba que se resolviesen “sin demoras” las deficiencias “estratégicas” para el combate contra el lavado. Quien lideraba la delegación argentina, el ministro de Justicia Julio Alak explicaba que el país quedaba “bajo seguimiento intensivo” (LN 20, 23 y 25/6)

Al respecto, la Tribuna de Doctrina expresaba en su editorial: “La sanción es otra señal, la más grave, de que urge

remover a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella y Gabriel Cuomo, porque, además de la decisión adoptada por el GAFI, están los acontecimientos de pública trascendencia vinculados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la decisión de dilatar y evitar la investigación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) elevados por el Banco Supervielle y el Banco de Santiago del Estero, respectivamente, a lo que debe sumarse la denuncia efectuada por las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etcheveoin sobre las actividades del apoderado de la mencionada organización de derechos humanos. (...)

”Desde esta columna destacamos la importancia de que oficialismo y oposición hubieran logrado mantener un diálogo institucional en materia de lucha contra el lavado que facilitó la reforma del tipo penal evitando que la Argentina fuera calificada de “país no cooperante” en la materia, con las gravosas consecuencias que ello acarrearía.

”La decisión política de evitar sanciones permitió la construcción del consenso parlamentario que exigió que el kirchnerismo aceptara la profesionalización de la UIF y resignara la facultad de querrelar solicitada para su titular. Este último requerimiento perseguía alejar el uso político de dicha herramienta, la que quedaría reservada para el Ministerio Público. Al promulgar la ley el Poder Ejecutivo vetó el artículo y restableció la facultad demostrando con ello la imposibilidad del gobierno de Cristina Fernández de anudar y sostener mínimos acuerdos políticos sobre cuestiones de Estado.

”Lo cierto es que la decisión del GAFI confirma lo que es bien sabido: el Gobierno no tiene voluntad de luchar contra el lavado de dinero” (LN 27/6).

Una clásica estrategia que el Imperio desarrolla en los países dependientes. Crear la sensación de que el país no es capaz de manejar por sí mismo sus asuntos internos, y por eso necesita de la intervención económico-financiera, política y militar por parte de los EEUU. En el presente caso, se trata de mostrar que la Argentina no cuenta con la capacidad de controlar el lavado de dinero. Los intereses imperialistas y su expresión en la Argentina, la oligarquía terrateniente, cantando a coro la misma canción.

En esta línea, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, viajaba a San Pablo para participar de la cumbre de las 50 megaciudades del mundo, denominada C-40, y reunirse con el ex presidente norteamericano Bill Clinton y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. En el marco de dicho encuentro, Macri le pedía al Banco Mundial que permitiese la toma de préstamos por parte de las grandes ciudades, sin necesidad de pasar por los gobiernos nacionales: “Si la ciudad no coincide políticamente con el gobierno nacional de turno, en muchos casos es imposible acceder a un crédito y termina generándose una situación extorsiva que les impide a los vecinos de esa ciudad acceder a mejoras” (LN 2/6). En tiempos en que cada vez más países cuentan con gobiernos nacionales que no responde a los dictados de Washington, otra de las estrategias es entrar a través de gobiernos locales más afines.

Por otro lado, se sucedieron en el mes de junio una serie de hechos relacionados con el narcotráfico que llaman la atención. El día 17 un operativo de Prefectura Naval halló un cargamento de 444 Kg de cocaína en un velero

de bandera estadounidense. El día 19, dos gendarmes y la hermana de uno de ellos eran detenidos en la localidad salteña de Aguaray, cerca de la frontera con Bolivia, al encontrarse transportando casi 1000 Kg de cocaína, embutida en la carrocería de una camioneta. Ante el hecho, la ministra de Seguridad Nilda Garré afirmaba que los dos jóvenes tenían *“muy poca experiencia”*, con lo cual detrás de los mismos habría *“una organización de mucha envergadura”*. La ministra precisaba que si la droga incautada tenía *“un valor de 9.800.000 dólares en Argentina, uno supone que no eran éstos dos chicos de 25 años quienes podrían estar en condiciones de financiar”* la operación. Y finalmente el día 28, en lo que se dio en llamar Operativo Rejas Blancas II, era detenido el dueño de un laboratorio farmacéutico, acusado de suministrar precursores químicos a una banda internacional de narcotraficantes que se dedicaba a elaborar cocaína líquida en el país para traficarla a Europa (P12 19, 21 y 29/6). La serie resulta coherente con la insistencia que se viene realizando desde diferentes sectores, como la Embajada estadounidense en la Argentina, respecto del papel creciente que viene jugando el país en la ruta del narcotráfico, al igual que el énfasis con que se viene señalando que la Argentina, de ser un país de tránsito, ha pasado a ser un país *productor* de estupefacientes.

A su vez, asistimos durante la última semana del mes a la disputa por el control de las calles en los barrios del sur de la capital, al lanzarse el Plan Unidad Cinturón Sur. El mismo contemplaba que a partir del 4 de julio las comisarías 24a. (La Boca), 30a. (Barracas), 32a. (Parque Patricios), 34a. (Nueva Pompeya), 36a. (Villa Soldati) y 52a. (Villa Lugano) pasarían a estar bajo el comando de la Gendarmería y la Prefectura, creándose un mando unificado compuesto por estas dos fuerzas más la Policía Federal. El proyecto implicaba colocar 2.500 efectivos, entre gendarmes y prefectos en las zonas bajo la jurisdicción de las comisarías mencionadas, lo que permitiría destinar 1.000 efectivos de la Federal al patrullaje de la General Paz y otras avenidas. En el acto de lanzamiento, la Presidenta declaraba: *“La seguridad es una demanda que nunca va a ser satisfecha porque siempre surgen nuevos problemas; el que lo prometa está mintiendo”*. A su vez, un grupo de 15 oficiales superiores se retiraban antes de que comenzase el acto. (LN y P12 22, 23 y 29/6).

Y comenzaba la batalla retórica. El jefe de gobierno de la Ciudad consideraba que *“sería bueno que nos llamen a una reunión de trabajo y que nos consulten para que podamos trabajar tal como lo estamos haciendo en las comunas 12 y 15, donde está la Policía Metropolitana y trabajar coordinadamente con la Policía Federal. (...) La Policía Metropolitana ya existe y lo que nos traspasen ingresaría a la Metropolitana. Sería lo más sano para todos. Ojalá se pueda lograr a partir del próximo gobierno”*. Por su parte, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señalaba: *“Esto suena muy improvisado, requiere un trabajo coordinado. Lo que la ciudad necesita es el traspaso de la Policía Federal y punto. Es una locura que nos hayamos enterado de esto por los medios”* (LN 24/6). También intervenía el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien consideraba que se trató de *“un anuncio de campaña,*

y de mal gusto”, agregando que *“llamarle a eso un plan de seguridad es casi una falta de respeto a un plan”*; y finalizaba augurando el casi seguro fracaso del proyecto: *“No entiendo quién les va a dar la orden a los gendarmes y prefectos cuando el 911 lo atienda la Policía Federal”* (LN 30/6).

Enseguida agitaba su pluma la Tribuna de Doctrina, quien salía al cruce con su editorial *“Seguridad: sigue la improvisación”*, donde se consigna: *“A medida que pasan los años y aumentan tanto la ola delictiva como la cada vez más estrecha relación entre algunas fuerzas policiales y el delito, la Argentina sigue careciendo de una política de Estado sobre seguridad. En realidad, esta carencia es la causa de aquellos males. (...)”*

“Aun existiendo una verdadera voluntad de apoyo político, habrá que ver cómo lograrán oficiales de la Gendarmería y la Prefectura ejercer un control efectivo de las comisarías.”

“Si, indudablemente, ha sido la desesperación la que ha llevado a la ministra a estos extremos, cabe preguntarse cómo se ha llegado al actual estado de cosas.”

“Aquí es donde se advierte como inapelable la responsabilidad que le cabe al kirchnerismo, que ya lleva ocho años en el poder, buena parte de los cuales coincidieron con la larga y nefasta jefatura del comisario Néstor Valleca al frente de la Policía Federal, cargo para el que fue designado en julio de 2004 por Néstor Kirchner.”

“Es sabido que el kirchnerismo, como antes el menemismo, ha manejado a la Policía Federal en función de sus necesidades políticas y no de una auténtica política de Estado en materia de seguridad. Recordemos que jamás se quiso cumplir con el traspaso de la Policía Federal al gobierno de la ciudad, de forma tal de complicar la gestión de Mauricio Macri.”

“Al carecer de una política de seguridad, las autoridades nacionales degradaron el combate de la delincuencia hasta llevarlo al plano de la improvisación y la acción por reacción, mientras permitían el trágico entrelazamiento entre la policía y el delito. Y ahora sólo pueden dar manotazos de abogado” (LN 24/6).

Para cualquier argentino que ha vivido un poco más allá de 2003, resulta casi cómico leer que el entrelazamiento de la policía con el delito y la corrupción comenzó con el kirchnerismo...

Pero la guerra no era sólo retórica. El día 29 el gobierno de Macri enviaba 300 efectivos de la Policía Metropolitana a la zona de la comuna 4, que integran cuatro de los barrios afectados por el desembarco de gendarmes y prefectos (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya), quedando planificado llegar a los 600, así como el desembarco en la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo).

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad anunciaba la preparación de un cuerpo especial de *“pacificadores”* para actuar en las villas, tomando como modelo al grupo especial de policías que actuó durante años en las favelas de Río de Janeiro, preparando el terreno para recuperar el control estatal de las mismas. *“Tenemos que tener policías preparados para desactivar conflictos en lugares que tienen particulares reglas de convivencia. Hay que lograr que los policías sean aceptados allí para dar un marco de seguridad a las otras áreas del Estado que deben trabajar en esas zonas, como los trabajadores sociales, los maestros y los médicos”*, explicaba la ministra Garré. El plan tiene como uno de sus objetivos que los patrullajes en las villas no se limiten a un *“cordón de se-*

guridad” para separar a unos habitantes de otros, sino que los policías puedan ingresar a la villa y caminar sus calles, con una presencia visible y permanente. Del mismo modo, se contempla que los referentes barriales jueguen un papel acercando a la policía a la población (LN 23/6).

Finalmente, se ponían en funcionamiento las mesas barriales de participación ciudadana en seguridad en los barrios porteños de Saavedra, Palermo, Liniers, Villa Urquiza, Villa Soldati y La Boca, con la participación de funcionarios del Ministerio y vecinos de los barrios, en su mayoría integrantes de organizaciones sociales. El plan se encuentra coordinado por la funcionaria Marta Arriola, quien había trabajado en el diseño de los foros vecinales bonaerenses durante la gestión de León Arslanian como ministro de Seguridad de ese distrito. “*Hay un fuerte interés y compromiso por participar en una política de seguridad que sea entendida como un proyecto colectivo*”, comentaba Garré (LN 23/6).

Hasta aquí, los hechos.

Como podemos observar, en el terreno de la seguridad, la alianza gobernante se encuentra atravesada por las mismas contradicciones que analizábamos en relación al

caso Schoklender. Frente a una política ofensiva clara del lado del Imperio, que busca intervenir en el país a través de gobernantes distritales “adictos” y con políticas de seguridad represivas —como la creación misma y las actuaciones de la Metropolitana—, se pretende dar pelea colocando en territorio porteño fuerzas de seguridad controladas por el gobierno nacional, como la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. Es decir, nuevamente, se juega en terreno enemigo y con las reglas del enemigo, buscando resolver el intrincado problema de la seguridad desde las oficinas del Estado, enviando más efectivos “propios” a cubrir las calles. Y esto, nuevamente, desnuda la escasez de cuadros políticos que jueguen contribuyendo a organizar a los barrios para darle salida política al problema de la seguridad. Del otro lado de la contradicción, se intenta abrir el juego a los habitantes de los barrios para que debatan en reuniones abiertas y se organicen en torno a los problemas de seguridad. Entre estos dos movimientos contradictorios, se halla la alianza social que conduce Cristina Fernández en el plano de la seguridad, un buen espejo para seguir el estado de la alianza en todos los demás terrenos de la vida argentina.